Suplemento Aniversario - 21 años de **Página|12**

La crisis del lockout

Para entender el terremoto



Escriben:

Eduardo Aliverti / Ricardo Aronskind / Osvaldo Barsky / Orlando Barone / Luis Bruschtein / Antonio Cafiero / Nicolás Casullo / David Cufré / Raúl Dellatorre / José Pablo Feinmann / Grupo Fénix / Ricardo Forster / Horacio González / Alejandro Horowicz / Fernando Krakowiak / Julio Maier / Diego Martínez / Daniel Miguez / Mocase / Roberto Navarro / J. M. Pasquini Durán / Daniel Paz / Martín Piqué / Mario Rapoport / León Rozitchner / Sandra Russo / Rudy / Juan Sasturain / Claudio Scaletta / Ernesto Semán / Ricardo Sidicaro / Pino Solanas / Ernesto Tenembaum / Miguel Teubal / Washington Uranga / Nora Veiras / Horacio Verbitsky / Mario Wainfeld / Alfredo Zaiat / Marcelo Zlotogwiazda

MARZO

11 El ministro de Economía Martín Lousteau anuncia un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias. El centro de la medida es que los porcentajes a retener son móviles. El nuevo marco aumenta de inmediato el impuesto a la soja y el girasol, para desalentar su producción, y reduce ligeramente el del trigo y el maíz. El Gobierno anuncia además que se tomarán medidas para la carne, las harinas y la leche, y que el nuevo sistema está previsto para cuatro años, de modo de "dar previsibilidad". Lousteau afirma que el campo sigue siendo "hiperrentable" y que el Gobierno busca defender al consumidor argentino de las subas de precios de alimentos que se registran en el mundo entero. Las entidades agropecuarias protestan airadamente por las subas.

12 Después de intenso debate, las entidades principales del campo –Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas– deciden un lockout de 48 horas. El plazo de la medida la transforma en simbólica, porque dos días no llegan a alterar la disponibilidad de alimentos en los centros urbanos ni los stocks mayoristas.

13 El ministro Lousteau critica duramente a los productores agropecuarios. Dice que el lockout es "una exageración" y que al campo "le va bien". Lousteau destaca además los notables aumentos en las cotizaciones internacionales de los granos de los últimos seis meses: 91 por ciento para el girasol, 68 para la soja, 39 para el maíz y 38 para el trigo.

El cese de actividades agrario se nota sobre todo en el mercado de hacienda de Liniers, que permanece vacío todo el día.

14 Un día de marchas de tractores por todo el país, cortes de ruta y protestas. Las entidades agrarias deciden extender su lockout por cinco días más,

15 Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, dice que "el paro podría ser por tiempo indeterminado". En el sector se vive un duro debate sobre cuánto deben durar las medidas y si debe llegar a crear desabastecimiento.

17 Día de marchas y cortes de ruta en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero.

18 El debate entre entidades rurales se define a favor de los más duros y se decide extender el lockout por seis días más. Las principales rutas del país son cortadas por los productores.

20 El Gobierno endurece su postura y anuncia que prepara el cierre de exportaciones de cualquier producto que pueda faltar en los centros urbanos. Trasciende que el primer sector afectado será el de la carne.

Siguen los cortes de ruta.

21 Hay incidentes en el corte de ruta en Pergamino. Los ruralistas denuncian intimidaciones.

22 La UIA y la CGT critican el lockout agrario y piden "calma y diálogo" al sector.

24 Los cortes de ruta paralizan el centro del país. Las entidades agrarias afirman que la medida las fortalece.

25 Al cumplirse dos semanas del lockout, Cristina Fernández de Kirchner pronuncia un fuerte discurso crítico a los empresarios del agro. Dice que "no me van a someter a ninguna extorsión" y define las medidas de fuerza como "piquetes de la abundancia". La Presidenta agrega que va a usar todos los instrumentos legales para defender el abastecimiento de alimentos.

Terminado el discurso se registran cacerolazos en varios centros urbanos del país. En la Capital comienzan en la zona norte y se extienden a otros barrios. Hay una pequeña concentración espontánea en Plaza de Mayo, que deriva en incidentes cuando se hace presente un grupo de militantes encabezados por Luis D'Elía.

El ex presidente Eduardo Duhalde envía su "eterno agradecimiento al campo" y critica las medidas del Gobierno.

26 El Gobierno ratifica las retenciones y anuncia una concentración en Plaza de Mayo. Los dirigentes empresarios del agro extienden los cortes de ruta y queman cubiertas y maquinarias en desuso. Defensa anuncia que aportará reses del Ejército para moderar el desabastecimiento. La CGT y la CTA anuncian su apoyo al gobierno en el conflicto.

Ya es notable la suba en el precio de los alimentos básicos y hay desabastecimiento, en particular de carne.

Vuelve a haber cortes de calles en Recoleta, protestas y cacerolazos en la ciudad. Losmilitantes kirchneristas vuelven a la Plaza de Mayo a "copar este lugar" y evitar una manifestación de oposición.

El Gobierno recibe un voto de apoyo en ambas cámaras del Congreso, pese a la iniciativa de la oposición de votar un repudio.

27 La Presidenta baja el tono del conflicto hablando ante su militancia en Parque Norte. Dice que "convoco al diálogo en serio" y aclara que "no se puede hacer con una pistola en la cabeza". Las entidades ruralistas evalúan levantar las medidas. Hay una concentración kirchnerista en la plaza de Mayo y cacerolazos dispersos en Barrio Norte.

Un grupo de camioneros choca con una barricada de agraristas en Laboulaye, Córdoba, después de esperar varias horas que los dejen pasar. En la pelea, un camionero es golpeado y termina inconsciente en el hospital.

Se profundiza el desabastecimiento porque los ruralistas no dejan pasar la leche fresca, como habían decidido sus representantes, y tampoco la hacienda militar.

El ex gobernador Carlos Reutemann rompe un largo silencio y se pronuncia a favor del lockout.

28 Se reúnen funcionarios y dirigentes rurales para negociar y al mismo tiempo levantan los cortes, con la excepción de la asamblea de Gualeguaychú. El primer en-

Día por día



cuentro se empantana, pese a que el Gobierno ofrece medidas diferenciadas para los productores más chicos y fondos de fomento. Los empresarios insisten en que se dé marcha atrás con las retenciones. La reunión dura más de cinco horas y termina con una invitación del jefe de Gabinete para continuar dos días después.

29 Las entidades rurales deciden retomar el lockout, lo que deja en suspenso la reunión programada para el 30 con funcionarios. El Gobierno repite que no negocia "con una pistola en la cabeza".

30 Gobierno y empresarios rurales no se reúnen. Sin embargo, las entidades empresarias del agro afirman que quieren seguir el diálogo.

31 Lousteau anuncia un paquete de reintegros para pequeños productores que para el 80 por ciento de los productores retrotrae la situación al 11 de marzo, pero es visto como insuficiente por las entidades agrarias, que insisten en el lockout. La presidente pide que protesten en la banquina y dejen pasar los alimentos a las ciudades: "Piensen como parte del país y no como propietarios del país".

ABRIL

1 El Gobierno llena la Plaza de Mayo en una manifestación de respaldo en el conflicto con los empresarios del agro. Las principales columnas son de sindicatos, movimientos sociales e intendentes del conurbano. La Presidenta es la única oradora y dice que "nunca vi en tan poco tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular".

2 Los ruralistas suspenden el lockout después de tres semanas. Se levantan todos los cortes de ruta.

10 El ex presidente Néstor Kirchner critica el lockout en un acto de la Federación de Municipios. Les pide que "nunca más hagan eso, es intolerancia", pero insiste en que hay que dialogar.

11 La Presidenta en persona se reúne durante tres horas con los dirigentes del agro. El encuentro es político y poco técnico, y sirve para descomprimir la tensión con el sector.

14 Los ruralistas se reúnen con el jefe de Gabinete y acuerdan una agenda de trabajo.

17 En medio de la humareda de los campos quemados en el Delta, se cierra el primer acuerdo entre los empresarios del agro y el Gobierno. Se reabre la exportación de los cortes de carne caros a cambio de respetar los topes de precio en los trece cortes populares.

18 El Gobierno anuncia formalmente los reintegros a los pequeños y medianos productores de soja y girasol, que buscan compensar las retenciones para la amplia mayoría de los productores del país. También se anuncia un subsidio a los fletes para las provincias más alejadas de los puertos cerealeros. La Federación Agraria, que representa a los más chicos, expresa malestar por las medidas "insuficientes".

24 Sale del Gabinete Martín Lousteau y entra en su lugar Carlos Fernández, apenas semanas antes nombrado titular de la AFIP.

Kirchner acusa a los empresarios del agro de golpista en un acto del PJ y dice que son responsables por la suba de precios y las quemas de campos.

25 La jura del nuevo ministro de Economía reúne a empresarios agrarios y funcionarios en la Casa Rosada, lo que ayuda a bajar la tensión después de un día de cruces fuertes.

28 En secreto, se reúnen dirigentes rurales y funcionarios para seguir la negociación.

MAYO

2 Las entidades rurales anuncian que retoman la protesta, pero sin cortar las rutas para que no haya desabastecimiento.

7 Tras cinco días de tensiones, encuentros y declaraciones cruzadas, los dirigentes/empresarios del agro dan por terminadas las negociaciones.

8 Hay cortes parciales de rutas y la asamblea de Gualeguaychú detiene los camiones con cargas internacionales, y anuncia que no pasarán los que lleven granos y hacienda para exportar.

11 El Gobierno impulsa en el Congreso proyectos que garanticen precios de los alimentos populares y hasta juntas nacionales de carnes y granos.

12 Los dirigentes rurales se reúnen con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que pide que se levante el lockout y las retenciones. Fracasa la reunión con el bonaerense Daniel Scioli, que los acusa de politizar el diálogo.

13 El Gobierno anuncia que va a cobrarles las nuevas retenciones a grandes exportadores que intentaron evadirlas declarando por adelantado operaciones.

14 Néstor Kirchner asume la presidencia del PJ en un acto en el que la única oradora es la Presidenta, que pronuncia un discurso moderado y conciliador, llamando a "gobernar sin rencores ni antagonismos".

15 Los dirigentes/empresarios del agro anuncian que no volverán al diálogo, que mantendrán las medidas de fuerza y harán un acto el 25 de mayo. El Gobierno critica esa decisión y repite que no se dialoga bajo presión.

22 Nuevo fracaso en las negociaciones, retomadas después de acusaciones mutuas. Los empresarios del campo dicen que no hay solución si no se bajan las retenciones a las exportaciones de granos y confirman su acto en Rosario para el 25 de mayo.

Por Raúl Dellatorre

Retenciones móviles a exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo para desalentar subas de precios de alimentos

Una intervención para prevenir la inflación

La medida recorta el beneficio que reciben los exportadores cuando se disparan los precios internacionales, como sucedió en los últimos años. Sube más fuerte la retención a la soja, para desalentar su producción y privilegiar la de maíz y trigo. También habrá medidas para carnes, harinas y leche.

Esta vez no hubo negociaciones con alguna de las partes para pisar los precios finales ni amenazas de prohibición de exportaciones, en el habitual estilo de Guillermo Moreno. El Gobierno, en cambio, se decidió echar mano a los manuales tradicionales de políticas de intervención y definió la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones de granos, que busca eliminar el impacto sobre los precios internos de las continuas alzas en las cotizaciones internacionales. "Por ahora, se trata de un reordenamiento en la base de la cadena alimentaria, pero seguirá sobre los otros eslabones, en los cuales también habrá anuncios en los próximos días para seguir trabajando en la contención de la inflación", informó una alta fuente del Ministerio de Economía, ayer por la tarde, minutos antes que el ministro Martín Lousteau hiciera público el nuevo esquema de retenciones móviles, que tendrá vigencia durante los próximos cuatro años. Las harinas, los aceites, la carne de pollo y de cerdo, y hasta la leche entran en el esquema de análisis del Gobierno y en el dibujo de un nuevo escenario de precios, en el que los incentivos y más retenciones serán parte de resoluciones prometidas para las próximas semanas.

Básicamente, lo que se resolvió ayer es modificar el nivel de retenciones a las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo para eliminar las diferencias de precios que dichos productos tuvieron desde diciembre a la fecha. Para retrotraer los precios netos para el exportador a los niveles de diciembre, Economía aumentó en 9,1 puntos el derecho de exportación hasta ahora vigente para la soja –pasó del 35 por ciento al 44,1 en promedio–, en 7,1 puntos el del girasol –lo llevó a 39,1 por ciento promedio– y redujo en 0,8 puntos el derecho correspondiente al maíz y 0,9 por ciento el de trigo –antes, en 25 y 28 por ciento de retenciones–.

El valor neto que los exportadores recibían a fines de 2007 deberá ser el mismo que recibirán por sus ventas externas a partir de ahora, cuando entre en vigencia la nueva resolución. Lo novedoso es que, a partir de ahora, un mecanismo de retenciones móviles buscará que el precio neto del exportador siga siendo aproximadamente el mismo, aunque la cotización internacional se mueva violentamente hacia arriba o hacia abajo.

En conferencia de prensa, el ministro Martín Lousteau defendió el nuevo esquema de derechos de exportación móviles, asegurando que es más eficiente para evitar el traslado del alza de los precios internacionales a los valores domésticos. Lo que queda por verse, en referencia a la mencionada eficiencia, es cuál será el comportamiento de los exportadores, y si transferirán en forma equitativa los beneficios y costos a la producción. Hasta ahora, la realidad está lejos de esos signos de transparencia. Y justamente uno de los ejes centrales de la protesta de ayer de la Federación Agraria en la zona cerealera y portuaria del Gran Rosario era denunciar que los exportadores se quedan con la parte del león en la súper renta agraria nacida en las alzas internacionales.

Otro aspecto destacado por Lousteau en la nueva instrumentación es que introduce incentivos diferenciales en favor de la producción de trigo y maíz, con niveles de retención inferiores a los de soja y girasol, como una señal en contra de la "sojización" del campo. Además, destacó, le otorga un horizonte de previsibilidad a la producción al disponer un nivel de precios netos estables durante los próximos cuatro años.

"Lo que hay que tener en cuenta son los niveles de rentabilidad, y a estos niveles de precios y con estas retenciones, el campo sigue siendo hiperrentable", destacó el ministro de Economía durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. "La inflación en el rubro Alimentos se duplicó en el mundo en el último año", indicó Lousteau. Anticipó, además, que se trabajará en medidas que otorguen incentivos al mayor uso de fertilizantes en la siembra –para aumentar la producción– y otras formas de respaldo "para los eslabones que agregan valor al producto", como podría ser alguna línea de crédito a tasas subsidiadas.

La medida ya empezó a disparar las primeras críticas, que en el Palacio de Hacienda ya descontaban antes de hacer los anuncios. Según Economía, "el problema está en las entidades tradicionales, que siempre están en la vereda de enfrente". En cambio, de los representantes de productores medianos y chicos esperan obtener mayor comprensión. "Vamos a garantizar que en la próxima campaña el productor triguero reciba el precio pleno que le corresponde", subrayó ayer Lousteau, como para ganarse la confianza de un sector que, hasta ahora, sólo recibió promesas de que iba a recibir compensaciones, que sólo en cuentagotas llegaron a sus bolsillos.

Publicada el 12 de marzo de 2008.

El próximo paso

Por Alfredo Zaiat

El Indice de Precios de las Materias Primas elaborado por el Banco Central refleja de manera contundente el extraordinario shock externo positivo para la producción agraria. Ese indicador subió 65 por ciento en los últimos doce meses, empujado por los granos. Quedarse con los brazos cruzados ante semejante alza, que se traslada al precio de los alimentos, hubiese sido lo mismo que ignorar el efecto devastador del Tequila sobre el sistema financiero y los ahorristas en 1995. En ese año, el Banco Central otorgó redescuentos, flexibilizó normas de liquidez y facilitó el cierre de bancos en algunos casos y en otros la fusión para cuidar las cuentas de los depositantes, y también las de los financistas. Como se trataba de una intervención pública de auxilio a los bancos para evitar elevados costos para mucha gente, no generó resistencia de los protagonistas ni de analistas de la city. Las retenciones móviles que ayer se anunciaron tienen el mismo objetivo: el intento de preservar el bolsillo de la mayoría de la población moderando la suba de precios de alimentos básicos frente a un impacto externo, esta vez positivo para un sector clave de la economía. A diferencia de la reacción frente al salvataje de bancos y ahorristas, en ese caso la intervención del Estado deriva en protestas de todos los colores. Si bien es cierto que ahora el sector público se apropia de una parte de la hiperrentabilidad de la producción agraria, lo hace en función de frenar la suba de alimentos. Con los bancos, en cambio, entregaba dinero al sistema financiero. Pero eran fondos que, en última instancia, el Estado reasignaba en base a un objetivo de minimizar un shock externo. Lo mismo que hoy con las retenciones móviles.

En realidad, es una medida que se imponía ya desde enero de 2006, cuando la soja, el trigo y el girasol empezaron a manifestar una tendencia decididamente al alza. También el maíz, aunque con un ajuste bajista en la primera mitad de 2007, pero con valores que hoy más que duplican los precios de comienzos de hace dos años. Como se dice, más vale tarde que nunca.

Los pequeños y medianos productores se quejarán, aunque las retenciones no son su verdadero problema en un negocio que les permite ganar como pocas veces en la historia, sino las pocas y grandes exportadoras que deprimen los precios que pagan por los granos y se quedan, por lo tanto, con la crema del negocio. Si Economía quiere avanzar en instrumentar un esquema eficiente de intervención en la estructura de las rentabilidades relativas, no debería limitarse a las retenciones móviles y por tipo de grano, sino también al interior de la cadena de cada uno de ellos. Hoy, con retenciones fijas, y mañana, con móviles, el cartel de los exportadores de cereales sigue exprimiendo a los productores. Poner orden en ese eslabón debería ser el próximo paso.

Publicada el 12 de marzo de 2008.

Estabilizador automático

Por Claudio Scaletta

Las retenciones tienen significados muy diferentes según el lugar ocupado por el interlocutor. Si se trata de un productor agropecuario el juicio es previsible: la diferencia entre el precio internacional y su ingreso será siempre un desagradable impuesto. Uno más entre tantos. Pero desde la óptica de los hacedores de la política económica no importan solo los ingresos. Recaudar no es la única función de los tributos.

A partir de la salida del régimen de convertibilidad, cuando las retenciones a las exportaciones comenzaron a ser un componente estructural del nuevo modelo económico, la justificación de las retenciones fue repetida hasta el cansancio. Los objetivos eran múltiples y macroeconómicamente virtuosos. Se aseguraba el superávit, pero también se contribuía a la escisión entre los precios locales y los internacionales. Tras la devaluación, sus efectos resultaban claves. Cualquier desborde inflacionario podía socavar las bases mismas de la nueva estructura de precios relativos.

Hasta cierto momento las retenciones cumplieron su cometido estructural, pero el escenario cambió radicalmente. En 2002 nadie imaginaba que el contexto internacional sería tan favorable durante tanto tiempo. Tampoco que el diferencial de ingresos que se llevaban las retenciones sería, una y otra vez, compensado por la suba de las cotizaciones internacionales de las commodities. Pocos imaginaban, además, que la superrentabilidad de la soja continuaría, a pesar de las retenciones, desequilibrando la estructura agropecuaria local.

El mismo gobierno que, a través de las retenciones móviles, reaccionó para contrarrestar el terremoto que hubiese provocado dejar que la suba del precio internacional del crudo se trasladase a los precios internos, dejó en cambio que la presión continuara aumentando en el campo. Dejar fijas las alícuotas de las retenciones agropecuarias significó mantener el escenario de conflictividad con la siempre descontenta dirigencia agropecuaria. Establecer su movilidad significa, en cambio, introducir un "estabilizador automático" luego de un año que, como el 2007, será recordado por el explosivo aumento de las cotizaciones internacionales.

Desde una perspectiva política se consigue restar conflictividad –excluyendo, por supuesto, el pico inmediato– a la vez que se suma previsibilidad a futuro. En un contexto internacional tanto de alza como de volatilidad en las cotizaciones, se recuperará la separación entre la rentabilidad interna y las fluctuaciones externas. Las conflictivas correcciones periódicas ya no serán necesarias.

Desde una perspectiva estrictamente económica y estructural el esquema anunciado agrega un componente adicional: discrimina a favor de los cereales y contra las oleaginosas. La baja anunciada para el trigo y el maíz es de sólo 0,8 por ciento, una diferencia marginal que no tendrá efectos sobre los

Dar vuelta la soja

Rebautizo para piquetes y lockouts. Los motivos de enojo de las entidades “del campo”. Broncas añejas. El reclamo por pequeños y medianos, las promesas oficiales. La camiseta de un sojero del interior y sus bemoles. Un mercado que no es mercado, una cadena despareja. Más una vindicación de la caja y de las opciones políticas.

Por Mario Wainfeld

Un lockout se nombra con la proletaria expresión “paro”. Un corte de rutas expandido se bautiza “tractorazo”. Se llama “campo” al conjunto de entidades representativas de los productores, excluyendo tácitamente del pronombre colectivo a los castigados asalariados. Hay pactos implícitos entre sectores corporativos y muchos medios de difusión que denotan la imbricación entre el poder y el manejo del lenguaje, como predicaron Lacan y Humpty Dumpty.

Cuando los trabajadores –ocupados o desocupados– apelan al piquete o a la huelga, proliferan como hongos los reproches a la falta de imaginación de la protesta y los cálculos a mano alzada sobre los costos económicos de la acción. Cuando obran así corporaciones más presentables, se soslayan. Sin embargo, a ojito, da la impresión que un lockout no es muy inventivo. Y que cortar rutas en la Argentina no es el colmo de la creatividad. Pero son pocos los que registran minucias.

Cuando se levantan los productores se decide que su bronca prueba que tienen razón. No es igual con la crispación de los camioneros o los petroleros de Santa Cruz.

Cuando las entidades agropecuarias limitan la libertad ambulatoria, los diarios de negocios o tribunas de doctrina abandonan su estribillo favorito, aquel que reza que “los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás”.

El cronista preconiza la tolerancia a las medidas de acción directa y de ocupación del espacio público, modalidades inherentes a una democracia plena. El jurista Roberto Gargarella suele añadir un matiz profundo, que va contracorriente: a mayor desposesión del reclamante, mayor debe ser la tutela legal. En el sentido común mediático, la jerarquía valorativa funciona al revés: los tractorazos (como los numerosos cortes emprendidos por sectores medios y altos) tienen mejor reputación que los piquetes encarnados en cuerpos sufrientes.

■■■

La caja se la banca: La fijación de retenciones móviles por cuatro años, pregona el Gobierno, cumple un reclamo de las entidades representativas de productores agropecuarios (a las que, para ahorrar espacio, llamaremos “el campo”, entrecomillado).



El Gobierno (suele sucederle) tiene razón en las grandes líneas y su punto es más controversial cuando se llega a la sintonía fina. La política económica del kirchnerismo es un combo (bastante simple) de intervenciones estatales. El dólar competitivo, la relativa (comparada con países limítrofes) baratura de los combustibles líquidos no son obra de la gracia divina, sino decisiones de política pública. Para concretarlas, bien o mal, hace falta dinero. La devaluación y la licuación de las deudas de fin del siglo pasado de los productores fueron maná para un sector que se atribuye todos los méritos de una época impar, a la que el esfuerzo colectivo y la acción estatal aportaron una cuota determinante.

Es habitual en estos días despotricar contra el afán fiscal de “hacer caja”. Las palabras, nuevamente, juegan su rol. La palabra “caja” destituye, huele a turbio. Vaya para ella un desagravio modesto: hace bien el Gobierno en tratar de recaudar mucho, que es su modo de generar poder. Hace bien en acrecentar la esfera de lo público, el espacio de la política. Esa enunciación general no implica consenso con cada una de sus acciones (ni con el porcentual de las retenciones) pero el sesgo es, en la mirada valorativa del cronista, correcto.

“El campo” mira el escenario y entra en cólera, tanta que es notorio que se añejó con anterioridad. Una decisión que implica básicamente soja, trigo y maíz, levanta la reacción de los tamberos y los ganaderos. No son afectados directos, se suman por otras cuitas: actualizan malas ondas mutuas ya enquistadas. El dato muestra una endémica flaqueza oficialista, su dificultad para articular y mantener relaciones de tracto sucesivo.

“Los juntamos a todos en contra nuestro” reconocen legisladores y gobernadores oficialistas de provincias concernidas. Hermes Binner calla, diríase de modo estentóreo. Los mandobles del Gobierno dejan poco margen a quienes bregan por convivencias políticas razonables pero no por alineamientos automáticos.

■■■

Broncas nuevas y añejas: Los productores se embanderan en nombre de sus grupos más desprotegidos: los consabidos pequeños y medianos, los más alejados de los puertos. Con mayor o menor legitimidad, la Sociedad Rural o la Federación Agraria Argentina se valen del chaqueño o el formoseño que tiene 300 hectáreas y cultiva soja, con una estructura de costos más peliaguda que Grobocopatel. Reniegan por la falta de capacidad de diálogo del Gobierno, por sus decisiones improvisadas e inconsultas. Señalan que la universalidad de las retenciones perjudica a los más débiles. Y que al fijar un precio máximo por cuatro años, se sanciona una ganancia decreciente, si se mantiene la alta cotización de los commodities: el precio está fijo pero los costos crecerán en ese lapso. Los insumos, ni qué decir. Y aun los bajísimos sueldos pagados a menudo en negro a los laburantes, tal como desmenuzó ayer Alfredo Zaiat en este diario. “Nos condenan a la convertibilidad de la soja”, aducen, sindicando al Gobierno de prácticas noventistas.

En forma más baja se acusa al oficialismo de favoritismo en pro de actores concentrados, casi todos ellos del sector industrial, un reproche que tiene su miga, aunque también remite a bregas añosas. Las aceiteras y algunos frigoríficos sacan ventajas indebidas, acusan. El diputado-lobbista aceitero Roberto Urquía acumula reproches por su doble rol, más que atendibles.

“El campo”, como casi todas las representaciones corporativas nacionales, se fragmenta en demasiadas organizaciones, de no sencilla lectura. El TEG de estos días es curioso. Las más enfurecidas contra el Gobierno son Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria (FAA). La Sociedad Rural (SRA) y Coninagro lucen más transigentes.

■■■

Secuencias: “Hay mucho doble discurso –fumigan desde el primer piso de la Casa Rosada–. Cuando Eduardo Buzzi (titular de FAA) viene acá, pide medidas ultraintervencionistas, como la reapertura de la Junta Nacional de Carnes y de Granos. Y después dice barbaridades porque subimos los impuestos.”

La aplicación de las retenciones móviles es defendida por el oficialismo, como un primer paso. “Nos pedían previsibilidad, la dimos. Ahora, con el escenario determinado, es el momento de articular las compensaciones y los incentivos.” El coro entona la misma melodía, en Economía y Jefatura de Gabinete. “Es cierto que los más chicos quedan más apremiados pero son tales las asimetrías internas y los márgenes de ganancia de los grandes que es imposible promover medidas que mejoren a todos”. “Lo que falta es lo que queremos conversar: el plan agrario, el plan ganadero, el plan lácteo.” La enumeración se excita: “Ahora hay que meter diálogo y gestión. Posibilitar los créditos del Banco Nación, el subsidio a los fertilizantes, los subsidios para zonas marginales”. El Gobierno redobla su relato de buena voluntad: está en gateras, juran, un reclamo sectorial: una subsecretaría para los productores regionales ya transita el último tramo del iter administrativo, antes de salir a la cancha.

“El campo” refunfuña que esas promesas jamás se honran.

■■■

Asimetrías: Lo venimos asumiendo: “el campo” no es todo el campo, el “tractorazo” es en verdad una variante de piquete. En consonancia, el mercado (¡ay!) no es tan mercado. Las diferencias entre sectores, la concentración, los oligopolios impiden tomarse a pecho los modelos ideales del compañero Adam Smith.

Las “cadenas” unen malamente eslabones muy misceláneos: tamberos, grandes empresas lácteas, supermercados, exportadores. “Cien molinos, siete exportadoras” son el elitista embudo donde desemboca la producción triguera, según una voz prominente del Gobierno. Ya es hora de poner las manos en esa masa, preconiza. No computa el pobre desempeño del kirchnerismo respecto de la concentración económica. La tendencia es muy poderosa pero también la sustenta su obrar: pactos coyunturales sobre precios, firmados de arrebato, son más fáciles de urdir con grandes formadores de precios. Su peso relativo, su margen de ganancias, sus posibilidades de planificación a plazo largo los tornan socios más atractivos (ad hoc) que los pequeños y medianos. La contrapartida inconfesa es cimentar lo que, se supone, habría que desalentar.

■■■

Vengan al pie: El Gobierno reconoce que queda mucho por hacerse, mas se precia de haber puesto orden, “ahora se puede discutir para adelante”. Espera el final de las medidas de fuerza para retomar las conversaciones, bajo las nuevas reglas.

Las retenciones, que persiguen fines fiscalistas y de estabilización de los precios domésticos, agregan otras funciones según el discurso oficial. Una de ellas es ir desalentando la sojización, incentivando otros cultivos que vienen siendo desplazados. El chaqueño-sojero (tan usado como emblema) podría rotar su producción pero es patente que ni lo intentará si no recibe incentivos muy tonantes. La denostada “caja” debería hacerse notar y direccionarse. Esas promesas, rezongan las gremiales de propietarios agropecuarios, jamás se honran.

Otro efecto que prevén en Economía, menos explícito, es un freno a la espiral de precios de la propiedad rural. “En estos años el valor de la tierra subió entre 400 y 500 por ciento, en dólares”, justiprecian. El impacto se traslada a los arrendamientos, que trepan por el mismo ascensor. “Hay hipocresía de los rentistas, que ganan fortunas y después hablan en nombre de los chicos”, se encocoran en derredor de Cristina Fernández.

■■■

Superrentas: El Gobierno puso su parte con un “modelo” productivo pro exportador, manteniendo la cotización del dólar, blindando la economía contra la crisis financiera desatada en el centro del mundo.

“El campo” reaccionó avispado tras años de parálisis en los que pataleó mucho menos (y menos en grupo), se tecnificó, sacó tajada de la oportunidad.

Las virtudes de ambos no explican la superrenta actual, fundada en la exorbitante cotización internacional de los productos primarios. Dios se naturalizó argentino y agropecuario, tras una larga licencia. Brotó una renta diferencial, ajena al mérito directo de los actores, que obliga a una definición política, en alguna medida ideológica: ¿se la socializa parcialmente o es apropiada individualmente por el sector beneficiario? Casi no hay país en la Tierra, en condiciones similares, que les haga asco a las retenciones y que no las aumente, de vez en cuando. Ya se dijo, esa opción no está escrita en libros sagrados sino que depende de la postura del gobierno en cuestión. A grandes trazos, para este cronista, el rumbo señalado por el Gobierno es correcto. De ahí a suscribir su modo de negociar, de articular y de planificar media (¿cómo no usar esa módica imagen?) un campo.

Las partes volverán a negociar y es bueno que sean los representantes del pueblo, surgidos de elecciones libres, los que tengan el sabot.

El Acuerdo social o el Pacto del Bicentenario, invocados en sucesivos discursos de la Presidenta, siguen siendo objetivos encomiables sin concreción tangible, sin diseño estratégico, sin consensos que los sustenten, sin ámbitos plurales en representación y en saberes que los elaboren, refinen y debatan. Desafíos de una segunda etapa ulterior a (y cualitativamente distinta de) la emergencia del infierno, que exige destrezas diferentes, todavía no demostradas.

Publicada el 16 de marzo de 2008.

precios internos, como sí hubiese ocurrido con una rebaja efectiva de la alícuota. Esta rebaja simbólica es sólo una señal. El efecto vendrá por el lado del aumento efectivo de más de 9 puntos en las retenciones a la soja, lo que adicionalmente será un aporte extra a la recaudación.

Restarle competitividad a la soja será el verdadero aporte a la producción de cereales. Si bien la soja no es uno de los alimentos cuya exportación compite con el consumo local, su superrentabilidad en los últimos años produjo fuertes desequilibrios. El área sembrada nunca dejó de crecer, muchas veces en desmedro de otras producciones, no sólo de los cereales sino también de la ganadería y la lechería.

En materia de inflación se corrigen desequilibrios y se eliminan volatilidades. También se envían señales para mejoras en la oferta. Resta todavía arreglar el termómetro.

Publicada el 12 de marzo de 2008.

Política y retenciones

Por Marcelo Zlotogwiazda

Las retenciones son un instrumento que puede ser aplicado para alcanzar en forma no excluyente los siguientes tres objetivos. En la medida en que reducen el precio neto que se recibe por exportar, achican el valor mínimo al que el empresario está dispuesto a vender internamente productos que podría colocar afuera de manera casi ilimitada, como sucede con las materias primas y los commodities que exporta la Argentina (soja, aceites, trigo, maíz, petróleo, nafta). En segundo lugar, y como cualquier otro impuesto, las retenciones pueden tener un fin recaudatorio. Y, por último, dado que modifican los precios relativos, sirven como señal e incentivo a favor para la toma de decisiones.

A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.

Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de "hiperrentabilidad", y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.

No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: "si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más".

Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las "ventajas" técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.

Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.

La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.

La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado "Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial", que publicó la revista *Entrelíneas* del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que "es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja" en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan "diversificar la estructura productiva".

Publicada el 16 de marzo de 2008.

Con el peronismo, todo es cuestión de clase

Por Mario Rapoport *

Es un conflicto que ha ocurrido muchas veces entre el campo y el peronismo. Pasó en el primer gobierno peronista con el Estatuto del Peón Rural. O el paro de 18 días al gobierno de Isabel Perón en 1975. Es paradójico cómo cuando medidas similares las toman gobiernos de posiciones ideológicas más cercanas al pensamiento rural las reacciones son distintas. Por ejemplo, en el gobierno de Frondizi, con Alvaro Alsogaray como ministro de Economía, ante una situación de crisis, se vuelven a imponer retenciones y los sectores rurales no protestaron. Y en 1967, cuando Krieger Vasena también impone altas retenciones, la Sociedad Rural dice 'no estamos de acuerdo, pero respetamos las decisiones del gobierno en el marco del interés nacional'. Lo mismo pasó con Menem, con sus ministros Domingo Cavallo y Roque Fernández, que destruyó el agro, pero era aplaudido en la Rural. Es decir que, si el gobierno es de corte neoliberal, aunque pierdan plata, lo aplauden. Si es peronista, aunque ganen, son capaces de todo para oponerse. Es una cuestión cultural: casi diría de clase. La sojización trae una pérdida de la capacidad futura de la tierra. Pero quiero llamar la atención sobre algo que parece que los productores no leyeron bien. Hasta antes de la implementación de las retenciones móviles los productores no estaban cubiertos ante eventuales caídas de los precios, ahora sí. Se crea una situación de mayor flexibilidad de los precios de exportación que no existía hasta este momento. El Gobierno leyó bien la crisis internacional y los tuvo en cuenta. Eso los beneficia. Por supuesto que yo he expresado mis dudas en cuanto a los pequeños productores o en cuanto a determinadas regiones que se verían perjudicados con este nivel de retenciones. No van a perder plata, van a perder de ganar. En ese caso se puede aplicar parte de estos nuevos beneficios fiscales dando subsidios a estos sectores, como hacen en la Unión Europea o Estados Unidos, que tienen políticas especiales para determinadas regiones. No quieren despoblar ciudades ni descuidar poblaciones.

* Economista UBA.

Publicada el 22 de marzo de 2008.

La soja, un tema aparte

Por Osvaldo Barsky *

Las retenciones juegan distintos roles, todos muy importantes, pero hay que ser precisos y no confundir a la gente. El primero es el superávit fiscal, que no es un tema menor. De hecho le sirve al campo porque mantiene un dólar alto. Además, al bajar el precio de las ventas al exterior, mantiene a raya los precios internos de productos de primera necesidad. En el caso del trigo, por la harina, el pan, los fideos y otros productos. El maíz alimenta a los pollos, los chanchos y ahora también al ganado vacuno. Con el girasol se hace el aceite que más se consume en el país. Pero la soja es un tema aparte. Es necesario aclarar que prácticamente no forma precios de alimentos en el país. Sólo un 5 por ciento queda acá y es usado para complemento alimentario de animales. No veo razón para parar la soja. Ni por precios internos ni porque frene el desarrollo del resto de los granos. En realidad, bajar las retenciones del maíz y el trigo sí puede causar aumentos de precios internos. La Argentina necesita más maíz, más girasol y más soja y está en condiciones tecnológicas de hacerlo. Porque con la expansión de los nuevos cultivos y la extensión de la zona geográfica se puede hacer. El trigo es complementario de la soja. Se siembran en épocas distintas. Además, ahora se pude sembrar en Formosa, Chaco, Tucumán y otras provincias. Por otra parte, ahora se utiliza el feed-lot: se engorda el ganado con maíz y otros alimentos suplementarios en la región pampeana. O sea que no hay menos carne por la soja. El stock ganadero creció en 5 millones. Ahora está en 55 millones de animales. Hay nuevas razas de origen cebuinas, que vienen del cebú, del norte. Se está expandiendo todo al mismo tiempo. No estoy de acuerdo con que hay que parar un grano para que crezcan otros. El problema de la leche es, por un lado, el factor climático y, por otro, que en la zona pampeana la soja la desplaza. En este caso harían falta fuertes subsidios, principalmente para los pequeños tambos. No hay que trabajar con promedios. Los grandes con 83 centavos están bien; el resto no. Un tema muy importante es que nadie explica para qué se va a usar la plata. Por qué no lo usamos en desarrollo científico para asegurarnos el futuro. O para desarrollar el sistema ferroviario.

* Investigador principal del Conicet.

Publicada el 22 de marzo de 2008.



La Rural se va a la guerra en 4x4

El Desafío

En un momento de extraordinaria rentabilidad la Rural se rebela contra una de las medidas más racionales que el Gobierno adoptó en defensa del conjunto de la sociedad y de los propios productores agropecuarios. Junto con la inflación es parte de la puja distributiva. Desde el lockout de la APEGE que desembocó en el golpe del que mañana se cumplirán 32 años, el poder económico no planteaba un desafío semejante al sistema político. Cómo contestarán Moyano, D'Elía y el PJ.

Por Horacio Verbitsky

La medida de fuerza de la Sociedad Rural con el apenas disimulado propósito de desabastecer de alimentos a las grandes ciudades, y el persistente aumento de precios son dos caras complementarias de la puja distributiva y plantean el mayor desafío del poder económico al sistema político y a las clases subordinadas, desde el paro de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias de febrero de 1976, que desembocó en el golpe del que mañana se cumplen 32 años. La prohibición de exportaciones en caso de que las entidades patronales resuelvan continuar con el lockout pondría a prueba quién resiste más. Es improbable que los potentados del campo consigan que otros sectores los compadezcan por el límite que el gobierno impone a su rentabilidad sin precedentes. Pero en caso de desabastecimiento, el malestar puede alcanzar también al Gobierno. Luis D'Elía citó una frase histórica: "A la fuerza brutal de la antipatria, opondremos la fuerza del pueblo organizado". Justo y bello, pero ¿existe tal organización popular?

Piquetes paquetes

La APEGE de 1976 reunía a las principales cámaras patronales de todos los sectores y exigía "la rectificación total de la filosofía política, económica y social". El movimiento actual es conducido por las entidades del sector agropecuario y sólo reclaman que se anule el mecanismo de retenciones móviles y progresivas a las exportaciones de granos. Pero si se escuchan los discursos en los cortes de rutas y se atiende a los foros de lectores de la prensa militante que los acompaña, hablan de pintarse la cara para la guerra, de hartazgo con el gobierno, e incluso del "principio del fin del kirchnerismo". Para contextualizar de qué se trata: las páginas de La Nación sobre el lockout lucen un aviso de automóviles suecos Volvo, en oferta desde 36.900 dólares. El desborde emocional tiene para algunos sectores más peso que sus propios intereses. En febrero de 1976 se plegó al cese de actividades la CGE, que después del golpe de marzo fue perseguida y cuyos dirigentes históricos, José Gelbard y Julio Broner, debieron exiliarse, mientras un representante típico de la oligarquía diversificada, José Alfredo Martínez de Hoz, asumía el ministerio de Economía para producir la más profunda remodelación social.

(Continúa en la página 8)



(Viene de la página 7)

Sus beneficiarios defienden en las rutas el país dual que se afirmó entonces. Ahora participa en forma activa la Federación Agraria, cuyo líder, Eduardo Buzzi, es uno de los partidarios más extremos de prolongar y de radicalizar la medida porque "ya no tenemos nada que perder" (sic). Como la Unión Cívica Radical entonces, la Coalición Cívica Libertadora se subordina ahora a los intereses económicos más concentrados y sus dirigentes buscan calor popular en los piquetes paquetes, con consignas como la de Elisa Carrió, para quien el Gobierno "le roba al campo". Los chacareros no exportan ni pagan retenciones. Pero su entidad actúa como ariete de quienes les trasladan ese costo adicional y enfrentan una de las medidas más racionales adoptadas por el gobierno en defensa del conjunto de la sociedad. El contexto es tan poco comparable como el declinante gobierno de Isabel Perón con el flamante de CFK. El actual tiene los recursos para responder al reto, siempre y cuando identifique con precisión la índole del problema.

El espejo brasileño

Las retenciones captan para la sociedad parte de las rentas extraordinarias debidas a la coyuntura internacional. Esos instrumentos redistributivos han mejorado la composición de los ingresos tributarios por el incremento de los impuestos directos que, lejos de trasladarse a los consumidores, contienen los precios cuando se trata de productos que también se consumen en el país, como los hidrocarburos, los lácteos, la carne y el trigo. En el mismo mercado mundial y con una producción agropecuaria similar, Brasil ha tenido un crecimiento económico casi tres veces inferior al argentino. Eso obedece a decisiones políticas, que se reflejan en el valor de las respectivas monedas, casi de 2 a 1. Sumando a la ecuación los subsidios al transporte y al combustible, aun con las nuevas retenciones los productores argentinos tienen mayor rentabilidad que los del Brasil. Por supuesto hay diferencias según la escala y la ubicación de cada unidad productiva y el Estado debería prover nuevos alivios a los pequeños agricultores. Luego de una década de hipotecas y remates a precio vil, la refinanciación de sus deudas por el Banco Nación, a largo plazo y baja tasa, les abre un panorama más alentador. El precio de la tierra agrícola ha crecido en forma espectacular y tienen el recurso de alquilar sus campos, mientras estudian asociaciones que mejoren su escala. Alguien que, como Buzzi, integró el Frente Nacional contra la Pobreza no tiene justificación ética ni política para alinearse con quienes no imaginan otra respuesta pública a la pobreza que la represión de sus víctimas. No conduce, lo arrastran por un camino del que es difícil salir.

En busca del equilibrio

Como la soja no integra la dieta local y su alto precio externo no afecta el salario, los voceros de la Sociedad Rural afirman que el único objetivo del Gobierno es aumentar los ingresos fiscales. Esta objeción, irónica en defensores tradicionales del rigor fiscal, ignora que el incremento del precio de la soja y, en consecuencia, de la tierra, se combinan en un círculo virtuoso para los grandes propietarios pero vicioso para la sociedad. El alza de las retenciones provoca el efecto inverso. En este momento los campos pampeanos superan en dólares el precio de las mejores tierras productivas de Estados Unidos. Cuanto más crezca su precio, mayores estímulos habrá para producir sólo soja, en vez de los alimentos que se consumen en el país, cuyos precios también aumentarán. Quienes objetan el carácter móvil y progresivo de las retenciones señalan que los ingresos de los productores serán erosionados por la inflación. Esto pone en un pie de igualdad con el resto de la población a los grandes productores, cuya participación en el aumento de precios internos no es irrelevante.

Mitos y realidad

Un trabajo de Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo publicado en el número 177 de la respetada revista académica Desarrollo Económico refuta el mito de que los grandes terratenientes habrían dejado de ser el agente económico central, en beneficio de "un nuevo estrato de propietarios medianos grandes innovadores y asentados en la producción agrícola, es decir una suerte de farmers locales", en tierras arrendadas. Tampoco avala la supuesta extranjerización de la tierra agrícola.

Algunos de los fondos de inversión agrícola y de los pools de siembra, que alquilan la tierra e incorporan a la producción agropecuaria capitales extrasectoriales, alcanzan un tamaño medio equivalente al de los grandes terratenientes bonaerenses. Pero la superficie agropecuaria total que concentran es poco significativa: según datos de 1996 apenas el 8 por ciento de la superficie se trabajaba mediante formas de tenencia ajenas a la propiedad. Y a diferencia de lo que ocurre en las finanzas, la industria, los servicios públicos privatizados y otras actividades primarias que generan renta (petróleo, gas y minería) la presencia del capital extranjero era irrelevante, no más del 4 por ciento sobre el total de la compraventa de tierras. Cualquier afirmación sobre lo sucedido desde entonces es impresionista, porque no hay estudios. Recién cuando termine la odisea del Indec, los datos del último censo agropecuario actualizarán esa fotografía.

Los propietarios rurales bonaerenses con 2500 o más hectáreas, que en casi todo el siglo pasado se concentraban en la ganadería y les arrendaban grandes extensiones a los pequeños y medianos productores para la producción agrícola, ahora desarrollan ambas actividades por su cuenta y riesgo, lo cual les permite ejercer una incidencia decisiva en diferentes entidades y no sólo en la Sociedad Rural. Son ganaderos desde el punto de vista del uso de la tierra, pero agrícolas en términos del valor de producción. Esta asimetría se debe a los precios relativos vigentes en el agro, que el incremento de las retenciones intenta corregir.

Basualdo y Arceo destacan que las transformaciones productivas y tecnológicas son adoptadas por los grandes terratenientes tradicionales. Esos grandes propietarios no son precapitalistas, como creía el libresco Partido Comunista, sino por el contrario la vanguardia de todas las innovaciones, tanto tecnológicas como en las formas de propiedad, y poseen capacidad financiera para aplicarlas. La clase social decisiva en la historia argentina no se desvaneció en el aire sin que nadie lo advirtiera, pero parte de su know-how es hacerlo creer. Sigue siendo el sector hegemónico de la burguesía realmente existente, aquella capaz de alinear a las demás fracciones del capital en torno de sus intereses.

Las causas del fenómeno

El otro campo de batalla escogido por el capital más concentrado es el de la inflación. Dentro del gobierno hay lecturas distintas sobre las causas del fenómeno, que todos niegan en público. Para un sector, que ha ganado la atención del ex presidente Kirchner, se aquietará cuando culmine el reacomodamiento de precios relativos luego de la devaluación. Para otro, al que se afilia el jefe de gabinete Alberto Fernández, hay un exceso de demanda, que requiere un cierto grado de enfriamiento de la economía. Esto es difícil de sostener, cuando se constata por mediciones privadas en una de las principales cadenas de supermercados que los mayores aumentos se produjeron en alimentos como la polenta (159 por ciento en los últimos ocho meses) y las legumbres secas (112 por ciento), de consumo por los sectores más pobres, sin capacidad de demanda que pueda convalidar semejantes incrementos. Un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, CENDA, propone una tercera alternativa, que es la marcada estructura oligopólica de la economía. Según sus investigadores, en el caso de los bienes tran-sables las retenciones sobre todas las exportaciones son una opción más efectiva y menos vulnerable que los denominados acuerdos de precios. En el de los no transables no hay otra posibilidad que el control de precios. "De otro modo", escribieron hace un año y medio, la ortodoxia amenaza con la "inflación reprimida". Pero no sería una inflación monetaria, salarial, de demanda o cambiaria, sino "como expresión de una inflación de ganancias extraordinarias". Es lo que sucedió.

Tierra arrasada

La política de tierra arrasada en el Indec se explicó por las conveniencias de un año electoral. Pero hoy no cumple ninguna función útil y roe la credibilidad del gobierno no sólo respecto del IPC. La presidente tiene a consideración dos proyectos:

1. El secretario de Comercio Guillermo Moreno propone substituir en el cálculo los bienes y servicios que más aumentan. La consecuente resignación de niveles populares de consumo permitiría estabilizar la inflación en los satisfactorios indicadores del Paraguay de Stroessner o el Haití de Duvalier. También contempla medir sólo los consumos de la franja más austera de la sociedad, que no conoce educación privada ni medicina prepaga. Tiene un atractivo inmediato pero es muy peligrosa a largo plazo, porque aumenta la ponderación de los alimentos, que están aumentando más que el promedio, y no sólo en la Argentina.

2. El ministro de Economía Martín Lousteau y el jefe de Gabinete Fernández mantienen el índice de precios al consumidor de nivel general, y sólo suprimen algunos consumos típicos de la convertibilidad, como las flores de Colombia o el turismo en Cancún. Además se confeccionarían índices específicos de otros sectores sociales. Ninguna de estas alternativas da cuenta del problema de fondo: la inflación expresa la decisión del

capital más concentrado de limitar la recuperación del salario que comenzó en 2003. Una vez que su nivel se acercó al de 2001, las mayores firmas no permitieron nuevos avances. La única manera de impedir que sigan erosionando los ingresos populares es atacar la estructura oligopólica en la producción y comercialización de los bienes esenciales, y operar sobre las cadenas de valor. Pero en vez de adoptarse medidas en defensa de la competencia se autorizan fusiones que refuerzan la indefensión ante los aumentos de precios. El Estado tiene los mejores expertos en cadenas de valor, pero nadie los ha consultado.

As de cartón

La ineficacia del pintoresco secretario Moreno desacredita la legítima e imprescindible intervención estatal. Luego de una visita a Puerto Madero, el secretario de la CGT, Hugo Moyano, dijo que Moreno defendía las intereses de los trabajadores. Pero en realidad Moreno convalida la estructura oligopólica con el asombroso argumento de que si son pocos es más fácil controlarlos, y sólo acuerda medidas distractivas de desinformación. Los supermercados avisan en grandes títulos precios reducidos de diversos productos. Luego de esas ofertas sigue un asterisco. Una minúscula nota al pie informa que se trata de pocas unidades. Por encima de esa cantidad, el precio puede triplicar el anunciado. De hecho, según la medición citada, la canasta básica de alimentos aumentó un 25 por ciento entre julio pasado y marzo de este año. De ese orden es el nivel de aumentos obtenido por los gremios más fuertes, como el de Moyano. Pero los más débiles no tienen esa posibilidad. Esto está reforzando la desigualdad incluso dentro del sector de trabajadores privados formales, donde es de 7 a 1 entre extremos. El salario promedio privado creció más del 21 por ciento entre diciembres de 2006 y 2007, lo que implica una mejora de unos 4 puntos de poder adquisitivo sobre el costo real de vida. Pero esa masa salarial se distribuye en forma desigual: el 20 por ciento de los trabajadores formales privados se apropia de la mitad, mientras el 30 por ciento del extremo inferior no llega a percibir ni el 10 por ciento. Los primeros reciben sueldos promedio que pasan de los 5.000 pesos mensuales; los segundos, de 700 pesos, equivalente al del 40 por ciento de los trabajadores informales. Blancos y negros ya no constituyen la división principal.

Los errores del pasado

El diputado nacional Carlos Kunkel homenajeó a los trabajadores víctimas de la dictadura junto con Moyano y abominó de la "dramática lucha interna" de los años 70, que "abrió el camino a la dictadura". Es inteligente no repetir los errores del pasado, pero peligroso no advertir los del presente. En el mismo acto, Kunkel dijo que sólo la CGT constituía el "movimiento obrero organizado" y "columna vertebral" del peronismo. Esta frase ratifica el desdén con que la presidente trató a la mesa directiva de la CTA durante la audiencia de febrero, cuando descolocó a su secretario general, Hugo Yasky, ante los opositores internos que quisieran adoptar la retórica de Buzzi y Carrió. Fue la presidente quien le pidió a Kirchner que se hiciera cargo del Partido Justicialista, para no dejarlo en manos de quienes ni siquiera ocultaban su intención de organizar un marzo caliente. Pero de allí a las sobreactuaciones, como el discurso pronunciado por CFK delante de un enorme cartel que decía simplemente "Moyano conducción", hay un largo trecho. Sustentar las alianzas políticas en el 20 por ciento mejor pago de los trabajadores privados formales, que no luchan por la subsistencia sino por elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y en una dirigencia partidaria que sólo sobrevivió gracias a la heterodoxia y el hiperactivismo kirchnerista, no son opciones sin consecuencias, a la hora del desafío de las 4x4.

Publicada el 23 de marzo de 2008.



La producción aumentó de 69 a 95 millones de toneladas en seis años

El que no llora no mama

Cuando se restablecieron las retenciones en 2002, los chacareros aseguraron que su rentabilidad desaparecería. Lo mismo repitieron cada vez que el Gobierno subió la alícuota. Sin embargo, la producción aumentó notablemente y ganaron millones.



Por Fernando Krakowiak


AFP

Los chacareros aumentaron la producción incentivados por el tipo de cambio.

A comienzos de 2002, los dirigentes rurales resistieron el restablecimiento de las retenciones agrícolas argumentando que dejarían sin rentabilidad al campo y provocarían una brusca caída de la producción. El mismo argumento repitieron todas las veces que el Gobierno decidió subir la alícuota. Sin embargo, los pronósticos apocalípticos no se cumplieron. Los chacareros aumentaron la producción de manera espectacular incentivados por el tipo de cambio alto y la suba de los precios internacionales. A continuación se expone el contraste entre un discurso que los ha venido mostrando al borde de la extinción y una realidad donde las ganancias siguieron apuntaladas por la soja.

Luego de la devaluación, comenzó a cobrar fuerza en el gobierno de Eduardo Duhalde la posibilidad de aplicar retenciones a las exportaciones agrícolas para financiar planes sociales. Las entidades del campo y la industria alimentaria se venían venir la medida y a fines de febrero de 2002 ofrecieron un único aporte voluntario de 1500 millones de pesos poniendo como condición para el desembolso que no les aplicaran retenciones. "Queremos colaborar con el país", aseguró el entonces titular de la Sociedad Rural, Enrique Crotto. La jugada "caritativa", que contaba con el guiño de varios obispos católicos, no prosperó y el 4 de marzo el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunció la aplicación de un 10 por ciento de retenciones para los productos primarios y 5 por ciento para las manufacturas agropecuarias. La medida motivó un amplio rechazo en el sector. "Nuestros dirigentes han errado en el diagnóstico y carecen de una estrategia definida para transformar esta crisis en una oportunidad. Las retenciones a las exportaciones son el más dramático testimonio en esa dirección", aseguró el empresario sojero Gustavo Grobocopatel en *Clarín* el 23 de marzo de ese año. "Representan una real confiscación y una causa de desaliento que pone en peligro la rentabilidad de las explotaciones", sostuvo el ex titular de la Sociedad Rural Guillermo Alchouron, el 30 de marzo en el mismo diario.

El Gobierno desestimó esos presagios y no sólo no eliminó el impuesto sino que lo subió. El 4 de abril, Eduardo Duhalde elevó de 10 a 20 por ciento las retenciones con la intención de recaudar 3000 millones de dólares por año (casi 8000 millones de pesos de entonces). El anuncio motivó un rosario de quejas de parte de los empresarios. El titular de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, dijo que "asistimos a una política que cancela las posibilidades de un vigoroso despegue productivo". "Es la primera vez en mi vida que tengo temor que una medida económica me deje sin nada. Es un verdadero despojo", aseguró sin ruborizarse Marcos Rodrigué, presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) (*Clarín*, 27 de abril de 2002). "La devaluación nos trajo el doble de complicaciones y hasta ahora ningún beneficio", agregó Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria (*La Nación*, 27 de mayo de 2002).

El entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, fue más allá y el 18 de julio de 2002 aseguró en el diario *La Nación* que, debido a las retenciones y al corte del crédito al sector agropecuario, "esta campaña se reducirá por los menos 20 millones de toneladas respecto de la anterior". Si ese pronóstico se hubiese cumplido, la cosecha de la campaña 2002/2003 habría descendido de 69 a 49 millones de toneladas. Sin embargo, en febrero de 2003 la Secretaría de Agricultura confirmó una cosecha record de 71 millones de toneladas, que permitió exportar granos por más de 10.000 millones de dólares. El precio record de la soja fue fundamental para apuntalar el record.

Pese a ello, las protestas siguieron durante todo 2003. El 26 de abril de ese año, la Sociedad Rural publicitó un documento con diez puntos donde se reclamaban cambios en la política agropecuaria y se formulaban sugerencias para el próximo presidente, que sería electo en breve. "Las retenciones a las exportaciones deben ser totalmente eliminadas sin más demora para la cosecha 2003/4. La supresión debe ser conocida por el productor en el momento de sembrar si queremos mantener los niveles de siembra en la próxima campaña agrícola", exigían en el punto 4.

Finalmente, Néstor Kirchner ganó las elecciones y las retenciones siguieron sin cambios hasta enero de 2007. Sin embargo, eso no produjo ninguna caída en la producción. En la campaña 2003/2004 la cosecha se mantuvo estable pese a las sequías y en 2004/2005 trepó a 84 millones de toneladas. El boom se reflejó en el fuerte crecimiento experimentado por la venta de cosechadoras y tractores y en la acelerada regularización de los créditos bancarios. En 2002 la producción primaria tenía el 53,7 por ciento de sus créditos en situación irregular y en 2005 ese porcentaje había caído al 8,9 por ciento (ahora está en 2,2). Otro indicador fue el precio de los campos, que se duplicó en dólares durante el mismo período.

En la cosecha 2006/2007 se batió un nuevo record al superar los 85 millones de toneladas. El incremento de la superficie sembrada, las mejoras en la productividad y los altos precios internacionales apuntalaron el boom. El Gobierno decidió entonces aumentar nuevamente las retenciones a la soja y utilizar ese dinero para subsidiar el precio de los alimentos en el mercado interno. Al justificar la medida se afirmó que la nueva alícuota no afectaría la rentabilidad de los productores. El cálculo oficial estimaba que las exportaciones agroalimentarias (granos, aceites y subproductos) superarían los 16.000 millones de dólares en 2007, lo que les posibilitaría a los chacareros obtener 4000 millones de dólares más que el año anterior. La suba de las retenciones les quitaría apenas un 10 por ciento de esos mayores ingresos. Las entidades del campo volvieron a pronosticar las siete plagas, pero las cotizaciones extraordinarias de los principales commodities hicieron que la proyección del Ministerio de Economía se terminara quedando corta. En 2007 las exportaciones de granos y derivados aportaron 17.567 millones de dólares, 5291 millones más que en 2006.

En noviembre el Gobierno volvió a recortarles una parte de la ganancia a los chacareros al aumentar entre 5 y 10 puntos las retenciones a los granos. Las quejas resurgieron, pero lo cierto es que la guadaña no se sintió porque las cotizaciones siguieron aumentando, compensando el recorte e incrementando nuevamente la ganancia. Esta situación se reflejó en la cosecha. La última campaña había llegado a 95 millones de toneladas y para la actual se esperan 100 millones. Ahora que se fijaron retenciones móviles, las entidades del campo retomaron los pronósticos apocalípticos. Afirman que la producción agropecuaria caerá porque el negocio se ha vuelto.

Publicada el 24 de marzo de 2008.

No importa nada

Por Alfredo Zaiat

Telefónica y Telecom deciden cortar el servicio de telefonía porque consideran que su rentabilidad no es la adecuada y para restablecerlo exigen un aumento de tarifas. Edesur y Edenor informan que en reunión de directorio adoptaron una medida que afectará a los usuarios porque los dejaran sin luz ante la tosudez de un gobierno que no quiere subir las tarifas. Las empresas de colectivos, las grandes y las pequeñas, impulsan un lockout ante lo que evalúan como una política oficial equivocada de no elevar el precio de los boletos. Las petroleras YPF, Shell, Esso y Petrobras dejan de abastecer las estaciones de servicios para enviar el mensaje que quieren cobrar las naftas más caras. Empresas oligopólicas productoras de alimentos, como Molinos de Pérez Companc y Ledesma de Blaquier, interrumpen los envíos al mercado, porque están en contra de la intervención de la Secretaría de Comercio.

La mayoría pensaría que resulta descabellada esa respuesta empresaria, comportamiento que se definiría como antisocial y perturbador. ¿Cuál sería la reacción mediática ante semejante presión patronal que afecta a millones, en especial a los más vulnerables? ¿Dejar sin teléfono, luz, medios de transporte, combustible y alimentos sería aplaudida, acompañada y festejada con cacerolazos? Da la impresión de que no, aunque no habría que descartar sorpresas entre los que ya se sabe e incluso en algunos progresistas culposos. Ahora bien, para evitar confusiones, la protesta del campo es un lockout patronal, ya sea de pequeños, medianos o grandes productores. Se trata de la respuesta del capital a una medida del Gobierno. Y la acción es tan virulenta como la que tiene con los trabajadores o peones rurales en situaciones de máxima tensión. No importa nada, salvo preservar la rentabilidad del capital. En este caso "nada" implica vaciar góndolas de supermercados y estantes de los almacenes. Pocas medidas patronales han sido de tan manifiesto desprecio hacia el prójimo. Y lo que no deja de asombrar es que la mayoría de los medios pueda considerar "justa" semejante agresión a la población. Porque no sólo faltará carne, leche y otros alimentos, sino que sus precios subirán ante la escasez, produciendo el doble efecto de angustia por el desabastecimiento y por el deterioro del poder adquisitivo. Esto no significa que los pequeños y medianos productores no necesiten atención con políticas específicas y de promoción por parte del Gobierno, que parece ignorar la diversidad de agentes en el campo. Pero cuando las demandas ya dejan de ser por una estrategia sectorial, para convertirse en un de-sestabilizador político, económico y social, los dirigentes que dicen representar a los castigados del campo debería alejarse de sus pares que no dudarían en cualquier otro momento de aplastarlos, como la historia bien enseña.

Publicada el 26 de marzo de 2008.


AFP

Una giornata particolare

Al cumplirse dos semanas del lockout agropecuario, la Presidenta pronuncia un duro discurso en el que define la protesta como "piquetes de la abundancia".

Por Mario Wainfeld

La cobertura televisada en vivo del discurso presidencial pretendió sugerir que las bazas se estaban dirimiendo. En realidad, las cartas de ayer ya estaban echadas, a la tardecita. Las entidades "del campo" anunciaron horas antes la prolongación de su lockout con cortes de rutas por tiempo indeterminado, hasta que se retractara la implantación de las nuevas escalas de las retenciones y su movilidad. Hablaron de su ánimo de negociar pero, en un sinsentido llamativo, lo supeditaron a una rendición. La oferta, bien mirada, era una remake agreste del Tratado de Versalles. Era muy dudoso que Cristina Fernández tuviera en carpeta otro tipo de réplica pero con la presión de la acción directa, al grito de "quiero retruco", contestó "quiero valecuatro".

La partida no ha terminado pero es obvio, con el tablero a la vista, que ayer "el campo y la oposición política (que encontró un nicho de oportunidad) ganaron unos porotos.

El Gobierno, desde el vamos, no fue hábil para espigar entre los reclamantes. Soportó, en algún sentido alentó, que se unieran en la protesta. Ayer sucedió que recibieron apoyos ajenos a la mera lógica corporativa. Seguramente no hubo transiciones del oficialismo a la oposición. Los barrios porteños que se galvanizaron (los del norte), los rostros de las movilizaciones sugieren un corte de clase. Es verosímil que no hayan salido a la calle muchos (acaso ninguno) de quienes votaron a Cristina para presidenta.

Pero el oficialismo cometió el desliz de permitir que se ampliara el apoyo a sus antagonistas. Tanto que varios gobernadores que se supone son "del palo" hacían piruetas ayer para no malquistarse con la Casa Rosada pero propalaban gestos cada vez más conspicuos para que se abriera una instancia de negociación.

■■■

Estilo CFK: La presentación de la Presidenta mantuvo sus rasgos de estilo. Un discurso claro, articulado, bastante sofisticado para los que miran compactos por tevé. Su defensa del "modelo" fue lógica y bastante precisa. Defendió la validez de las retenciones como puntal de una política económica que sirvió para salir de la crisis. Y explicó la utilización estatal de los recursos provenientes de los impuestos. Defendió una política económica que ha producido resultados aceptables, inimaginables años atrás y la validez de un impuesto que siempre fue resistido por los sectores del agro. A diferencia de otros espadachines mediáticos del Gobierno, no se ciñó sólo al valor recaudatorio de la gabela, también su necesidad para desacoplar a los precios domésticos de productos básicos del arrastre de los precios internacionales.

Definir si tiene razón en ese encuadre general, obliga a una toma posición política. La controversia no es un hallazgo del siglo XXI, viene de muy lejos. La dieta de los argentinos se integra comiéndose buena parte de los principales productos exportables. La bonanza del campo en general ha derivado en precios siderales de productos básicos y las tensiones entre la cadena agropecuaria exportadora y un tramo importante de los sectores populares es uno de los hilos conductores de los conflictos de nuestra historia.

En un período de crecimiento esa contradicción fue sobrellevada, no sin resquemores, por el gobierno de Néstor Kirchner que también soportó lockouts y quejas por estar asesinando a la gallina de los huevos de oro. La mala onda entre éste y otros gobiernos peronistas (salvo el de Carlos Menem que no fue de esplendor para "el campo") es otra constante nacional. La palabra agresiva de varios piqueteros de ayer, visiblemente productores pequeños y no multimillonarios, evocaba los discursos más flamígeros de la Sociedad Rural, aquellos en los que se comenta que el campo hizo la grandeza de la patria. Una mirada seria sobre la distribución de la riqueza y la extensión de la justicia social en esos lapsos, autoriza a ser escéptico. Y a convocar a la modestia sectorial, base de toda convivencia social civilizada.

Así las cosas, en la lectura de este cronista, en su sesgo general, el Gobierno tiene razón en defender las líneas maestras de su política económica que fue convalidada por un margen amplio en las elecciones de octubre pasado. Pero algo faltó.

■■■

Lo que faltó: A Cristina Fernández de Kirchner le faltó algo que es una larga carencia de su fuerza. Matizar al adversario, predisponer una salida conversada. No ceder a las presiones es un principio básico de gobernabilidad, indeclinable. No es sensato suponer que un gobierno naciente se permita burlar esa bolilla uno.

Pero el Gobierno todo (y la Presidenta) descuidó condimentar su gobernabilidad con uno de los mandatos del sistema democrático: mantener instancias de negociación permanente con todos los sectores, incluidos los díscolos. Cristina Kirchner, puesta a confrontar con quienes la habían desafiado, descuidó diferenciar a su interior a los "grandes" de los "pequeños y medianos". Y abrir una ventana pública para salir de la pura confrontación.

■■■

Lo que se juega: Los dirigentes "del campo" ayudan poco. Los grandes se invisibilizan en el discurso escudándose detrás de los pequeños mientras se valen de su bronca. La intransigencia de las cuatro entidades no se puede explicar por motivos económicos (a muchos de ellos les sigue yendo bomba) ni por estar "desbordados" por sus bases, argumento que ningún líder que aspira a negociar puede invocar gratuitamente. Digámoslo paradojalmente para luego explicarlo: ya no se discute lo que se discute.

Todo paro (incluidos los patronales) es político porque supone disputa de la riqueza. Este lo es, además, porque se quiere limar al Gobierno. No se discuten ya las retenciones a la soja (el precio internacional bajó en estos días tornando virtual por ahora el supuesto casus belli), si así fuera no habría movida de los tamberos, los maiceros o los productores de carne. Lo que se busca es una mejor posición relativa frente a un gobierno al que (como dice bien Cristina) en un momento necesitaron pero (como registran ellos) sigue pidiéndoles esfuerzos que otros les dispensarían.

Se ha establecido una suerte de caso piloto. Los propietarios agropecuarios quieren recuperar parte del poder que perdieron en estos años, alienados de Palacio aunque no del crecimiento y sus pitanzas.

El oficialismo sospecha que, si cede, generará un precedente que podrá ser reprisado por otros actores capaces de cortar calles. Y que la oposición encontró en el entuerto un atajo para buscar descompensarlo, tras su traspié electoral en 2007, en un año en que las urnas no hablarán.

■■■

Polarizaciones: Más allá de las razones relativas, sobre las que ya se habló, hay dos factores que inducen a la preocupación. El primero es la exacerbación de planteos binarios vetustos pero no removidos de la cultura política: campo versus ciudad, peronistas versus gorilas, clases medias urbanas versus trabajadores sindicalizados. Esas díadas no fueron demasiado fértiles en los últimos 50 años, o en el mejor de los casos se agotaron. Su reaparición en tantos relatos es una mala nueva en una sociedad que es más plural, más democrática, más compleja y, básicamente, distinta de lo que era medio siglo atrás.

La crónica cuenta que hubo llamadas telefónicas cruzadas y algunas propuestas que el Gobierno fue dando a conocer de modo parcial. También exhortaciones de sectores no cándidos (jerarquía de la Iglesia Católica sin ir más lejos), que igualmente pueden tener su funcionalidad. Más allá de las ventajas que busca cada uno, la responsabilidad de todos es descomprimir.

Quizás el primer reflejo del Gobierno, el que se maceró ayer muy tarde en la Casa Rosada en la reunión entre la presidenta, Alberto Fernández y Martín Lousteau, sea doblar la apuesta.

Suena más sensato y sistémico sacarle punta al planteo que hiciera al cierre de esta nota Hermes Binner: la búsqueda de consensos extendidos.

Tal vez sea el momento de proponer una agenda muy amplia, que interpelara a ausentes de la brega que tienen algo que añadir: corporaciones de la industria, gobiernos provinciales, asociaciones de consumidores. Y desde luego, los trabajadores del campo, de momento bastante alienados de la bonanza general.

■■■

Necesidades: El Gobierno debe tender la mesa y habilitar el diálogo, algo que le cuesta horrores. Y la dirigencia "del campo" debe hacerse cargo de la lesividad de su medida de fuerza. Esa lesividad cargará sobre la ciudadanía en su conjunto y, por razones evidentes, gravará más a los de menos recursos. Nadie debe sustraerse a las consecuencias de sus acciones. Incitar al desabastecimiento de insumos de la canasta familiar (desde el comienzo de los tiempos y más en este Sur) es una herramienta tradicionalmente golpista que cualquiera que se proclame democrático debería archivar.

Publicada el 26 de marzo de 2008.



La plaza de las Trillizas

Por Sandra Russo

Hace rato que el campo seduce a la ciudad, tanto como la ciudad seduce al campo. "Yo estoy con el campo", se leía en las pancartas cuadraditas que exhibían jóvenes de look Cardon, una marca que, dicho sea de paso, tiene en Palermo su "torre rural". Parece una bizarrada argentina, y acaso lo sea, pero en el sitio web de la marca que impuso la ropa de estancia entre jóvenes y adultos que de estancieros tienen poco, se indica que sus emprendimientos inmobiliarios se originaron en el deseo de que la gente del campo "se sienta en la ciudad como en su casa".

Algunos barrios de esta ciudad, anoche, estuvieron con el campo, aunque no se sepa muy bien cuál es el lazo que se estrecha, más allá del espanto que los une, y que es el gobierno kirchnerista. Iba a pasar tarde o temprano, pero seguro iba a pasar ante alguna señal concreta de que había llegado la hora de redistribuir un poco, un poquito, algo de lo que tienen y nunca en la historia han cedido de buena fe o buena gana.

Las Trillizas de Oro lo supieron antes que muchos, y por eso hicieron buenos matrimonios: acabado hace rato su cuarto de hora, las chicas fueron noticia solamente porque las tres eligieron casarse con polistas. Hay un glamour polista que recoge cierta muchachada bilingüe, un toque de distinción en alpargatas, un manierismo de mate con la peonada, un aire de familia numerosa y divina que aunque argentina, es rubia y fina. La base social y cultural del nicho citadino que no tiene empacho en arrebatarles a los piqueteros sus piquetes y que desembarcó en las calles con entusiasmo de debutante, encanto del polista.

A propósito, el lunes 24 me equivoqué de marcha, y en lugar de ir a la de los organismos de derechos humanos aterricé en la de las agrupaciones de izquierda. Quien se atuviera a lo que allí se megafoneaba, jamás hubiese comprendido este país, que un día después, un solo día, ofreció en el mismo escenario el espectáculo del sector agropecuario forzando rebelión en la granja.

A pesar del arrebato con el que estas líneas están siendo escritas, hay al menos un par de cosas claras. Quien votó a Cristina Kirchner se presume que votó algo parecido a lo que pasa. Medidas que redistribuyan riqueza. ¿Por qué hasta ahora no se tomaron medidas como éstas? Porque medidas como éstas no son gratis. Porque la riqueza no se suelta. Porque no hay lógica ni ideología capaces de arrancarle a un sector privilegiado algo de lo que tiene. Porque a la redistribución de la riqueza hay que acompañarla y sostenerla y defenderla de la reacción que provoca. Porque para acompañar un proceso de redistribución de recursos y de asignación de torta hay que hablar claro, tener coraje y poner el cuerpo y la cabeza a favor de ese cambio. Porque es más fácil, desde un progresismo previsible, rancio y fofo, seguir boludeando con el bótox o las carteras de la Presidenta.

Hoy hay miles de personas en las calles con pancartitas que dicen "Yo estoy con el campo", sin que eso signifique otra cosa que estar en contra de este gobierno y de las medidas que pueden rozarles las ganancias. Así ha sido siempre. Siempre han estado a favor de quien les done favores y en contra de quien se los recorte. No los mueve nada más que el bolsillo. No hay otra ideología que el bolsillo, aunque usen alpargatas y salgan de padrinos del hijo de un peón.

Publicada el 26 de marzo de 2008.

La culpa es de la soja

Por Miguel Teubal *

El conflicto agrario que se manifiesta en la actualidad es, en gran medida, consecuencia directa del auge fenomenal que han tenido los precios internacionales de la soja y de otros granos. El gobierno teme que tal situación pueda incidir sobremanera sobre el aumento de los precios internos de los alimentos y por ende sobre el proceso inflacionario, con todas las consecuencias que esa situación puede acarrear sobre el humor de la población. ¿Por qué aumentan los precios de la soja y de otros granos en el mercado internacional? Diversas razones explican el auge de la demanda de diversos granos. En el caso de la soja, tuvo que ver con la necesidad de Europa de encontrar un alimento balanceado adecuado para alimentar a sus cerdos, pollos y vacunos. También contribuyeron los nuevos proyectos para impulsar los agrocombustibles, que presumiblemente habrán de sustituir a combustibles fósiles en el futuro. Asimismo, China y la India se han constituido en demandantes importantes de soja dado el tipo de "modernización" agraria que se está impulsando en esos países.

Pero cabría preguntarse si en el trasfondo de esta situación no se estaría conformando un nuevo estadio en la evolución del capitalismo. Tras varias décadas de neoliberalismo, de privatizaciones, desregulaciones y aperturas a la economía mundial que dieron impulso a importantes procesos de globalización dominados por los agronegocios, se fue configurando en escala mundial una "nueva división internacional del trabajo", equiparable a la de fines del siglo XIX, cuando tuvieron auge las denominadas "economías agroexportadoras". Al igual que entonces, en la actualidad estos nuevos y viejos productos de exportación generan enormes rentas internacionales en escala mundial que se han transformado en algunos de los principales soportes de los procesos de acumulación de los países periféricos. A esas razones de más largo alcance se agrega que por la actual crisis financiera muchos inversores se refugian en commodities, incidiendo en el corto plazo sobre el componente más especulativo del alza de esos precios. ¿Cómo se distribuirán esas rentas internacionales que derivan del alza de los precios en el orden económico interno? No cabe duda de que los precios internacionales inciden sobre aumentos de los internos. La soja contribuye a una importante prosperidad para vastos sectores del agro. Los principales beneficiarios de ese proceso lo constituyen los grandes productores, contratistas, "pool de siembra". Dado el auge que ha tenido la soja en los últimos años, los medianos y pequeños productores pampeanos también se están beneficiando. De allí la respuesta contundente del "sector" frente a las nuevas medidas.

Se nota cierto titubeo por parte del Gobierno frente a la actual situación. Y no es de extrañar que sea así. Porque tuvo que producirse la amenaza de que se agudizara el proceso inflacionario para que decidiera el establecimiento de retenciones móviles e intentara cambiar de rumbo aunque sea mínimamente en materia agropecuaria. Si no fuera por este hecho, no hubiera dejado de aplicar una política agraria que en lo esencial sigue siendo prosoja, en consonancia con lo que hicieron todos los gobiernos anteriores desde la aplicación del decreto de desregulación de 1991. Se trata de impulsar un cultivo utilizando "tecnología de punta" (los transgénicos), sean cuales fueren sus consecuencias, debido a que contribuye significativamente al superávit de la balanza comercial necesario para pagar los servicios de la deuda externa. Los gobiernos anteriores y el actual también hacen oídos sordos a las "deseconomías externas" del modelo sojero: la desaparición de los productores medianos y pequeños, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, el deterioro ambiental, los efectos de una deforestación indiscriminada, los efectos sobre la salud humana. Tuvo que producirse esta coyuntura muy especial y el peligro de una espiral inflacionaria para que el Gobierno intentara ciertos "correctivos" en la política global. El problema es que no se contemplan los intereses de medianos y pequeños productores. Y tampoco implica un cambio fundamental en el modelo agropecuario.

* Economista, especialista en temas agrarios.

Publicada el 27 de marzo de 2008.



Algunos cacerolazos en Barrio Norte en repudio a Cristina Kirchner

"Acá todos somos el campo"

"Ella quiere que terminemos como Venezuela, con guerrilla." "Que renuncie, ¿alguien quiere que se quede?", los jóvenes que se concentraron en Santa Fe y Callao coincidían en la crítica a la política oficial. Nada de diálogo, sólo rechazo.



Por Diego Martínez

"Se rodean de matones como D'Elía, no se la votó para eso", repetían en Santa Fe y Callao. La leyenda sobre cartulina era cierta: "Todos somos el campo". No es que a los vecinos de Barrio Norte les dio un brote de solidaridad. Al contrario. Ninguna de las personas que anoche se reunieron cacerola en mano en Santa Fe y Callao era rata de ciudad. El más lejano de los veinte que charlaron con Página/12 tenía novia paisana y, más importante aún, suegros paisanos. Pero "¡Con el campo no se jode!", explicaba otro cartel, más grande.

"Por los pollos y el campo. ¡Fuera K!", escribió Mariana de Roque Pérez.

–¿Por qué estás acá?

–Se me mueren los pollos.

–¿Hay retenciones a la exportación de pollos?

–No, pero los camiones no pueden pasar y la culpa es de la Presidenta. No la acepto desde el vamos –se sinceró.

–¿Qué medida esperás que tome?

–Que renuncie ¿Alguien quiere que se quede? Ella quiere que terminemos como Venezuela, con guerrilla.

–¿Hay guerrilla en Venezuela?

–No sé, pero están todo el tiempo peleándose, los piqueteros contra las clases altas.

Hizo una pausa, temió haberse enredado y pidió: "No pongas mi apellido". Cumplido.

No era una interpretación aislada. "Andate o Venezuela o Cuba", invitaba un cartel. "Cristina: ¡exilio!", otro. Una amiga intentó socorrerla: "Generan revueltas sociales en sus países. Se rodean de matones como D'Elía. No se la votó para eso".

–¿A quién votaron?

–A Lavagna, lo único que había.

Los perfiles eran inconfundibles. Edad promedio: 18 a 25 años. Varones de boina y bombacha Cardon, camisa Polo, chomba Kevingston. Las chicas, lejos del estereotipo de flaca porteña, lucían rozagantes, rubias, con esa ostentación de vida sana típica de quien creció con leche espesa de vaca recién ordeñada, pan casero y abundantes chacinados. Los carteles no dejaban mentir: Lobos, San Antonio de Areco, La Pampa, Tres Arroyos.

"Cristina quiere que nos enfrentemos el pueblo contra el campo. No debe ser así", explicó Guillermo Urruty, productor de Coronel Suárez que viajó sólo para manifestarse. Su reclamo fue de los más moderados: "No queremos retenciones móviles, queremos que las retrotraigan al treinta por ciento". Su hija Paz, estudiante de Psicología de la UBA, agregó: "El desabastecimiento lo genera el Gobierno con las retenciones. Con los discursos confunde. Muchos pequeños productores ya se fundieron. La diferencia con la ciudad es que la gente de campo es consciente de que si se funde el campo, se funde el país". De fondo, la muchachada cantaba: "Si este no es el pueblo ¿el pueblo dónde está?". El pueblo miraba por TV.

"No nos enfrenten entre argentinos." "Si sos democrática dejá de mandar matones y bancate que el pueblo no te apoye." "Cristina: la nueva plaga del campo." "No protesto con palos. Puedo hablar. Hablemos." "Dejá de mentir. A los medianos y pequeños nos roban." "Distribuí las miles de hectáreas que tenés en el sur." "Patria = Campo." Eso decían los carteles de los jóvenes que bajaron desde sus departamentos tras el discurso.

Un hombre en andas, canoso, chomba de rugbier, pidió silencio y gritó: "Lo único que hace es darle fuerza a los compañeros del interior. Nosotros también debemos darle coraje, autoconvocándonos todas las noches", predicó. La masa lo ovacionó.

Fernando Baldivieso, futuro aviador civil, fue el foráneo de la manifestación. "Soy de Buenos Aires. La familia de mi novia tiene campo. Voté a Cristina pero no esperaba esta medida. Argentina es el único país que tiene estas retenciones. De cada cien pesos que producen apenas quince les quedan limpios. Los productores se están yendo a Uruguay", anunció.

Un muchacho se subió a los hombros de su amigo e intentó arengar:

–¿Vamos al Obelisco?

–Nooooo –fue la respuesta unánime. Se bajó resignado

Página/12 divisó a un hombre mayor, morocho, curtido, creyó dar con un peón que naufragó en Barrio Norte, pero no, tampoco.

"Soy artista, autor y compositor, el caminante número uno del país. Juan Carlos Balvidal me llamo. Canto en San Telmo y Recoleta. Pero soy de Junín, mi familia vive allá y estoy angustiado. Todo lo que llega a la mesa es obra del campo. Me dolió el discurso. Mi familia trabaja, son pequeños productores."

–¿Reclama que bajen las retenciones o algo más?

–Lo mejor que pueden hacer es irse.

–¿Quién le gustaría que gobernara?

–Juan Carlos Balvidal, el caminante argentino.

Publicada el 28 de marzo de 2008.

La hija de la pavota

Por Pino Solanas *

El conflicto desatado con las retenciones a la renta agraria está dejando de lado uno de los principales protagonistas de la crisis: el sector exportador y las multinacionales del cereal. Los Cargill, Dreyfus, Bunge y Born, A.D.I.T y otros, son los que mandan, fijan el precio y se apropian innecesariamente de una millonaria renta que ha llegado hasta un tercio del total. La Argentina es la hija de la pavota: de los cinco grandes países exportadores de granos, EE.UU. y la CEE subsidian la exportación cerealera e intervienen directamente en apoyo de sus productores; los otros dos países –Australia y Canadá– mantienen el monopolio estatal sobre el comercio agrícola.

La crisis actual debe servir para replantear el conjunto del problema. ¿Cuál es la razón para ceder la renta y una política soberana e integral de sostén agrícola? No sólo para los productores de soja: ¿cómo puede aceptarse que el productor de manzana o yerba mate reciba sólo el 10 por ciento del precio de venta? El desastre económico y social que significó la desaparición del 40 por ciento de los productores rurales que teníamos dos décadas atrás no puede aceptarse como irreversible. El otro tema grave que no puede soslayarse y aunque se pretende olvidar parece ser el más temido, es la reforma agraria. De 430 mil productores agropecuarios pasamos a 300 mil. Esas propiedades quedaron en manos de los bancos, grupos concentrados y sociedades anónimas. Hoy la mitad de la tierra pertenece a menos de siete mil propietarios y 40 millones de hectáreas pasaron a ser propiedad de extranjeros, incluso en áreas de frontera.

La expansión de la producción sojera está arrasando el bosque nativo y las tierras de los pueblos originarios contrariando la Constitución Nacional. La soja forrajera alcanza la mitad de la producción de cereales y el área sembrada llega hoy a los 35 millones de hectáreas, casi el 10 por ciento de la superficie total del país. Con certeza, el ingeniero Alberto Lapolla dice: "La sojización desenfrenada de la nación, lejos de ser un hecho saludable, constituye un verdadero problema en expansión para la economía nacional y la protección de nuestro ecosistema agrícola, así como también para la vida misma de nuestros habitantes... Mientras los EE.UU. están tomando medidas para reducir la superficie sembrada con soja transgénica, pagando sobreprecios y más subsidios por la soja común, la Argentina sigue expandiendo la frontera sojera sin límite ni precaución alguna".

Por la peligrosa tendencia al monocultivo sojero, nos estamos transformando de productores de alimentos en proveedores de forrajes para el mercado mundial.

Ningún modelo que se asienta en el monocultivo es sustentable: degrada el suelo y el sistema productivo. Desde Menem, hemos abandonando nuestra soberanía alimentaria, junto con la pérdida de los recursos minerales e hidrocarburíferos. El gobierno de los Kirchner ha profundizado este modelo agrominero exportador: entregó el dominio total de los yacimientos a las provincias y éstas se lanzaron a prolongar –diez años antes de lo que marca la ley– las concesiones de Menem hasta el 2047. Santa Cruz ratificó hace dos semanas la prórroga del principal yacimiento de petróleo del país, Cerro Dragón, por 40 años, es decir, hasta su extinción definitiva. ¿Cuándo será el día en que la ciudadanía ocupe las plazas, bloquee las rutas y los puertos para impedir que se lleven nuestro petróleo y minería? Los hermanos bolivianos dieron el ejemplo en octubre del 2003 rebelándose contra el envío de gas a EE.UU.

La política de retenciones es justa y la han utilizado todas las naciones para desarrollarse. Pero debe distinguirse a los pequeños e indefensos productores, de los grandes y la Sociedad Rural. No se puede meter a todos en la misma bolsa ni ocuparse sólo de las explotaciones de la Pampa Húmeda, mientras se abandona al conjunto de los demás cultivos agrícolas y frutícolas del país. El conflicto agrario no se soluciona con posiciones de fuerza o soberbia gubernamental, ni mezclando la protesta de los pequeños chacareros con los poderosos que terminan exigiendo la anulación total de las retenciones. Los enemigos de la renta agraria siguen siendo las multinacionales del cereal. Sólo con la puesta en marcha de una Junta Nacional de Granos y Carnes y un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario podremos recuperar el conjunto de la renta y dar protección y estímulo a la diversificación de producción agrícola. Recién entonces dejaremos de ser los hijos de la pavota.

* Cineasta, referente de Proyecto Sur.

Publicada el 28 de marzo de 2008.

La rara cadena de mails que desencadenó el conflicto agropecuario

Una marcha que no huele bien

Una cadena de mails convocó a una "marcha federal" en lenguaje castrense. **Página/12** investigó su origen.

Por Nora Veiras

Al lockout agropecuario se lo vio estallar en las calles y en los medios. Hubo también otro estallido que pasó inadvertido en forma pública pero no fue menos contundente: el que se propagó por Internet. El lunes pasado empezó a circular por e-mail la convocatoria a una "Marcha Federal del Campo" con un "Plan Esquemático de Movilización a Capital Federal". En un rudimentario lenguaje castrense, se daban precisiones de puntos de encuentro, horas y cantidad estimada de participantes con el objetivo de "generar la sensación pública del poder de los productores rurales quienes se mueven fundamentalmente por la Dignidad del campo". Otro mail identificaba entre los supuestos autores de la movida a militares retirados, ex miembros de la Side y a un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los involucrados niegan su autoría, pero **Página/12** pudo saber que los mismos nombres estarían bajo investigación por urdir distintas conspiraciones.

Las computadoras de los uniformados fueron inundadas por esos mensajes y en distintas avenidas porteñas se mezclaban ruralistas con la activista Cecilia Pando y Federico Young, titular de la Agencia de Control Comunal, designado por Mauricio Macri. Young comparte con Pando las críticas a la reapertura de causas judiciales contra los represores y es, además, un activo productor rural. Quizás en sus declaradas 1250 hectáreas de la Estancia El Paye y en su carácter de delegado de la Asociación Rural de Chivilcoy ante la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carbap) se encuentre la causa del entusiasmo del funcionario macrista para hacer sonar su cacerola en la esquina de Santa Fe y Callao.

Dios los cría

El supuesto plan de organización preveía que el viernes 28 "los grupos denominados como 'autoconvocados' que responden al accionar de las instituciones del campo en sus diferentes formas según el territorio, bloquean las rutas nacionales y convergentes (...). La coordinación en Area Gran Buenos Aires y Capital Federal se hará mediante uso de celulares sobre líneas que se informarán en forma reservada en las últimas tres horas previendo bloqueo por parte de servicios de inteligencia; se usarán frecuencias alternativas de Nextel, según detalle reservado que será distribuido personalmente entre los coordinadores". El e-mail anónimo estimaba que llegarían a la Plaza de Mayo unos 8570 vehículos y que se congregarían unas 25 mil personas.

Fechado el jueves 27 apareció en algunas casillas de mails un "Parte de Operaciones" que señalaba el carácter "apócrifo" de la convocatoria y lo atribuía a "una maniobra de acción sicológica organizada por los ciudadanos identificados a continuación": Juan Bautista Yofre (a) Tata, ex secretario de Inteligencia del Estado; Iván Germán Velázquez, actual subdirector de Inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; Daniel Reimundes, general retirado del Ejército; Gabriela Roxana Pousa, periodista, y Héctor Alderete, director de la página web Seprin destinada a criticar la política de Defensa del kirchnerismo y a penar por la suerte de los represores.

En el libro *Side. La Argentina secreta*, Gerardo Young cuenta que "si algo marcó la gestión del Tata (designado por Carlos Menem en julio de 1989) fue que devolvió a La Casa a muchos de los militares a los que habían expulsado los radicales. Y a los duros. Nombró como director de la Escuela de Inteligencia al general de brigada Carlos Martínez, el mismo que había sido jefe de la Side durante los últimos años de la dictadura. (...) También nombró al teniente coronel retirado Carlos Doglioli como director de contrainteligencia y a Pascual Guerrieri como director de Planeamiento. Guerrieri era un tipo de verdad pesado. Oficial de Inteligencia del Ejército, en la dictadura había dirigido centros clandestinos de detención en Rosario, tenía las manos manchadas con sangre y ni una gota de culpa".

–¿Usted me ve a mí mandando esos mails? Esos mails salieron de otra computadora y me los atribuyen a mí. Ya le he comunicado al Gobierno que no tengo nada que ver con eso.

Del otro lado de la línea Yofre le da a **Página/12** su versión.

–¿Con quién se comunicó del Gobierno?

–No quiero comprometer a gente del gabinete. Los que lo tienen que saber en el Gobierno lo saben. Yo no tengo ni una maceta, ni casa propia. Me voy a meter yo a promocionar una marcha de dirigentes agropecuarios. Es una canallada, a todos estos tipos hace mucho tiempo que no veo. Lo meten al pobre Reimundes, que está retirado.

–Convengamos en que estar retirado no exime de nada.

–Esto es falso. Identifiqué la computadora de donde salió esto por el número de IP. No voy a ir a la Justicia a perder tiempo porque no me van a dar bola. Yo estoy retirado de todo. No me presto a estas cosas.

Minutos después de cortar, Yofre llama a la redacción para reenviar el mail que le envió al productor televisivo Diego Gvirtz para avisarle que habían usado su computadora para lanzar los mails. "Esta es la prueba de que le hackearon la máquina a él y desde ahí mandaron los correos a mi nombre", dice Yofre.

El general Reimundes, que se desempeñó como secretario general del Ejército bajo el mandato de Ricardo Brinzoni, también negó haber participado en el operativo. Aseguró a este diario que a Yofre hace un mes que no lo ve y que no conoce ni a Velázquez ni a Alderete. Reimundes es un militar muy activo entre los retirados que aspira a presidir la Sociedad Militar Seguros de Vida –la caja de las Fuerzas Armadas– y tiene sólidos vínculos con el ultraderechista cura dominíco Aníbal Fosbery, líder de Fasta. La comunidad en la que estudia la numerosa prole de Cecilia Pando y donde la misma activista castrense supo trabajar. Fosbery reivindicó hace apenas un par de años al nazi Erich Priebke como un notable vecino de Bariloche.

"Lo que más me ofende es que crean que soy tan torpe. Pregúntele a cualquiera que me conozca si fulano de tal con la aptitud y capacidad que tiene podría haber hecho esa convocatoria. Yo intervengo a cara descubierta", asegura el general y pregunta: "¿A usted le parece que un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria puede estar en algo así?", en alusión a Velázquez.

La PSA depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que dirige Aníbal Fernández. **Página/12** habló con un alto funcionario que conoce a Velázquez, responsable del área de Contrainteligencia de la PSA y experto en informática. El funcionario explicó que "no confía en Velázquez pero tampoco en sus enemigos. Estos son chicos raros que hacen un trabajo raro también. Ahora, la ley le prohíbe a un policía hacer actividades políticas, si hay pruebas le abriremos un sumario".

Velázquez fue detenido en abril del '99 acusado de vender instrucciones para armar bombas en disquetes. Pertenecía a la Comunidad Nativa de Organizaciones Regionales (Cóndor) que formó el vicecomodoro Horacio Riccardelli. En ese momento, un grupo de militantes de ultraderecha se presentó en el juzgado acompañando al vicecomodoro y al abogado Pedro Bianchi, activo defensor de represores, para reclamar por la libertad de Velázquez.

Detrás de la protesta agropecuaria se esconde una trama de intereses que están lejos de agotarse en la disputa por el aumento de las retenciones móviles. La guerra de mails evidencia que algo huele muy mal y no es precisamente la bosta campestre.

Publicada el 30 de marzo de 2008.



Nuevas memorias de marzo

Por Nicolás Casullo

Por encima de claros errores del Gobierno en no diferenciar los universos socieconómicos de los productores en el conflicto del campo, podemos plantear cinco aspectos que sobresalen en la presente crisis:

1 La actuación de lo massmediático audiovisual resultó una experiencia casi inédita de impudicia, obscenidad ideológica y violentación de toda "objetividad" en cuanto a política de la imagen y de los encuadres de parte de los canales y sus noticias. Un cóctel de distorsión, analfabetismo, prejuicio y racismo. La espontaneidad de la dupla "movilero-locutor" para explicar las cuestiones que nos asuelan resultó una suerte de catarata indetenible que hizo estallar todo sentido sobre lo que realmente está ocurriendo en la crisis, ante ojos y oídos de millones de personas. Los acercamientos de cámaras donde 100 parecen 10.000, los diálogos donde es peor la ideología del cronista que la del propio entrevistado fascistoide, la conversión de la Sociedad Rural y Coninagro en revuelta de una suerte de "campesinado" andino escapando del napalm, la falta de toda intención ordenadora de los significados que están en juego hacen del noticierismo porteño la "natural" y/o alentada derechización ideológica con que se baña cotidianamente nuestra sociedad mirando la pantalla.

2 El salvajismo concreto de un paro nacional en extremo autoritario, desabastecedor, amedrentador, inflacionario de parte del agro, a partir de una soberbia autoritaria de utilización de poderes, técnicas, de prepotencia de "dueños de la Tierra" y de elementos de contundente eficacia. El paro transformó a la inmensa mayoría de la sociedad argentina en rehén, en cautiva de un lockout básicamente orquestado por una industria multinacional altamente concentrada. Este es el significado biográfico y presente de la actual acción reactiva, muy por encima de "la rebelión de chacareros" sin duda afectados, con que se quiere reconvertir simbólicamente la totalidad de una confrontación histórica. Habría que retroceder a esta relación del peronismo con el mundo terrateniente en el período 1946-55, la creación del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) por parte de Perón para la intervención del Estado en el comercio exterior de las compañías exportadoras, transferir recursos al conjunto de la sociedad, monopolizar el manejo de las divisas y aplicar la paridad cambiaria. Luego del golpe de 1955, el ingeniero Alvaro Alsogaray tacharía de "inadmisible política comunista que retenía el 50 por ciento de las ganancias de la producción del campo". Así como también en el gobierno peronista en 1973 un proyecto programático de impuesto a la renta potencial de la tierra que hubiese significado el principio de una real reforma agraria en el país. Esta es la historia política, económica que confronta nuevamente hoy en el país con una violencia inusitada, y donde los protagonistas se repiten: el peronismo y las privilegiadas rentas agrarias. Esta lectura de sentidos histórico-sociales es lo que se escamoteó en todo momento y resulta el acontecimiento obviado que deja en evidencia que "ni siquiera podemos hablar de nosotros argentinos, cuando hablamos de la Argentina". A la vez que expone, como otras tantas veces, que cuando sectores patrimonialistas del país quedan afectados en su alta rentabilidad, la democracia pasa a ser para ellos un retórica ingenua "de otros": un mundo de mediaciones prescindible. Se asiste entonces a una vieja biografía "campera" antipopular, de horizonte golpista, hoy expuesta como nunca en crudo en cuanto a los intereses hegemónicos que comandan la lógica última de la protesta. Desde este punto de vista el kirchnerismo recobró una extraña fuerza y sentido, medio extraviado en los últimos tiempos.

3 La emergencia de cacerolazos en la capital y sus consecuentes "resonancias" amplificadas. Protesta de neto talante político extrañamente "agrario", detrás de un manifiesto "delarruaso 2001" (mito poderoso hoy de varios sectores porteños antidemocráticos). Un objetivo golpista para nada "espontáneo". Preciada meta derrumbadora que se viene tartamudeando desde hace dos años, detectable por ejemplo con sólo repasar la cotidiana relación entre comentarios de lectores y públicos con medios de masas de derecha. Núcleos activos, con ideologías en este caso que muchos testigos ocasionales pudimos fehacientemente comprobar en estos días por Santa Fe y Callao, Belgrano, Recoleta y Plaza de Mayo, que ya no remiten a una melancolizada década menemista del uno a uno, sino que abrieron las puertas de par en par a planteos desembozados de añoranza procesista antiperonista (1976-83) en cuanto a valores, definiciones, odios, y permanente coro exigiendo "que renuncie ya". Calificativos de una violenta barbarie contra el gobierno recientemente elegido en las urnas ("comunista", "marxista", "montonero", el de "esa zurda ramera", "el de la puta guerrillera", "el de los asesinos de las fuerzas armadas", el de esa "guacha subversiva"). Esto es, una "sana y familiar" experiencia piloto blanca y pudiente de anti-república y anti-instituciones, que hasta ahora no había tenido calle, en cuanto a cómo voltear al "demonio kirchnerista" que retiene el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una Corte de Justicia que no responde a los propietarios del país. Algo, como dijo el domingo pasado Mariano Grondona en TV, "insoportable y que se tiene que acabar lo más pronto posible". Esta violencia destituyente de la presidenta, a grito sostenido, hace vertebral referencia a la protesta de Recoleta a San Isidro.

4 Un desfasaje evidente entre las posiciones del gobierno de CFK, que apuntan a un reformismo capitalista de centroizquierda redistributivo de la renta (en una escena democrática bordeada de afectados y enemistades) y, paralelamente, un alto déficit gubernamental de políticas en el estratégico universo cultural/comunicacional. Esto es, ¿como se construye una política para apuestas democratizadoras fuertes? La dimensión de las explicaciones que tendrían que impregnar a un gobierno que se postula democrático popular se muestra, sin embargo, opacamente concentrada, por lo general, en tres figuras más el ministro de turno. El Gobierno carece de las prácticas de fuertes divulgaciones, de estrategias de alta difusión de docencia social y ciudadana que tanto tuvo el primer peronismo como gestador intelectual de una época popular, además de las decisivas mejoras económicas llevadas a cabo en aquella oportunidad. Se trata entonces de una construcción política que incorpore nuevos integrantes con voces propias desde sus campos de actuación, para un auténtico redespliegue en la cultura y en las realidades en juego y disputa. Sobre todo cuando se pretenden resentir engranajes dominantes a partir del presupuesto de que la política es conflicto en pugna. Alcanzar mundos de nuevas subjetividades sociales que necesitan ser ganados no sólo en el bolsillo, sino en el sentido común, en los imaginarios culturales. La actual crisis demostró que se precisa delegar mucha más capacidad de intervenciones desde distintos niveles de Gobierno, una pluralidad de enunciadores, un esfuerzo por dar letras y una plena donación de confianza. Una horizontalidad del protagonismo para cuadros políticos de gobierno y funcionarios en infinidad de dimensiones, en tanto batalla cultural en un mundo massmediatizado adverso, y re-simbolizador de la escena política. Este tejido político gubernamental, coherente y abierto, precisa ser proporcional a las decisiones en la cúpula.

5 A nivel de experiencia histórica, el actual reformismo capitalista del peronismo es la experiencia democrática de confrontación social más evidente que vivió la Argentina desde 1955. También en cuanto al desagrado, incomodidad, recelo y oposición (aun haciendo buenos negocios) para un dominio histórico empresarial, religioso, militar y de sectores antipopulares, habida cuenta de que el radicalizado '73 fue un proceso rápidamente abortado con la muerte de Perón y la violencia política.

En este orden de cosas resultan otra vez llamativas (pero no nuevas) las posiciones de las izquierdas. Hicieron todo lo humanamente posible y buscaron todas las argucias y contradicciones menores del conflicto agrario, para mantenerse en silencio, o estar del lado agroexportador, o desleer aspectos cruciales de la coyuntura, u oponerse al Gobierno sin el menor atisbo de apoyo crítico ni lectura de la contradicción principal (Mao dixit), o argumentar que "ni unos ni otros", o que "todo es el mismo charco burgués", o que es peor el kirchnerismo que la Sociedad Rural, o plantear ¿por qué no se hace en realidad la reforma agraria, eh?

Variables que resultan risueñas si no reflejasen que en la más dura confrontación entre reformismo con sus contradicciones versus trust multinacional agro-exportador con fuerte tufo capitalino procesista, esa izquierda marxista, piqueterista, nacional, estuvo ausente. O volvió a estar con el general Uriburu contra el yrigoyenismo como en 1930, con el conservadurismo en 1946, con el golpe en 1955 y fundamentalmente en las columnas agroganaderas en el 2008. A esto se agrega un nuevo progresismo liberal radical de derecha y una intelectualidad reconvertida hoy en republicana conservadora, que en el corazón de lo acontecido sólo encontró palabras para el discutible D'Elía como reencarnación, ánima o sombra de Facundo Quiroga ahí justo, pegadito a la Pirámide. Como dice un amigo: "En la Argentina, siempre, la cosa recién empieza".

Publicada el 30 de marzo de 2008.

Estamos todos locos

Por Ernesto Tenembaum

El conflicto entre el sector rural y el Gobierno puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Como siempre, las perspectivas ideologizadas, maniqueas y moralistas suelen ser más estruendosas y vendedoras que las posiciones moderadas. También, suelen ser las que más daño le hacen al país. A mi entender –que, naturalmente, es discutible– hay dos posiciones extremas que evitan abordar lo que realmente es el tema de discusión. Para una de ellas –expresada por el Gobierno y por sus simpatizantes– se trata de un conflicto entre el campo popular y la oligarquía. Según esta concepción, el Gobierno, en defensa de los intereses de todos los argentinos, impone retenciones al campo, y la oligarquía reacciona con un lockout patronal con tufillo golpista. Algunos de los defensores de esta posición la atenúan, al destacar que el poder político debería atender los reclamos de los pequeños y medianos productores, pero que el eje del problema no es ése, sino el intento desestabilizador que pusieron en marcha los sectores del privilegio para evitar la distribución del ingreso. La posición opuesta sostiene que la voracidad fiscal del Estado oprime al campo, que mantiene al país y es víctima de una actitud autoritaria y rapaz. Por lo tanto, la única alternativa que les queda, para ser escuchados, consiste en desabastecer de alimentos al resto de la sociedad.

Es un clásico argentino. Demasiada gente grita, utiliza conceptos ideológicos, recurre a medidas extremas, patotea, alza las banderas para que pase la farolera, y muy pocos discuten realmente los hechos. Siempre fue así. Hubo bandos desde que comenzó la historia del país. Y palabras grandilocuentes, estruendosas que justificaban las peores locuras y ubicaban en el lugar del traidor a cualquiera que dudara: a izquierda y a derecha, siempre fue así. En este caso, quizás haya una lectura intermedia que permita percibir otros elementos. A mi entender, lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos quince días refleja la existencia de un serio problema



de relaciones sociales que afecta a todas las partes y que las referencias ideológicas sólo contribuyen a disfrazar.

El Gobierno anuncia hace quince días la imposición de nuevas retenciones al sector rural, que se suman a las que ya existían. Esa medida, ahora se sabe, no representa demasiado –al menos en sí misma– ni para distribuir el ingreso ni para nada. Es una medida de efecto marginal. Con toda la furia, permitiría recaudar aproximadamente 1500 millones de dólares. Para el Estado, eso es poco. Tan poco que representa apenas la tercera parte del tren bala, o la mitad de los fondos extras destinados para esa extravagancia, ya que esta misma semana el Gobierno anunció que deberá invertir 4000 millones y no los 1200 anunciados originalmente. Es decir que el Gobierno tenía margen para tomar la medida o para no tomarla.

No era de vida o muerte.

Podía darse un tiempo para agotar los esfuerzos para que tuviera consenso al menos en los sectores más débiles.

No hizo ni una cosa ni la otra: no contempló a los más vulnerables ni tampoco apeló a la política para tener una mínima red de consenso. Y no había incendio que justificara la urgencia.

Tanto es así que la argumentación oficial posterior al conflicto confirma esos elementos. Sostener que al campo le ha ido bien en estos años es una obviedad. Agregar que las retenciones son una medida justa, en fin, hasta Mario Blejer lo defiende. Insistir en que es necesario distribuir el ingreso es correcto. Recordar que la oligarquía rural siempre conspiró contra los gobiernos populares ya lo enseña Felipe Pigna en sus libros. Recitar que en el campo usan cuatro por cuatro es una pavada. Pero son todos artilugios, picardías, chicanas, para evitar el fondo de la cuestión.

Las preguntas clave sobre la manera en que se aplicaron las retenciones móviles son otras: ¿sabe el Gobierno cuál es el ingreso promedio de los productores de cincuenta o cien hectáreas, diferenciados por tipo de cultivo y región del país? ¿Sabe cuántos son? ¿Realmente ellos “la levantan en pala” o, en cambio, aunque les va mejor que hace unos años, están al límite, ganan menos, por ejemplo, que un jefe de Gabinete o un ministro o un periodista o un camionero? ¿Sabe cómo serían afectados por la ampliación de las retenciones? Esas preguntas no fueron respondidas en ningún discurso presidencial, por ningún reportaje de los concedidos por ministros, en ningún paper de los distribuidos por Economía. Esto es: o no lo saben –lo que era un requisito previo para tomar las medidas– o lo ocultan porque es un dato que no conviene difundir. Y es muy importante por varias razones: este paro no tendría ninguna legitimidad sin el aporte de los pequeños productores, ellos son los más duros en el conflicto; y, además, si se aplica un impuesto a un sector débil se lo pone ante la disyuntiva de entregar su propiedad a sectores más concentrados. Eso ha pasado muchas veces cuando la ideología va despegada de cierta solvencia técnica: se la justifica por izquierda pero suele tener efectos por derecha.

Hasta aquí, por lo menos en mi opinión, el Gobierno no ha conseguido explicar cuál era la urgencia de la medida, por qué no se intentó consensuarla, ni cuáles eran sus efectos sobre los sectores más débiles de la economía rural. Revistió el conflicto de recursos ideológicos muy eficientes en la sociedad argentina, que siempre tiene gente tan dispuesta a alzar las banderas, para que pase la farolera, mantatirulirulá.

Pero no explicó lo central.

La ampliación de las retenciones desató un nivel de irracionalidad sin precedentes. La decisión de los piquetes rurales de desabastecer el país, como primera medida de fuerza, tiene una magnitud difícil de encontrar en la historia democrática argentina. Es extraño que entre los ruralistas no haya aparecido al menos una voz sensata que advirtiera sobre la obscenidad de dejar pudrir alimentos en las rutas. Por donde se lo mire, es una canallada. Es mentira que la culpa de semejante barbaridad sea del Gobierno. Cualquier dirigente sabe que entre todo y nada hay un camino intermedio para recorrer. La decisión de cortar los caminos durante quince días parece más bien un intento revolucionario que una resistencia a una medida impositiva sectorial. Faltaban Pancho Villa o los coroneles franquistas y estábamos todos. La simpatía que semejante disparate generó en sectores diversos de la sociedad –los medios conservadores, sectores urbanos profesionales, entre otros– refleja, en todo caso, que la desmesura, el autoritarismo, el doble discurso, no afectan sólo al Gobierno.

(Continúa en la página 18)

Guadalupe Lombardo



(Viene de la página 17)

Es decir: a partir de una medida difícil de justificar –por sus maneras y por la extensión de los afectados y por la ignorancia oficial sobre sus consecuencias en los eslabones más débiles–, se produce una respuesta de dimensiones aún más escandalosas que la medida en sí, con un agravante: la reacción podría haber causado muertes. El corte de los caminos por parte de los productores rurales debería marcar un ejemplo sobre lo que no debe hacerse en un país democrático. Podrá ser cierto que los pequeños y medianos productores no están en una situación holgada, pero tampoco son los más desesperados de la sociedad argentina. Y ellos, los que peor la pasan, jamás han respondido de manera extrema ante su sufrimiento.

Para colmo, del lado del Gobierno, ante la contundencia de la protesta, les enviaron a los camioneros de Pablo Moyano para amenazarlos, mientras los funcionarios respondían al "campo" –así, en términos generales, sin diferenciación– con insultos y provocaciones. Sobre llovido, mojado: a la medida original discutible, le siguió el intento de desabastecer al país y después el envío de patotas para desarticularlo. Luego, el discurso presidencial que abroqueló a todos los sectores rurales involucrados en contra y la reacción de cacerolas y manifestantes en todo el país para repudiar al Gobierno, pintadas a favor de Videla incluidas. Por si fuera poco, los Kirchner envían a Luis D'Elía a pegarles a los manifestantes disidentes. Todo esto, mientras en las rutas había situaciones delicadísimas: un enfermo cardíaco murió en Córdoba por los piquetes.

Es decir que durante quince días, a partir de una medida muy discutible tomada por el Gobierno –y, además, de no demasiada magnitud cuantitativa–, los argentinos estuvimos a punto –realmente, a punto– de agarrarnos a tiros.

Ese es el elemento central de esta semana.

A mi entender, el Gobierno tiene más responsabilidad que los ruralistas en todo lo sucedido, simplemente, porque un Gobierno es más responsable que los demás respecto del clima que crea en un país. Los funcionarios deberían medir la reacción que podría provocar una medida o un discurso. Pero, al mismo tiempo, es indignante percibir la magnitud de la respuesta y la condescendencia de los medios conservadores respecto de los piquetes más salvajes que tuvo la historia argentina reciente. Los Kirchner tienen una extraña vocación por la violencia callejera cuerpo a cuerpo. El envío de D'Elía a golpear disidentes –y su jerarquización en el palco oficial de Parque Norte– recuerda los cadenazos que recibieron otros caceroleros por parte de una patota oficial en Río Gallegos en diciembre del 2001, o el increíble aval oficial que recibió Daniel Varizat luego de arrollar con su cuatro por cuatro (no sólo las tienen los productores rurales) a una docente, o las patoteadas en el Hospital Francés. La derecha tiene una notable vocación por la violencia cuando justifica, defiende y promociona los piquetes que desabastecen a un país. Hay pocos inocentes en esta historia que, vale la insistencia, en cualquier momento, por un motivo u otro, provocará muertes que nunca son las de familiares de los dirigentes, de un lado u otro del espectro.

Con todo respeto, sin ánimo de ofender, es una historia demasiado triste y, por momentos, parece que están todos locos. La Argentina tiene una oportunidad única en estos tiempos: no hay amenaza militar, no hay amenaza de crisis económica. No ocurrió eso en un siglo. Hay plata y tiempo para reformar la educación, la salud, la ciencia, la infraestructura del país y cambiar la historia. Estaría bueno que, en el medio, no nos agarráramos a tiros por una medida fiscal de relativa importancia. Y que no revistamos de ideología, dignidad o lucha de clases lo que, simplemente, parece el reino de la estupidez, la ambición (de dinero, de poder), la exageración y la paranoia. Por momentos parece que el gran enemigo para el crecimiento de este país es la locura, que a ambos lados del espectro político se disfraza con conceptos ideológicos poco apropiados para lo módico que fue el disparador del conflicto.

Por supuesto, es más sencillo ubicarse de un lado o del otro. Calificar de traidor a todo el que duda o marca las incoherencias en ambas partes y alzar la bandera para que pase la farolera. En este país siempre hemos sido muy coherentes, siempre hemos tenido razón, siempre justificamos nuestra actitud en las barbaridades de los otros.

Y nos ha ido realmente muy bien.

¿O no fue así?

Publicada el 30 de marzo de 2008.





Por Fernando Krakowiak

La protesta rural cumple mañana diecinueve días, con lo que supera al lockout agropecuario más largo de nuestra historia, que fue del 24 de octubre al 10 de noviembre de 1975. Ese año, el conflicto fue creciendo con el paso de los días. El 3 de marzo las entidades realizaron un primer bloqueo por veinticuatro horas. El segundo fue el 19 y 20 de mayo. El tercero comenzó el 19 de septiembre y se extendió por once días. El cuarto marcó el record de dieciocho jornadas. La situación económica y social de entonces era muy diferente a la actual, pero algunos hechos parecen calcados. Por esos días hubo fuertes críticas a la intervención del Estado en la economía, amenazas y violencia por parte de los chacareros, acusaciones de golpismo y medidas oficiales para intentar garantizar el abastecimiento, incluyendo el envío de ganado por parte del Ejército.

Al igual que ahora, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria fueron la punta de lanza de los productores. Esas dos entidades presentaron el 19 de septiembre de 1975, al iniciar su tercer lockout del año, un documento con 14 puntos donde se le comenzaba exigiendo al gobierno de Isabel Martínez de Perón "derecho de participación de las entidades gremiales representativas del agro en el estudio y la elaboración de la política económica nacional" (sic). Por entonces, el problema no eran las retenciones a las exportaciones sino las juntas nacionales, a través de las cuales el Estado fijaba precios máximos para las producciones. Esa intervención estatal era vista como una herejía por los chacareros, los cuales al mismo tiempo reclamaban, paradójicamente, desgravaciones impositivas para estimular la retención de vientres y el aumento de la producción, créditos a tasas blandas y la "aplicación de medidas cambiarias que posibiliten la exportación fluida de la producción agropecuaria en general y ganadera en particular", entre otros puntos. Esa última exigencia es relevante porque, ahora que hay un tipo de cambio alto, los productores desestiman la importancia que viene teniendo la herramienta cambiaria como incentivo para la exportación.

Desde el oficialismo se acusó a las entidades del campo de expresar los intereses de la oligarquía terrateniente. Sin embargo, los dirigentes rurales aseguraron que "la protesta no surge de ningún pequeño o privilegiado sector de grandes ganaderos sino que se nutre de la decidida voluntad de millares de productores que nada tienen de oligarquía vacuna" (comunicado de Carbap, 22 de septiembre de 1975). También se los tildó de desestabilizadores y la respuesta llegó desde la tribuna televisiva que ofrecían Bernardo Neustadt y Mariano Grondona en el programa Tiempo Nuevo. "No es un paro golpista", sostuvo entonces Jorge Aguado, titular de Carbap. "Hay enemigos del país que se niegan a reconocer que el campo es su columna vertebral", agregó.

Los diputados peronistas Julio Bárbaro y Alberto Stecco reafirmaron la posición oficial con opiniones muy similares a las que hoy en día se escuchan en Casa Rosada. "El lockout ganadero, decretado por las organizaciones que agrupan a los elementos más reaccionarios de los sectores tradicionales del privilegio y sus socios menores, constituye una provocación política que apunta a perturbar el accionar del gobierno justicialista", expresaron en un documento difundido el 26 de septiembre, donde también se reafirmaba la facultad del gobierno para definir la política económica: "El sentido político reaccionario del paro ganadero no puede ser disimulado con supuestas reivindicaciones sectoriales donde medidas que hacen a la política económica, que no pueden ser resignadas por el Poder Ejecutivo, se confunden con legítimas aspiraciones de auténticos productores".

Por ese entonces, la cotización internacional de los principales productos que exporta el campo estaba lejos del record actual porque Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea se encontraban en plena guerra de subsidios. Además, China no era la aspiradora de granos que es ahora. Ese escenario les daba a los productores más argumentos para protestar, pero el gobierno negaba que los chacareros perdieran plata y aseguraba que varias exigencias habían sido satisfechas antes del inicio de ese tercer lockout, poniendo como ejemplo la liberación del precio de la hacienda en pie, el reajuste de la cotización de los cereales, el pago total de los saldos adeudados por la Junta Nacional de Granos y la homologación de los precios propuestos por los tamberos. Sin embargo, el lockout se extendió por once días, tal como estaba previsto inicialmente, y una vez concluido se empezó a organizar un paro más extenso, que comenzó el 24 de octubre.

El entonces ministro de Economía Antonio Cafiero primero intentó restarle importancia a esta última protesta al declarar que



El lockout agrario de 1975

Días de déjà vu



Fueron cuatro paros entre marzo y noviembre de ese año. El cuarto marcó el record de 18 días, que superó el actual lockout. El quinto estaba previsto para el 27 de marzo de 1976. No hizo falta: tres días antes los militares tomaron el poder.

"si no hay carne, comeremos pollo", pero cuando el bloqueo comenzó a provocar los primeros faltantes les solicitó a las Fuerzas Armadas el envío de hacienda, como se hizo el miércoles pasado. En ese momento se volvió a remarcar que el campo no estaba atravesando una situación crítica y se puso como ejemplo el aumento de la producción. La respuesta llegó entonces desde la Sociedad Rural que, igual que ahora, apoyaba la protesta desde un estratégico segundo plano. "Es probable que el área de siembra haya aumentado, pero ello no es debido al estímulo de buenos precios de cereales, sino a los desastrosos precios ganaderos que han obligado a los productores de tierras aptas a sembrar como única alternativa", expresaron.

Con el paso de los días el bloqueo comercial fue creciendo en intensidad. Varios productores afines al gobierno denunciaron a hacendados huelguistas por la quema de sembrados, el corte de alambrados y la dispersión de hacienda lista para ser enviada a los mercados. Además se difundieron solicitadas intimidatorias como la publicada en el diario La Nación el 5 de noviembre: "La Asociación Rural de Carlos Tejedor informa a la opinión pública que han cargado hacienda para faena, intentando sabotear el movimiento de fuerza declarado por CRA y FAA, los siguientes ganaderos: Gatti Hnos.; Julia G. de Alvarez y José Catuzzi".

Por esos días el gobierno amenazó con decretar en estado de emergencia económica la comercialización de ganado. La medida autorizaba a la Junta Nacional de Carnes a proponer procedimientos tendientes a mantener el normal abastecimiento de la población, incluso contemplando la posibilidad de expropiar ganado. La respuesta por parte de los huelguistas no se hizo esperar. "Van a ocurrir hechos de violencia que nosotros no podemos controlar", aseguró en respuesta el titular de Federación Agraria, Humberto Volando. El cuarto lockout del año llegó a su fin el 10 de noviembre, pero el enfrentamiento siguió su curso. El 16 de febrero de 1976 la gran mayoría de los productores adhirió al paro empresario propuesto por Apege y el 27 de marzo tenían previsto iniciar otro lockout sectorial. Sin embargo, las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón antes de esa fecha. Los principales dirigentes del campo celebraron la llegada de la dictadura militar, a punto tal que Jorge Aguado, titular de Carbap, terminó siendo secretario de Agricultura de Roberto Viola y gobernador de la provincia de Buenos Aires con Leopoldo Galtieri.

Ahora la situación es diferente. Los militares están fuera de la escena política, pero varios referentes rurales están cuestionando al Gobierno con una virulencia propia de los '70. El viernes, justo el día en que se reanudaban las negociaciones, Carbap publicó en La Nación una solicitada dirigida a la Presidenta con términos provocativos y rupturistas. "Hubiera sido mejor que nos decepcionara el contenido de sus propuestas, en vez de herirnos con sus expresiones. La incapacidad de preservar la altura y dignidad de su investidura hizo descender el discurso al desprecio y la falacia. Peor aún, alentó rencores y enfrentamientos entre argentinos, que se concretaron apenas unas horas después en manos de grupos irregulares y violentos al servicio del poder (...) Que Dios la perdone y nos dé a todos la templanza para conservar la calma y preservar la paz", señala el texto de la entidad que preside Pedro Apaolaza y que apareció firmada por decenas de sociedades rurales de la pampa húmeda. Un verdadero déjà vu.

Publicada el 30 de marzo de 2008.

Diálogo y negociación

Por Washington Uranga

El lockout agropecuario permitió que asomen y se mezclen otros intereses políticos y económicos que nada tienen que ver con las retenciones. La simplificación hace que se pierda de vista que lo central radica en un conflicto de intereses y de poder que tiene un único titular posible: redistribución de las riquezas. Sólo admitiendo que ésta es la cuestión central se podrá encaminar la discusión. Incluso discutir si las políticas oficiales son las más adecuadas, si aplicar retenciones aporta al objetivo redistribucionista que se pregona. Pero hay que desenmascarar también a quienes, siendo los principales explotadores de los campesinos, pretenden hablar en nombre de éstos y sumarlos como tropa política propia, usando una metodología perversa propia del clientelismo que critican.

Ya se habló de que bajo el término del "campo" se uniformó igualando a los campesinos del Mocase santiagueño y a los terratenientes de la Pampa húmeda. De la misma manera se igualó las abolladas cacerolas populares del 2001 con el reluciente teflón de los últimos días. Tampoco se trata de descalificar éstas y sobredimensionar aquéllas. Ambas estaban y están plagadas de complejidad. Pero diferente es la legitimidad de este Gobierno, que acaba de revalidar su poder en las urnas, que la de aquél que se derrumbaba por el desgaste del sistema político y alimentado por sus incapacidades. Si el "que se vayan todos" del 2001 fue una exageración fruto de la protesta y de la indignación legítima, el "que renuncie" que algunos pronunciaron en los últimos días es, por lo menos, una miopía propia de clases medias que no suelen mirar más allá de sus intereses individuales, o bien el resultado de una desmesura ideológica melancólica del golpismo de otros tiempos.

La palabra "diálogo" ha sido de las más pronunciadas en los últimos días. También "negociación". Juntas ambas y por separado. No se trata de sinónimos. Negociar es una necesidad. Dialogar es una vocación. El diálogo no se produce de manera instantánea, es un proceso que se construye. Sólo es viable en la confianza y en el respeto mutuo, tomando como base el reconocimiento de la diferencia. Y entiéndase bien: dialogar no significa dejar de reconocer el ejercicio legítimo del poder de cada una de las partes, las asimetrías (incluyendo la diferencia entre quienes representan el interés legítimo del conjunto de la sociedad y quienes defienden el punto de vista también legítimo de un sector), las discrepancias, el conflicto. Sólo así se puede dialogar. Así cada uno llevará al diálogo sus propias convicciones pero con la responsabilidad de una activa preocupación por el bien común, más cercano a la solidaridad que a la mezquindad. Presumir de dialoguista y afirmarse en un discurso etnocéntrico y plagado de precondiciones no es ni más ni menos que un modo de ejercer violencia simbólica.

Publicada el 30 de marzo de 2008.

Por Juan Sasturain

Queridos, parto de la premisa de la definición de amigo que nos dejó al pasar el Negro Fontanarrosa: "Un amigo es alguien que si un día viene y te dice entusiasmado Acabo de ver una película iraní vos podés contestarle sin mayores miramientos No me empieces a romper las pelotas. Eso es un amigo". Es decir: alguien con quien se puede ser sincero y discrepar –por ejemplo– sin temor de romper nada porque no hay posibilidad de malos entendidos. Nada que se pueda romper es importante porque si se rompe es porque no tiene importancia. Porque la base está. "Amar es no tener que pedir perdón", decía en otro registro contiguo y más cursi el slogan de la alevosa Love story. No es nuestro caso, claro. Pero va por ahí.

Como la base está, Nene, puedo no ir a tu casa una reunión de sábado a la noche en que me había comprometido, no avisarte incluso, y mal/bien explicarte después que "todo se complicó" sin elaborar excusa ni inventar mentira. Y podría haber cruzado pretextos, pues tenía dos cumpleaños de amiga/o querida/o –como se usa por esas cosas de la ultracorrección– y no fui a ninguna parte.

Valga esta carta entrecerrada para tratar de explicar ahora que más o menos lo veo –dos días después– qué carajo (nos) pasó para decidir un poco inercialmente quedarnos en casa el sábado, "no estar con gente", una categoría más amplia que amigos, por supuesto. Hablo por mí, y no hablo por la reunión en tu amorosa casa, Nene, en la que me siento como en la mía y nadando en complicidades, sino por cualquier tipo de encuentro en general. La idea es haberme dado cuenta de que era preferible para mí y para cierto concepto acaso equívoco de salud no cruzarme con nadie, incluso contrariando las ganas. ¿Qué había ahí?

Es increíble, pero ahí estaba la política, fue por la política. La inevitable política. La puta política.

Querido Federico –que no fui, tampoco, a tu cumpleaños–, te cuento que hace mucho tiempo que trato de no discutir de política, de no pelear por ella. Es que no se trata de una cuestión más, sino que por muchos años fue la cuestión que definía todo. Desde que me fui del peronismo y del jetoneo con el primer sapo de la interminable Serie Menem atragantado –el indulto a los milicos y afines, va a hacer pronto veinte años–, no estoy parado en ningún lugar partidario, no voy a la Plaza, no hablo desde ningún lugar sino desde las pobres y a veces vacilantes convicciones, una posición compartida por tantos que tenemos opiniones pero no vocación política/partidaria.

Es que uno no se va de ciertos lugares porque deje de creer en lo que creía sino porque deja de reconocer a ese lugar como representativo de las cosas en las que sigue creyendo. Y no se va a otro lado. Se recoge, se va para adentro. Algo así.

Por eso, Andrea –y me disculpo acá, bah, te cuento– uno ha hecho autocrítica de su eventual intolerancia o ceguera calentona y reduccionista de otros tiempos, y siente o sabe que la mayoría de las veces no vale la pena discutir por política (ni por cualquier otra cosa). Sobre todo, trata de no cruzarse al pedo con energú-



Carta a los amigos del sábado

menos irreparables (es inútil) sino disuadirlos; no discutir con el taxista (bostezar) ni amargarse con radios de mala leche. Mi viejo, por ejemplo, ponía a Neustadt para putearlo, leía *La Nación* para confirmar qué no debía opinar. No me parece. Mejor dejarlo, como decía el sabio Vallejo.

En esa línea, amigos, cansado –acobardado, mejor–, un poco escéptico pero jamás cínico, uno apuesta cada vez más a "la paz resfriada" en detrimento de "la guerra con salud", se borra del peloteo, soslaya chicanas, le gambetea cada vez más al "nosotros" contra "ellos", se fija y calla. Y opina sólo y si le preguntan de lo que cree saber. Que cada vez es menos.

Hasta que –vos lo sabés, Nene, lo pueden entender Federico o Andrea– en determinadas circunstancias algo sucede. Como si todo se volviera a plantear, como si en este país nunca hubiera pasado nada y cada uno se inventara una virginidad política a medida de la ocasión y del olvido. Y ahí uno, literalmente, siente que toda la tarea de autocontrol y budismo zen de entrecasa aplicado a la cuestión política se va al carajo. Porque más allá de haberse sacado escuditos y marchas en busca de coherencia personal, más allá de atorrantes, patoteros y corruptos impresentables que ensucian la mejor foto, hay gestos enfrente tan repugnantes que lo obligan a uno a trazar una raya de tipo barrial: con éstos no, con éstos no me junto, no aprenden, no quieren ver, el odio los ciega. Y ahí, por eso, uno siente que si habla se saca, que va a terminar a los gritos y a las trompadas como en los viejos tiempos, que no puede ser que haya que ver y escuchar cosas (espontáneas, viscerales, verdaderas) que parecía que nunca más... Nunca más –qué palabritas– porque los milicos están desactivados o en otra... Porque la coyuntura internacional y latinoamericana no ayuda. Porque si no, en la Argentina no faltarían nudillos para golpear en la puerta de los cuarteles...

Y este exabrupto nada tiene que ver con los reclamos justos, muchos justísimos, del sector en conflicto. Hay que negociar, como debe ser. Y puede ser largo el tironeo, y cabe, y todos deben (debemos) escuchar, tratar de entender y si corresponde, cambiar. Ninguna protesta debe ser desatendida, y menos ésta, con tanta gente que está jodida.

Repito entonces –Nene, Andrea, Federico, amigos míos– y de nuevo estoy sacado: esto nada tiene que ver con las razones que me hicieron no salir el sábado, dejarlos colgados, evitar cruzarme y charlar con clase media porteña a la que pertenezco. Es que después de lo que escuché en las adhesiones a la protesta, después de la visión y lectura de algunas coberturas del conflicto, después de ver aflorar el prejuicio, la ceguera y la peor mala leche clasista histórica sólo me salía, si acaso me cruzaba con alguno, mandarlo a él y a todos esos –supongo inconscientes– a la reputísima madre que los reparió. Y no cabía ni cabe. Una vez más, la política no vale la pena.

Buenas noches.

Publicada el 1 de abril de 2008.

Democracia antes que soja

Por Orlando Barone *

El lockout, en inglés y en lenguaje económico político, es la huelga al revés: es la del propietario que cierra voluntariamente su fábrica en contra de las exigencias obreras. Si los afectados fueran los dueños del servicio de aguas y cerraran el chorro, dejarían un tendal de poblaciones en riesgo agónico. El lockout que cierra las tranqueras y los caminos y discrimina a su criterio el paso de mercadería amenaza a los consumidores con el in crescendo inflacionario y el desabastecimiento. Y perjudica a empresarios y trabajadores de otros rubros. Este ataque a la economía argentina es transparente pero temible. Viene de quienes se sienten damnificados por el Estado y de gran parte de quienes manipulan el lío. Si los relatores de estos hechos en lugar de preguntarles a los huelguistas si tienen bronca o si se sienten robados o confiscados, les preguntaran cuánto ganan y qué bienes tienen. Y cuánto exactamente dejarían de ganar por culpa de las retenciones. Y si además desnudaran la pobreza de sus peones rurales y por qué si los campos son tan productivos se despueblan, se vería todo el escenario. Y se vería cuáles son las víctimas reales. Que no son necesariamente las que gritan. Y los llamados y autollamados "pequeños productores" deberían sincerarse. Pequeños, diminutos, imperceptibles son los ciudadanos que ni siquiera tienen un lote. Un pequeño elefante no deja de pertenecer al rubro elefante. Nadie dice de un pobre que es pequeño. Es pobre o no es pobre. No está mal aclararlo. Todos somos peces. Pero unos son tiburones y otros cornalitos. Este enfrentamiento político puede alterar el resultado de las elecciones recientes. Ya hay analistas que especulan que éste es un punto bisagra a favor de los opositores. El Gobierno está asechado, y lo escribo con ese no con ce. No por el vasto campo, que es una abstracción geográfica, sino por quienes se mimetizan con él untándose de dudosa leyenda campesina. Es éste un peligro argentino reciclado del antiguo catálogo. Ya no se trata ni del peligro militar ni del peligro de ingobernabilidad ni del default, como ha sucedido cíclicamente. Ahora es el peligro de ruptura social y de quiebre democrático. Y surge porque se ha decidido un rumbo nacional que transgrede el rumbo deseado por quienes por eso no fueron elegidos en las urnas. La consigna "¡O se anulan las nuevas retenciones, o nada!" es un parte de guerra. Un ultimátum con tractores en vez de tanquetas. No hay gobierno que se resigne a este descomedido chantaje. Y es un chantaje porque no es un clamor de país, sino un rezongo de cereales y vacas. Cualquiera sea su razón, impedir el abastecimiento normal de alimentos no es un recurso huelguístico. No cuaja con las misas agrarias. La democracia está antes que la soja.

Publicada el 1 de abril de 2008.

El 1° de abril la Plaza de Mayo se llenó con organizaciones sociales, sindicatos y militantes en respaldo del Gobierno. La única oradora fue Cristina Kirchner, quien llamó a terminar con el desabastecimiento.

Fortalezas

Por J. M. Pasquini Durán

La Plaza de Mayo fue ocupada por numerosos grupos organizados y también por personas de ambos sexos y edades variadas que acudieron por su cuenta y riesgo. Intendentes, sindicatos y organizaciones sociales se encargaron de la movilización más orgánica, pero no hubieran colmado la Plaza sin el concurso de los independientes. No es un dato menor, puesto que el Gobierno acaba de cumplir los primeros cien días y ayer mostró que conserva la convocatoria que se puede esperar de quienes ocuparon, cómodos, el primer lugar en el escrutinio del 10 de diciembre. Los veinte días de piquete rural tendrán costos políticos para el Gobierno, pero si los ruralistas persisten también ellos tendrán que dar cuenta por sus actos. “No se puede representar al pueblo y enorgullecerse de desabastecerlo”, afirmó con razón la presidenta Cristina, única oradora del mitin. De todos los que se rasgaron las vestiduras por la presencia en la Plaza y en las tribunas oficiales de Luis D’Elía, son muy pocos los que han castigado con la misma saña la suprema violencia, arbitraria y arrogante, de los que impiden el paso de los camiones con alimentos, insumos industriales y mercaderías comerciales. Personajes de fama transitoria, como Alfredo De Angeli en Gualeguaychú y varios otros, aunque lo nieguen, son directos responsables del desabastecimiento y de la estampida inflacionaria en los precios del consumo masivo, cuya principal perjudicada es la clase media urbana, de la que se desprendieron los grupos menores que sonaron las cacerolas por una presunta solidaridad con “el campo”, aunque al verlos y escucharlos la memoria evoca añejos prejuicios antiperonistas.

Al Gobierno se le pueden dirigir distintos reproches por la oportunidad y el modo de manejar las retenciones, y por no hacer antes las debidas tareas para lograr consensos y, sobre todo, para contrarrestar la sostenida campaña de la derecha económica y política que usa esos déficit oficiales para reclutar adhesiones con una intención única y última: cambiar la orientación de la política económica gubernamental y desalentar el modelo de desarrollo sin exclusión social. A los dirigentes de las cuatro entidades rurales –incluida la Federación Agraria, que debería elegir mejor sus compañías– los devora la nostalgia por los años ’90 y hasta por los tiempos de Martínez de Hoz, hombre “del campo”, aunque su entorno haya sido el terrorismo de Estado, arrojando prisioneros vivos desde los aviones al Río de la Plata y robando bebés nacidos en cautiverio. Son los que quieren que vuelva Videla y los que consideran a Cecilia Pando, defensora irrestricta de las violadores de derechos humanos, como “una argentina más de nuestro lado”. Los mismos que contribuyeron, con un lockout como el actual, a desangrar al desastroso gobierno de Isabel Perón y a despejar el camino para el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En esta oportunidad, debilitar al Gobierno quieren y también ganarle la pulseada quieren, para que, de ahora en adelante, en lugar de los militares sea “el campo” la última línea de defensa del modo conservador de vida nacional. Es lo que está en juego y todo lo demás son fuegos artificiales, aunque la mano de obra para el piquete crea que de verdad el Gobierno arregló el bolillero para que los más chicos no puedan ganar el Gordo de Navidad, o las izquierdas ausentes de la Plaza piensen que los desabastecedores son el ariete de la transformación revolucionaria en ciernes. ¿Ariete? Ni arete, siquiera. De cualquier modo, todo eso quieren, pero hay que ver si pueden. Ayer la Plaza envió un mensaje a los desabastecedores inflacionarios. Hoy, los piqueteros tendrán que decidir si escuchan el rumor y abren aunque sea un paréntesis por uno o dos meses para ocuparse, de paso, de las cosechas y los animales. Los que se aficionaron a estar en la TV vagarán por los campos como almas en pena y algunos –quién sabe– se convertirán en luces malas o terminarán bailando por un sueño, como hizo alguna notoria piquetera urbana.

Los campesinos son, en verdad, una especie en extinción si los pronósticos de Naciones Unidas aciertan que antes de llegar a la mitad del siglo XXI el 80 por ciento de la población vivirá en las ciudades. El proceso de concentración económica, por otro lado, es otra tendencia mundial y mientras más capitalista sea la economía nacional más concentrada estará. A los gobiernos les queda el recurso tributario para ejercer la tutela del Estado a fin de evitar que los tiburones se devoren a todas las sardinas. Temprano o tarde, será inevitable la reforma impositiva para que los ricos paguen más que los pobres y, en esa batalla que ya comenzó, no hay lugar para neutralidades esterilizadas: o con los ricos o con los pobres y la opción cuenta lo mismo para la gestión de gobierno que para los opositores políticos. Sí, aparte de la Sociedad Rural y sus aliados hay opositores políticos, aunque no se noten demasiado debido a que en estos agitados días sus aportes a la concordia nacional fueron pocos y vanos.

Si a los piqueteros hoy los asalta el sentido común, a lo mejor doña Cristina llega a tiempo a París para almorzar con el marido de Carla Bruni, el presidente de Francia, ya que se perdió la cita en Londres. En su mensaje de la víspera dejó convocado el próximo mítin popular para el 25 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora. Hizo bien, porque aún con la tregua abierta, terminó una batalla pero no la guerra. Sería interesante, además, que el diálogo y la tolerancia no sean una exclusividad de cúspides, para que también intendentes y gobernadores ocupen un espacio político que necesitan y, en buena parte, merecen. En los años ’70, cuando los Kirchner eran jóvenes militantes, el diálogo no estaba muy de moda, pero se descontaba que hacer política no era actividad de ámbitos recoletos ni propiedad exclusiva de la vida matrimonial. Era (es) una tarea colectiva, de y entre muchos. Fuente de fortaleza para la democracia.

Publicada el 2 de abril de 2008.

Alfredo Srur



Contraluces del contracorte

Por Luis Bruschtein

"Señores del campo: Vinimos a la plaza y no nos pagó nadie", decía un cartel casero, de cartón, que llevaba un hombre con el uniforme del SAME, con su esposa y sus dos hijos. La frase traslucía el sentimiento de ofensa por uno de los argumentos que usaron los caceroleros que apoyaron el lockout de los productores agropecuarios y que fue tomado por muchos medios de comunicación y una parte de la izquierda. Para esos caceroleros, solamente ellos son ciudadanos manifestantes conscientes y civilizados, en tanto los que se les oponen serían todos "acarreados", "matones", o "ejércitos civiles" a sueldo del Gobierno –como dijeron algunos dirigentes de la Federación Agraria en los cortes–, ladrones y narcotraficantes. El hombre del cartelito no estaba en ninguna columna y se paseó por toda la concentración para que lo leyera todo el mundo. Era una forma espontánea de dignificar su decisión de ir al acto.

■■■

Había otro señor, más bien de clase media, que también se había hecho su propio cartelito: "Señores de TN: Yo también soy La Gente". Se paró frente a los camiones de exteriores de los canales para que lo enfocaran, pero no tuvo suerte. Entonces se contentó con despotricar contra los medios en los corrillos que se armaban a su alrededor. Fue también otra expresión de la sensación de ciudadano de segunda que se promovió desde el lockout agrario –y desde muchos medios y dirigentes políticos– contra quienes no estaban de acuerdo con ellos. "Yo también soy la gente", "yo también soy ciudadano". Eran dos carteles espontáneos que daban cuenta de las irrealidades que crea a veces la coyuntura y sobre todo el discurso inmediatista y demagógico de muchos medios.

■■■

Había una idea instalada de que el acto sería una gran demostración de aparatos y, al mismo tiempo, que su composición sería mayoritariamente de trabajadores convocados por la CGT y de sectores más humildes que movilizan los movimientos sociales. Y que no habría espacio para la clase media, que suele movilizarse con mayor independencia. Es cierto que en su mayoría eran trabajadores y sectores muy humildes y, por supuesto, en las inmediaciones había cientos de colectivos. Pero también fue sorprendente la gran cantidad de gente espontánea, suelta, que deambulaba por Avenida de Mayo y por las diagonales. En su mayoría eran personas de clase media media o media baja, como si esta vez hubieran sido convocados los barrios que no asistieron al cacerolazo rural.

■■■

En los viejos actos de la CGT era impresionante ver las columnas de obreros con sus ropas de trabajo, overoles y cascos, obreros de la industria, sobre todo de la UOM y el Smata. Pero ahora, las columnas más grandes, con 10 o 15 mil personas, fueron las de Camioneros, que encabezó Pablo Moyano, y UPCN. Los demás gremios movilizaron grupos más chicos que fueron sumando en cantidad hasta ocupar Bernardo de Irigoyen y parte de la Plaza de Mayo, que esta vez estaba completa porque las vallas se habían retirado hasta Balcarce, donde estaba el palco oficial.

■■■

Así como el movimiento obrero ya no es el mismo que en otras épocas, los movimientos sociales constituyen un nuevo factor en estas convocatorias. Luis D'Elía, que se convirtió en la gran bestia negra en los días previos, entró a la cabeza de una columna muy nutrida de la FTV –su agrupación–, CTA Barrios, el Frente Transversal y otras agrupaciones. A la cabeza iba D'Elía con Edgardo De Petris y el dirigente del Partido Comunista Patricio Echegaray y Víctor Mendívil, de la CTA, y los judiciales bonaerenses. Detrás venía otra columna muy nutrida de Libres del Sur y Barrios de Pie, entremezclados con contingentes del PI y el Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. Estas columnas cubrían toda la Diagonal, desde la Catedral hasta el Obelisco. El Movimiento Evita y el MUP entraron por Avenida de Mayo con manifestantes de las intendencias del conurbano.

■■■

Se cantó el Himno al comenzar el acto, pero la marchita peronista sólo se escuchó en algunos sectores aislados. Porque ese también constituye un factor nuevo en este tipo de concentraciones, donde antes la gran mayoría era peronista. Esta vez, los movimientos sociales que ingresaron por Diagonal Norte no se definen como tales, aunque muchos de ellos tienen identidades afines, con banderas del Che y de Evita, por ejemplo. Por Avenida de Mayo ingresó otra columna del Partido de la Victoria, encabezada por la senadora Vilma Ibarra, Graciela Ocaña, Gabriela Cerruti, Abel Fatala y Eduardo Sigal, del Frente Grande, junto a socialistas de la Capital Federal como Ariel Basteiro y Oscar González, entre otros. Con matices, desde identidades más cercanas al peronismo y otras más relacionadas con la izquierda o el progresismo, estos manifestantes no se consideran integrados a la disciplina del Partido Justicialista y conformaban una gran parte, casi la mitad, de la plaza.



■■■

Previo al acto, una camioneta estacionada cerca de la Catedral emitía viejos discursos de Evita a todo volumen. Desde los altoparlantes del palco oficial se escuchaban "La memoria" y otras canciones de León Gieco. También a los Coplanacu. En otras épocas hubiera resonado en la Plaza la marchita cantada por Hugo del Carril.

■■■

"Lamentablemente, en esta coyuntura parte de la izquierda apoyó al gran capital", afirmó Patricio Echegaray, el secretario general del Partido Comunista. "El PC no es neutral –dijo–, está aquí contra la derecha y por la distribución de la riqueza." Algunos sectores de izquierda, como el PCR, Castells y una asamblea de San Telmo, apoyaron el lockout patronal agrario que desabasteció los centros urbanos. Otros, como el PO, organizaron un corte de calle frente a la Facultad de Filosofía y Letras, en repudio al discurso de Cristina Kirchner del lunes, al mismo tiempo que se realizaba otro por el mismo motivo en Santa Fe y Callao. El POR, trotskista, en cambio, participó en la movilización en la plaza.

■■■

Desde la mayor parte de la concentración era imposible ver el palco por la gran cantidad de pancartas. El discurso fue escuchado con atención, pero sin ver a la Presidenta. Solamente se sintió un estruendo de bombos y gritería que avanzó desde la cabeza del acto hacia Bolívar cuando Hebe de Bonafini le entregó su pañuelo a Cristina Kirchner, que había mencionado a las Madres en su discurso. Cuando el locutor se percató, comenzó a vociferarlo por los altoparlantes y recién allí la mayoría entendió el motivo del ruido y se sumó.

Publicada el 2 de abril de 2008.

Por Plan Fénix *

El conflicto entre el Gobierno y un importante segmento del sector agropecuario –que no reconoce precedentes por los alcances de las medidas adoptadas por las entidades gremiales empresarias– demanda para su comprensión una mirada abarcativa, que pueda dar cuenta de su complejidad.

Por lo pronto, el debate acerca de las retenciones tiene implicancias que van mucho más allá de los términos en los que se ha planteado. Está en discusión, en rigor, el modelo de país a construir, que debe combinar, necesariamente, las ventajas comparativas naturales del agro con una creciente capacidad industrial. El país deberá crecer, en cantidad y diversidad, sobre la base de una producción tanto agropecuaria como industrial, así como de los servicios, apoyado sobre la innovación tecnológica y con la prioritaria reducción de la brecha social. La inserción internacional debe aprovechar las ventajas comparativas y reducir la vulnerabilidad del patrón de intercambio basado sobre la exportación de commodities.

Documento de los economistas del Plan Fénix sobre el lockout del campo

Crisis y oportunidad

En otras palabras, más allá de la cuestión de la distribución equitativa del ingreso y la indudable pertinencia de la apropiación social de una porción de la renta originada en las exportaciones primarias, la presente polémica resulta central en la definición acerca del rumbo del país. El debate emerge como consecuencia de la superación de la emergencia económica tras un largo período de exigentes desafíos durante el cual la economía se recuperó en buena parte de la abismal crisis previa. Es el momento de mirar hacia adelante, hacia el mediano y largo plazo, apuntando a resolver los desafíos estratégicos que debe enfrentar la Argentina.

Con esta mirada, tratando de anticiparnos al futuro previsible, quienes integramos este proyecto estratégico de la Universidad de Buenos Aires planteamos, en marzo de 2005, hace ya tres años, la necesidad de adoptar diversas medidas para evitar conflictos como los que hicieron eclosión durante las últimas semanas.

Decíamos entonces (véase *www.econ.uba.ar/planfenix/index2.htm*): "La apropiación social de la renta proveniente de recursos naturales (como la pampa húmeda o los yacimientos mineros) constituye una práctica universalmente aceptada. En la medida en que las retenciones permiten que la sociedad se apropie de parte de esa riqueza natural, ellas distan de constituir exacciones "distorsivas". En esta coyuntura de transición, cumplen otra función social, tal vez de igual importancia que la anterior: permiten que los argentinos paguen por los bienes de producción primaria –incluidos los derivados del petróleo y sus usos internos– precios inferiores a los que resultarían del tipo de cambio vigente (elevado en relación con el establecido durante la convertibilidad pero necesario para promover el desarrollo nacional). Se trata de una característica particular de nuestro país, habida cuenta de la vinculación que existe entre los precios de productos exportables agrícolas y energéticos, y la canasta de consumo popular".

Los productores más pequeños y marginales hacen suya esa demanda de eliminación de las retenciones porque esperan una mejora en sus ingresos, expectativa que no necesariamente se cumpliría debido a que la industrialización y comercialización de la producción agrícola tiene una estructura muy concentrada y una posición estratégica en la cadena de valor. Es presumible, por eso, que los beneficios de una eventual eliminación de las retenciones sean captados en buena medida por esos grupos y no por quienes plantean la demanda. Por otra parte, el incremento de los precios de los productos agrícolas valoriza las tierras destinadas a ellos, generando una segregación dentro del propio conjunto de productores, que separa notablemente la suerte de los que se ubican en zonas favorecidas o de los grandes respecto de los pequeños.

Aun así, no hay duda de que se trata de un instrumento con limitaciones. Las retenciones no permiten discriminar adecuadamente entre productores de distintas áreas y condiciones, problemas que serían resueltos de mejor manera por un impuesto a las Ganancias, que es muy difícil de percibir en las condiciones actuales del país y del agro. Por otra parte, su aporte es una razón más para exigir que la administración pública de esos recursos –y no sólo de ellos– responda a criterios de eficiencia y equidad. Esos condicionantes no implican que la eliminación de las retenciones ofrezca una vía para superarlos. Una fórmula de transacción sería, por ejemplo, que una parte de lo recaudado integre un fondo destinado a la capitalización tecnológica de los productores, en particular de aquellos de menor talla o situados en áreas marginales. Se requiere, entonces, un enfoque de carácter sistémico, que considere correctamente la inserción del complejo agroalimentario en un modelo de desarrollo con equidad.

La vigencia de estos conceptos, tres años después de planteados, habla del retraso en que hemos incurrido y, en consecuencia, de la responsabilidad primaria del Gobierno y también de la sociedad para encarar estas cuestiones cruciales, cuando –como antes hemos señalado– la actual coyuntura ya no puede calificarse, por cierto, como "de emergencia".

Esta crisis, aún no resuelta, representa una oportunidad para adoptar medidas de política en varios campos relevantes, enmarcadas en una estrategia de mediano y largo plazo. Ellas deben apuntar a consolidar un modelo económico que, en los hechos, ha instalado un escenario más propicio para el desarrollo nacional.

Buena parte del sector agropecuario ha centrado sus críticas durante el conflicto, a través de sus entidades gremiales, en las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y ha omitido toda referencia a los múltiples protagonistas, en particular a los sectores concentrados tanto financieros como terratenientes. Tampoco han sabido contemplar la particular situación de las economías regionales, más allá de algunas consignas generales esgrimidas.

Recién al declarar la suspensión del lockout por 30 días, las entidades agropecuarias admitieron que, para la resolución definitiva del conflicto, sean contempladas las necesidades del conjunto de los sectores del país.

El gobierno nacional debería asegurar que en la mesa de diálogo a constituirse estén representados todos los sectores interesados; allí no pueden faltar los trabajadores rurales permanentes y temporarios, tanto formales como informales, las entidades vinculadas con la agricultura familiar y la conservación ambiental, y los consumidores. Podrá así elaborarse un proyecto estratégico que contemple los intereses en juego, pero con la mirada puesta en las necesidades de toda la sociedad argentina, con el convencimiento de que no hay en nuestro país ninguna actividad que sea independiente de las otras ni –menos aún– superior a las demás, eludiendo las trampas conceptuales de la falsa dicotomía entre agro e industria. Esta instancia de diálogo podrá ser pionera de un acuerdo más amplio y abarcativo.

Por nuestra parte renovamos el compromiso de siempre, el que nos inspira desde que nos autoconvocamos en el año 2000, antes de la crisis de 2001 que anticipamos: profundizar el análisis de estas cuestiones cruciales, con el objetivo de generar propuestas concretas que contribuyan a la construcción de un modelo de país con desarrollo sustentable, distribución equitativa de sus frutos y calidad institucional.

* Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires.

Publicada el 5 de abril de 2008.

Precisiones

Por Julio Maier *

El manejo del idioma resulta imprescindible para comunicarnos y comprendernos. La deformación del idioma, mediante el artificio de nombrar ciertas realidades o conceptos con palabras que no representan su significado, no sólo confunde sino que, la mayoría de las veces, responde a un trasfondo ideológico que no se desea mencionar. La enorme mayoría de los medios, escritos, auditivos y, sobre todo, televisivos mencionó el lockout llamado "del campo" como "paro", locución que, a pesar de ser correcta según el segundo significado de la Academia ("interrupción de un ejercicio o de una explotación industrial o agrícola por parte de los empresarios o patronos, en contraposición a la huelga de operarios"), resulta, al menos entre nosotros, confuso. No es este último nombre el que se impone entre nosotros para denominar el mismo fenómeno, sino que, precisamente, usamos la expresión inglesa que hemos citado antes. Sospecho que tal realidad se vincula directamente con una razón ideológica: el propósito mediático de ocultar el trasfondo ideológico en la determinación del sentido de la cobertura periodística. Por de pronto, nuestra Constitución nacional sólo establece y garantiza el derecho de huelga (art. 14 bis, II) a los operarios u obreros; por lo contrario, no contiene un derecho al lockout o al paro patronal. La diferencia existe desde nuestra Ley Fundamental y no fue remarcada por las distinciones necesarias de la prensa, en general. Tal diferencia, por lo demás, viene también remarcada por la ley penal: el art. 158, referido a la prohibición de la compulsión a la huelga o al lockout, no sólo emplea esta última alocución para diferenciar ambos fenómenos ya por su nombre, sino que, además, guste o disguste, no prohíbe conductas idénticas o paralelas: marcadamente, prohíbe el uso de la violencia física por parte de un obrero para compeler a otro a tomar parte en una huelga, por una parte, y, por la otra, conmina con la misma pena la conducta del patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lockout. Se puede estar en desacuerdo acerca de la asimetría que implican esos textos, pero ella, en primer lugar, existe en nuestras instituciones básicas y, en segundo lugar, quien repase la razón histórica de ella –la regla proviene del texto originario del CP– hallará que el legislador tuvo en cuenta el distinto poder y las distintas posibilidades del obrero frente al patrón.

Lo visto en estos días, por tanto, no ha sido simplemente un paro, sino un verdadero lockout, con ejercicio de la coacción y hasta de la violencia física, en tanto ellas eran necesarias para evitar la llegada de frutos e insumos al mercado y anticipar a quienes prefirieran enviarlos aquello que les pasaría de persistir en su propósito. Por tanto, se trataba de una verdadera compulsión prohibida al lockout. Además, esto calificaría precisamente al paro-lockout presenciado: increíblemente, no se trató de la interrupción de la explotación agrícola propia del adherente a la medida, como informa el significado académico, sino, antes bien, de impedir que los demás, quienes no acataban el lockout, alcanzaran el mercado para sus frutos.

Más allá de ello y de algún caso particular, resulta evidente que los trabajadores en huelga defienden lo imprescindible para su subsistencia –el salario–, mientras que los patrones en lockout, más allá de ganar o perder con su explotación y, como dije, de casos particulares, resulta también evidente que no pueden amparar su reclamo en una justificación del mismo nivel. De allí la diferenciación que marcan tanto el idioma como la ley para ambos fenómenos.

* Abogado. Doctor en Derecho. Profesor consulto de la UBA. Integra el Tribunal Superior de la CABA.

Publicada el 6 de abril de 2008.

El Verbo expropiado por el capital privado

Por León Rozitchner *

Se da como cierto que los medios de comunicación –cuarto poder se definen, orondos, a sí mismos– son un poder sagrado, inamovible y absoluto, cuando en realidad son el producto de una expropiación del espacio público convertido en privado. Se presentan como si fueran el fundamento del poder democrático siendo exactamente lo contrario: su acceso está vedado a las diversas corrientes de expresión de la ciudadanía. Forman parte de una estrategia neoliberal mundial –el capital financiero internacional– que compró el dominio de la "opinión pública" al expropiar los medios de ejercerla. Basta leer los diarios importantes del mundo: todos están defendiendo lo mismo diciendo lo mismo con las mismas palabras. Su propiedad en nuestro país es tan espuria como el origen de la propiedad de la tierra: aliados del terror y del genocidio. (No olvidemos: una exigencia del poder militar en su ultimátum a Alfonsín requería que la televisión en manos del Estado fuese privatizada: entregada a los grupos financieros en cuyo nombre dieron el golpe.) ¿Podemos hacernos los ingenuos y seguir ignorando que es necesario, para que democracia realmente haya, que los medios sean abiertos a todas las perspectivas de la ciudadanía? ¿Ocultarnos que el éter es un espacio material público que forma parte de la soberanía argentina, isomorfo con su geografía? Como si el golpe de los grandes dueños de la tierra, y los financistas que la convirtieron en fondo de inversión, no formara parte del plan desestabilizador de su estrategia política. ¿No exige entonces, por parte del poder político, nuevas "retenciones" sobre lo que han acaparado para dejarnos hambreados de saber, escuálidos de conocimientos, ignorantes sobre lo que estamos viviendo? Para poder dejarnos sin alimentos los media tuvieron previamente que dejarnos sin palabras. Para decirlo brevemente: el golpe de Estado mediático de los grandes dueños de la tierra habría sido imposible sin el poder de los grandes dueños de los media.

Todos discuten si fue o no fue un golpe. Lo importante, creo, es que el fantasma de un golpe de Estado, real o fantaseado, es lo que el poder de los medios necesita despertar para que nuevamente los habitantes se rindan a las fuerzas del mercado. Vuelven a suscitar otra vez el fantasma del terror represivo desde aquellos que estaban en el estrado gualeguaychino: la Sociedad Rural, Carbap, Coninagro, la nueva pequeña burguesía de la Federación Agraria y, como si faltara algo para cerrar esta pastoral política que ya había ubicado a la derecha a una mujer de izquierda, lo inesperado: un cura paisano desde este extraño púlpito implorando a una nueva figura sagrada, a la Virgen Gaucha, rezando todos juntos un Padre Nuestro –mientras le extraen a la Tierra Madre todos sus nutrientes hasta dejarla exhausta–. Eso sí: ningún "negro" trabajador en negro los acompañaba.

Este golpe de "los dueños de la tierra" –expresión acuñada por David Viñas– no habría sido posible sin el apoyo cómplice y monopólico de los media. El monopolio del poder mediático fue primero aliado de la dictadura genocida, junto con el poder económico y el religioso. Aliado que sirvió, y sigue sirviendo, para desactivar el espacio corporal y subjetivo de la ciudadanía: impedir que pueda tomar conciencia y cuerpo sobre la verdad de lo que nos pasa. Son el instrumento de la "dictadura del saber único" en el del dominio económico y político de la globalización financiera. Son los que han ido modelando la conciencia y el imaginario, las pocas valencias libres que el pavor del genocidio había dejado disponibles en los sujetos aterrados de la ciudadanía.

Los que valoramos a la palabra como ejercicio privilegiado de una actividad de intercambio social por excelencia, que se define como "el habla", la "lengua" o "el pensamiento", base de la humanización que define nuestro ser o no ser hombres, hemos sido despojados de su uso social y hemos sido excluidos del espacio público. Nos han limitado, ante el avance técnico de las comunicaciones, a ejercerla sólo en los ámbitos restringidos abiertos hace siglos por la galaxia Gutemberg: a los libros y a la revistas especializadas que sólo son legibles para un público minoritario. En pocas palabras: hemos sido expropiados y expulsados del espacio social publico, nos han despojado del derecho humano de la expresión escrita o hablada. Es como si todos debieran leer un único libro: el que ellos escriben. La verdad circula sólo por lo que ellos permiten que se exprese y sus empleados –periodistas se llaman– repiten o dicen lo que el patrón les manda: en los media ha triunfado la dictadura del propietariado.

El papel de los "intelectuales". ¿Es posible que la universidad argentina, donde se elabora el saber "objetivo" y "científico" del conocimiento –el saber de los argentinos sobre nosotros mismos–, no tenga ni un canal de TV para difundir, en cada caso, un "saber" verdadero sobre cada circunstancia política, económica, técnica y social que es su función pedagógica innegable? ¿Debemos seguir aceptando que la función pedagógica para las grandes mayorías haya sido delegada en los grupos financieros que la organizan en provecho propio desde los media? Si rechazamos la privatización de la enseñanza por sectaria –que fue avanzando sobre todo luego de los golpes militares y económicos–, ¿podemos aceptar que el espacio público de la comunicación social siga expropiado por el capital privado?

No se trata entonces sólo de salir a decir que la tierra forma parte de un todo más amplio que es la nación misma. Habría que decir también que el "espacio" de los media es propiedad de la nación, de esa misma tierra etérea por donde la comunicación circula, que también su soberanía nos fue expropiada por los sucesivos golpes militares y económicos. El golpe económico del campo se apoya en la supervivencia, sobre la estela del golpe militar del '76: la amenaza del hambre se inscribe en la misma línea moral genocida que la amenaza de extermino de la vida. Y que si una buena parte de la ciudadanía está confundida y ya no entiende nada es porque esos mismos medios van cotidianamente ablandando y configurando el imaginario y la conciencia de la población argentina, que termina pensando contra sí misma.

Lo extraño es que recién, por primera vez desde los medios, la presidenta de la República –y porque accedió a ellos en un momento culminante– aparezca exponiendo masivamente un saber antes cautivo, y le comunique a toda la población una parte de la trama trenzada de los intereses turbios, hasta ese momento desconocida para la mayoría de los argentinos: ligar el genocidio militar con los media y con la economía. Intereses que están en juego nuevamente en este momento crucial en que el poder económico quiere sitiar al gobierno democrático para volver a despojarnos de lo poco ganado, y cuando todavía falta tanto. Y no es extraño que una ilustrada figura universitaria, prohijada por los media, le contestara para amonestarla: "No era el momento adecuado para que la presidenta de la República esbozara su tesis historiográfica sobre la complicidad de cualquier sector de la producción agraria con el golpe militar". Está claro: la "verdad" no es para que la sepa la mersa, sólo debe quedar circunscripta a las "tesis" de la academia universitaria. Que aparezca difundida desde el discurso de la primera figura política en la democracia, y sea difundida por los medios... ése es el pecado. Y nos está dando el ejemplo de aquello que los escritores debemos rendir para acceder a los medios públicos: sólo si aceptamos que la verdad llamada académica quede, clandestina, dentro de los claustros. Si renunciamos a decirla en público.

Esperemos que el Verbo, propiedad privada de los media, no sirva sólo de responso para una conciencia nacional difunta.

* Filósofo.

Publicada el 7 de abril de 2008.

El teorema de los alimentos

Por Ernesto Semán

Los países que exportan productos alimenticios enfrentan en estos días una misma disyuntiva a lo largo y ancho del planeta: imponer límites a sus ventas al exterior y resistir el enojo de sus grupos propietarios, o liberar el sector externo y enfrentar las protestas de los sectores populares por el encarecimiento acelerado de los alimentos, el famoso fenómeno de la agflación.

En un país como la Argentina, donde la inflación y las protestas sociales decoraron la caída de dos presidentes y la inflación ayudó a consolidar procesos regresivos de distribución del ingreso, no cabe duda de qué tiene que hacer cualquier gobierno que no sea suicida.

En las últimas semanas, en la Argentina se organizó un lockout contra el anuncio de retenciones móviles, una protesta que contó hasta con el apoyo de algunos de los beneficiarios de la medida que los indignaba, como grupos de las clases medias urbanas. En el mismo momento, en otras partes del mundo, el traslado directo del precio internacional de los productos primarios al mercado interno provocó una ola de levantamientos en protesta por la inflación: en Haití (un importador neto) las protestas dejaron cuatro muertos. En el último mes, las protestas en Egipto, Costa de Marfil, Mauritania, Mozambique, Senegal, Uzbekistán, Yemen, Bolivia e Indonesia tuvieron el denominador común de reclamar una baja en el precio de los alimentos. En Camerún, la represión a las marchas contra los aumentos de precios costó cuarenta vidas.

La "escasez" de arroz es, sin duda, uno de los ejemplos más perversos de este proceso: la producción exportable llega a Europa y Estados Unidos a precios altos que aún pueden ser absorbidos por esos mercados, pero en los supermercados de los países productores el mismo precio deja las góndolas llenas de paquetes de arroz y a los potenciales consumidores con sus carritos vacíos.

La ONU advierte que la pobreza generada por el aumento del precio de los alimentos puede generar una crisis política global. El titular del Banco Mundial, Robert Zoellick –insospechado de todo progresismo, mucho menos de kirchnerismo alguno– dice que el resultado inmediato es un aumento de la pobreza urbana como no se ve desde hace décadas. A Zoellick (y a muchos otros) le preocupa lo que parece ser un hecho consumado: en muy poco tiempo, a los países desarrollados se les puede acabar el maná milagroso de los alimentos baratos, como hace un tiempo ocurrió con el petróleo.

Para contener la inflación provocada por el aumento del precio internacional de sus productos, China, Vietnam, India, Camboya y Pakistán optaron por lo mismo que el gobierno en Buenos Aires: aplicar retenciones a las exportaciones y recortar (o suspender por completo) las ventas al exterior de algunos productos como arroz y café, para aumentar la oferta interna y contener la inflación. Todo esto sin haber llamado a Cristina Fernández ni a Martín Lousteau. Si uno es muy obstinado, puede suponer que lo único que les interesa a esos países es acumular dinero y aniquilar a sus productores para favorecer redes clientelares, que ninguno redistribuye, que el problema de la inflación no existe, o que sólo es consecuencia de que el kirchnerismo es malo y derrochón.

Con un poco menos de tozudez, a cualquiera le quedan claras dos cosas: 1) que el problema de la inflación es mundial, es urgente, avanza rápido, carcome las economías de los países exportadores de productos alimenticios y pone en tensión a sus sociedades y 2) que las retenciones y límites a las exportaciones son dos de las pocas herramientas que el Estado tiene a mano para resistir el doble acecho de las ganancias de sus elites y las presiones del mercado global, una tenaza que oprime las entrepiernas de los gobiernos y la distribución interna de los recursos, el excedente y los alimentos.

Cuando se incluye en la foto la presión del mercado mundial –que tiende a igualar globalmente los precios internos de las economías– se descartan al menos tres de las ideas más obtusas que circulan en la Argentina, y que asumen como realidad las fantasías de café en las que inscriben el conflicto con el agro.

Una es que la "necesidad de recaudar" se saciaría si el Estado mejorara el cobro de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, algo que no ayudaría en nada a contener el precio de los productos alimenticios (lo cual no quita que, aparte, el Gobierno debería ser más eficaz en cobrar dicho impuesto).

La otra es que la voracidad por recaudar sólo sirve para "agrandar el Estado" y financiar "redes clientelares", como si éstas no fueran, aun en su modo cuestionable, herramientas de redistribución del ingreso, y como si en Europa y Estados Unidos los beneficios del Estado de Bienestar los hubieran repartido San Pedro y San Pablo y no los funcionarios de turno a los que les tocó en suerte la tarea (lo cual no quita que el Gobierno debería avanzar hacia formas universales de garantizar el ingreso ciudadano).

Y la otra es que el lockout no habría existido si el Gobierno hubiera sido más preciso en el diseño de las retenciones y hubiera excluido a los pequeños productores, sobre la base de la idea ingenua y reaccionaria de que la distribución progresiva de ingresos es una cuestión de gerenciamiento y de que se pueden afectar los intereses de los productores agrarios y al mismo tiempo contar con su aplauso (lo cual no quita que el Gobierno podría hacer una lectura fina de la realidad social de ese sector productivo antes de darle forma definitiva a una medida).

En ese contexto, parece más que razonable la opción de aplicar las retenciones y, con otras medidas (subsidios a los combustibles, promoción de ciertos grupos industriales), tratar de contener una alianza social amplia aun a costa de moderar el efecto redistributivo. En verdad, el mayor riesgo para la Argentina es que, como un espectador marginal de la economía mundial, la presión de los precios internacionales se haga incontenible, el aumento del precio de los alimentos no pueda compensarse con los salarios, y el Gobierno pague al mismo tiempo los costos de las retenciones y los costos de la inflación, un panorama que afectaría mucho más que el futuro de una administración.

El Gobierno tiene una enorme cantidad de espacio para mejorar en cuanto al impacto de su gestión política y económica sobre la inflación. Pero aun si todas sus medidas fueran correctas, Moyano limitara las demandas salariales como la socialdemocracia de la posguerra y D'Elía adoptara los modales de Alberdi como le reclaman muchos espantados por la irrupción pública de la tensión social, aun después de todo eso, en el centro de la mesa seguiría estando el problema de la inflación y la necesidad de aplicar retenciones para evitar que el aumento de los precios internacionales impacte en la calidad de vida de los sectores populares.

Publicada el 11 de abril de 2008.

Interés general o renta particular

Por Ricardo Aronskind *

El lockout agrario dejó de ser un problema meramente económico y se transformó en un problema de poder. Una poderosa fracción de propietarios agrarios, acompañada por la derecha política, la mayoría de los medios de comunicación y sectores urbanos variopintos ha tratado de obligar a revocar una decisión del Estado nacional. Los problemas de los productores más débiles, los campesinos y los peones rurales no están reflejados en las demandas de esta violenta acción corporativa.

La palabra negociar tiene connotaciones confusas en Argentina, ya que por nuestra historia reciente se entiende que cuando el Estado negocia debe ceder ante las demandas privadas. En este caso, la "negociación" consistiría en que el Estado nacional aceptara el veto del sector privado sobre una política pública. Esta confusión sobre el lugar del Estado en la sociedad deriva del arrasamiento de las potestades y capacidades estatales, que se aceleró en los últimos treinta años.

El Estado es el único actor social que puede incorporar en su accionar el cuidado por la sustentabilidad política, económica, social y ecológica en el largo plazo que presentan las dinámicas productivas del país. Si el Estado abdica de estas responsabilidades, o las ejecuta débilmente, triunfa la lógica cortoplacista y todos los desequilibrios pueden ocurrir. El débil Estado de los '80 –incapaz de resistir las presiones sectoriales– terminó en la hiperinflación. El Estado capturado de los '90 –gobernando a demanda de las corporaciones empresarias– terminó en el default y la catástrofe social. El kirchnerismo tampoco ha tenido entre sus prioridades la reconstrucción del Estado, como instrumento solvente para la ejecución de políticas públicas orientadas al largo plazo.

La decisión de establecer una mínima dirección estratégica en relación a los desequilibrios múltiples que implica el modelo sojero causó un levantamiento de actores que no es sólo contra las retenciones. Es contra la autonomía del Estado y por la continuación de un Estado impotente. Es paradójico que un gobierno que casi no ha tenido políticas transformadoras en relación con la estructura impositiva, el perfil productivo o el cuidado de los recursos naturales se encuentre con semejante reacción ante una medida por la que pretende abandonar la pasividad.

El legado ideológico y político de los '90 parece ser más sólido de lo que se creía.

- La pretensión de las fracciones propietarias de dictar las políticas del Estado, subordinando el interés general al sectorial, continúa viva y aparecerá cada vez que se pretenda pensar más allá de los intereses privados puntuales.
- La reacción de parte de la población frente al conflicto, decodificándolo al comienzo en términos de "campo vs. Gobierno", es un reflejo aggiornado de la confusa antinomia "la gente vs. los políticos" de fines de la convertibilidad.
- Los medios de comunicación, en la mejor tradición noventista, ponen las necesidades de manipulación comunicacional de los sectores propietarios sobre cualquier prioridad informativa seria.

Si las demandas privadas hubieran tenido plena satisfacción se crearían dos severos problemas públicos: a) un salto inflacionario mayor aún del que existe actualmente y b) el desfinanciamiento parcial del Estado. Políticamente, el Gobierno empezaría a carcomer su base de sustentación social y a abonar el terreno para quienes quieren desplazarlo prematuramente.

La aparición de un actor poderoso, agresivo y con escasas convicciones democráticas pone a prueba al poder kirchnerista en un doble sentido: como construcción política capaz de afrontar esta disputa, y como gobierno eficaz, capaz de dar respuestas a temas como la inflación, la exclusión, la violencia social. Hasta ahora el Estado ha carecido de planes complejos y abarcativos, más allá de lograr superar el desastre de 2001-2002. Por su parte, el sector privado se limita a reclamar la libertad de enriquecimiento, que no implica desarrollo económico y social. La tarea de transformar la riqueza sectorial presente en un futuro colectivo digno es responsabilidad pública. Se está jugando en estos días si se empieza a avanzar en serio en esa dirección o si volvemos, como en el juego de la oca, a los siniestros '90.

* Investigador docente UNGS-UBA.

Publicada el 16 de abril de 2008.

Lo que hay y lo peor

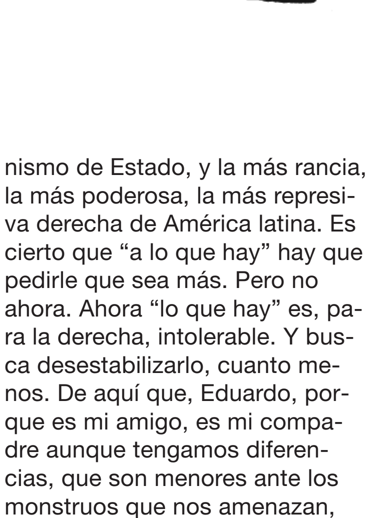
Por José Pablo Feinmann

No hay debate de ideas. Lo que se expone sirve para propulsar intereses, ocultándolos. Cuando uno cree que va a encontrar ideas se topa con textos de relevante pobreza. Son tiempos devaluados. En ese aspecto. En otros, son tiempos de furiosa beligerancia. Pocas veces –salvo en jornadas inminentes a golpes de Estado–, el periodismo jugó un papel tan importante, tan brutal, tan parcial como en estos momentos. Todo el periodismo –no sé cuál será la excepción, seguramente este diario, al que todos agreden como oficialista o directamente servil: vivimos en la época de los agravios, no de las ideas– apunta sus dardos contra el Gobierno. El nivel de ideas, de conceptos, de análisis es tan pobre, que no hay con quien polemizar. Si uno, hoy, dice: “Las retenciones al agro, por medio de un Gobierno con tenues tendencias a intervenir en la economía, son importantes para una paulatina redistribución de la riqueza, aun cuando, como todos sabemos, ese Gobierno no quiere ir más allá de un proyecto democrático, capitalista, con toques de distribucionismo, de un keynesianismo que lo acerca, aunque levemente, al Estado de Bienestar del primer peronismo, el que se explayó, sobre todo, entre 1946-1952”, uno pasa un lunes tranquilo, el teléfono suena poco, no lo agreden en las radios, ningún medio de lumpenperiodismo le discute algo. Primera causa: porque no entendieron casi nada. Segunda causa: si entendieron algo, temen discutir en esos términos. Si uno, en cambio, dice: “El llamado ‘campo’ es proto-golpista”, lo llaman de todos lados, o no lo llaman y lo agreden, lo insultan, a los diez minutos de “proto-golpismo” se pasó directamente a “golpismo” y ahí están todos opinando, lengüeteando palabras a diestra y siniestra, todos grandes profesores, grandes opinólogos, grandes, en fin, formadores de opinión. Que eso, es cierto, es en lo que se han convertido. Convencen a “la gente” de cualquier cosa. Todos enemigos de un Gobierno que, en el mayor error que cometió, en un error acaso suicida, les regaló los medios. Ese error puede ser grave, no sólo para este Gobierno sino para la democracia de este país. Porque lo que a través de ellos se explicita es el racismo, el odio de clases, el odio a la negrada, el odio a los inmigrantes, un machismo repugnante que late en todos los agravios a la Presidenta (que se formulan, ante todo, agraviando su condición de mujer, de aquí que se le diga “neurótica”, “histérica” o “que habla con un tonito que no se aguanta”), el apoyo a todos los que se enfrentan a un Gobierno elegido democráticamente y cuya legalidad, aun en medio de sus feroces ataques, debieran aclarar que respetan. Imposible: es hablar en el desierto. Se trata de una cruzada sin retorno.

No tengo espacio aquí para entrar en la cuestión populismo-mercado (que es la antinomia que hoy realmente está en juego), porque el tema es para ser desarrollado extensamente. Hoy, en este diario, si alguien quiere leerlo, ese tema está: en el suplemento que publico domingo tras domingo, hoy, sus dos primeros parágrafos abordan esta cuestión. El primero lleva por título: Pasado y presente de la batalla entre el intervencionismo estatal y el libre mercado. El segundo: La palabra clave de la distribución del ingreso: “retención”. Mi contratapa, hoy, es ésa. No es casual. Le estoy dedicando un amplio espacio al golpe de 1955 porque, en él, todo está prefigurado. También lo que pasa hoy. En el plano económico, el golpe de 1955 vino para destruir el intervencionismo estatal peronista (expresado, sobre todo, por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI) e implantar la economía de la libertad absoluta del mercado respaldada por el apoyo financiero externo, ya que es, en ese momento, cuando nuestro país ingresa al Fondo Monetario Internacional.

Ante la pasmosa pobreza conceptual recibí con alegría una nota de Eduardo Grüner, publicada en este diario. Admiro a Grüner y he leído con pasión sus libros. Es profesor de Teoría Política y de Sociología del Arte en la Universidad de Buenos Aires. La gente conoce más a Chiche Gelblung que a él, desde luego. Pero así es “la gente”.

Grüner señala que las medidas tomadas “por uno de los sectores más concentrados de la clase dominante argentina” son “sobredimensionadas, extorsivas, objetivamente reaccionarias, y actuadas en muchos casos con un discurso y una ideología proto-golpista, clasista y aun racista”. Totalmente de acuerdo. El sector de la clase dominante o, si usted prefiere, de la clase dirigente o, para ahondar más la cuestión, del “establishment”, de eso que es, realmente, el Poder y no el Gobierno (con lo cual les señalamos a ciertos progres, que creen estar luchando contra el Poder desde la “libertad de prensa”, que no lo están haciendo, ya que el Gobierno, lejos, muy lejos, está de ser el Poder sino que sólo es el Gobierno), que está enfrentando al Gobierno que preside Cristina F. es el sector agrario, encabezado por la Sociedad Rural y utilizando como tropa a los llamados “pequeños productores” que, al haberse encolumnado con los poderosos, revelan que son pequeños muy a su pesar y que no lucharán contra los grandes sino que buscan ser como ellos. Ninguno de los “pequeños” habría engrosado la manifestación de los “grandes”, ni siquiera un almacenero, si quisiera en verdad ser diferente de los “dueños de la tierra”, pero no. Quieren dejar de ser peones de los grandes y pasar a ser patrones de sus peones propios. Actúan como clase media que son. La clase media teme “bajar” y ser clase baja, negrada, clase obrera o excluida social, quiere trepar y ser clase alta. La “unidad” del 2001 fue una ilusión hiper-momentánea. “Piquetes, cacerolas, la lucha es una sola.” No, la lucha no es una sola. La clase media juega a favor del establishment porque ésa es su meta en la vida: trepar en la escala social. La unidad con los piquetes del 2001 fue una medida coyuntural de supervivencia. Ahora está donde quiere estar: caceroleando para los dueños de la tierra, para la Sociedad Rural, dándole cuerpo a la protesta, espesor, ruido y cierta masividad. (A propósito: olvidarse de la “cacerola”. La “cacerola” nació como instrumento de las señoras bien de Chile para derrocar al comunista Allende y traer al democrático Pinochet. Nunca me gustó la cacerola aquí, en el país. Siempre me olió a conchetaje chileno. A septiembre de 1973. Al preludio de la masacre chilena, que fue el preludio de la nuestra.)




Grüner, creo, se equivoca cuando escribe: “En fin, no estamos –hay que ser claros– ante una batalla entre dos ‘modelos de país’; el modelo del Gobierno no es sustancialmente distinto al de la Sociedad Rural”. ¿No? ¿Y todo este desmadre, entonces, por qué? Grüner dice que el proyecto del Gobierno y el de la Sociedad Rural son sustancialmente no-distintos porque los dos son capitalistas. Califica al Gobierno de “reformista-burgués”. ¿Y qué podría ser? ¿Lo que dice algún jovencito del PO, que acaba de leer el Manifiesto Comunista? ¿Debería ser revolucionario socialista? Hoy, un gobierno reformista burgués es mucho más de lo que la Sociedad Rural, todo el establishment y los Estados Unidos están dispuestos a aceptar en América latina. Al reformismo burgués le dicen populismo y, para ellos, es la peste. Grüner (que está a infinita distancia intelectual de cualquier jovencito que asoma al mundo de la politología) lo sabe y se rectifica a sí mismo. Lo que aquí se juega es un choque entre “lo que hay” y “algo mucho peor”. Entre un gobierno populista, con tendencias a la distribución del ingreso y al intervencionismo de Estado, y la más rancia, la más poderosa, la más represiva derecha de América latina. Es cierto que “a lo que hay” hay que pedirle que sea más. Pero no ahora. Ahora “lo que hay” es, para la derecha, intolerable. Y busca desestabilizarlo, cuanto menos. De aquí que, Eduardo, porque es mi amigo, es mi compadre aunque tengamos diferencias, que son menores ante los monstruos que nos amenazan, aclara que no está a favor del Gobierno sino en contra “de intentonas que a esta altura ya nadie puede dudar (...) que son ‘desestabilizadoras’, ‘golpistas’, ‘reaccionarias’”. Y aclara que no debemos equivocarnos “sobre dónde está el peligro mayor”. Inútil, Eduardo, que insistas tanto en decir que no estás “a favor” del Gobierno. Sólo con lo que dijiste la ralea comunicacional y la derecha te tildarán de “cristinista”, “kirchnerista” y, lo siento, “peronista”. Son así.

Publicada el 20 de abril de 2008.

No hay dos sin tres

El ministro de Economía Martín Lousteu renuncia el 24 de abril y es reemplazado por el todavía flamante titular de la AFIP, Carlos Fernández.

Por Mario Wainfeld

"Si Moreno es un recurso táctico para endurecer la negociación, está todo bien. Si Moreno es quien produce la estrategia del Gobierno, estamos en el horno", sintetizó más de una vez Martín Lousteau ante oídos amigables, empezando por su equipo y por su mejor aliado en la interna oficial, Alberto Fernández.

En poco más de cuatro meses, peleando con su predecesor el record de brevedad en los dos gobiernos de los Kirchner, el joven (ya ex) ministro de Economía no pudo convencer a su presidenta (ni al ex presidente) de ese sencillo aserto. También fueron desoídos otros, que resultan bastante evidentes fuera de Palacio.

El primero, en orden cronológico, fue la necesidad de restaurar la credibilidad del Indec.

El segundo (sí que prioritario desde los pininos de su gestión) fue la creciente gravedad de la inflación. "Nadie puede negar que los precios suben, en especial los de los alimentos que forman parte de la mesa de los argentinos. Y que ese aumento castiga especialmente a los más pobres", porfió Lousteau repetidas veces. Tuvo escuchas atentas pero la cúpula oficial creyó que no había motivos para innovar ni para cambiar. "Si el crecimiento sustentable estuviera garantizado sencillamente con tipo de cambio competitivo y superávit, todos los países del mundo crecerían al 8 por ciento, indefinidamente", argumentaba el ministro, mientras su poder relativo se consumía como la piel de zapa.

El hombre sostuvo su postura. Pero cayeron en saco roto sus reclamos a favor de mayor sofisticación, de complejizar el "modelo", de generar índices de precios creíbles, de notificarse que las políticas de carnes y de granos habían favorecido la demonizada sojización.

"Moreno se negó a reconocer el valor del arrendamiento como integrante del costo de la leche. Les bajó el copete a los productores por un rato. En el mediano plazo, muchos se van pasando a la soja", pintó cuestionando no ya los modales sino la falta de política del Supersecretario.

No renegaba de la intervención estatal, proponía imaginar un organismo similar a la clásica Junta Nacional de Granos, con las reformas institucionales que fuera menester. No renegaba de la acción gubernamental en la formación de precios. Bregaba por mecanismos más sofisticados, mirando a extremos de la cadena soslayados por la lógica sacralizada por los dos presidentes. "Los supermercados tienen márgenes feroces, se puede meter mano al final, no puede ser que se lleven más del 20 por ciento en alimentos básicos o 30 por ciento en aceites." La preferencia oficial, desde siempre, fue acordar con "pocos pero grandes": un rebusque práctico que pudo valer en la emergencia pero que, prorrogado en exceso, castigó a los empresarios menos pimpantes a favor de los más concentrados.

En esta semana, Lousteau alertó públicamente acerca de la necesidad de poner en caja a la inflación, un reclamo que formulan a voz en cuello casi todos los economistas que tienen puntos de vista afines o no antagónicos al "modelo". Desde Miguel Bein hasta Eduardo Curia, pasando por Leopoldo Frenkel han encendido luces amarillas intensas. Lousteau le puso números a esa advertencia: según estudios que manejaba su ministerio, el crecimiento del consumo de sectores populares fue superior al de clases medias y altas entre 2003 y 2006. A partir de ahí, la ecuación se invirtió. El consumo de los argentinos con más recursos subió más que el otro, quizá lubricado por la falta de estímulos al ahorro y los subsidios tarifarios que el gobierno les prodigó.

Esa distancia creciente entre el gobierno y quienes (sin integrar su disco rígido) pensaban parecido pero mantienen su espíritu crítico seguramente limitó el casting de sucesores de Lousteau. Es entre improbable e imposible que un economista de primer nivel pudiera aceptar un ministerio tan envenenado y tan vaciado de incumbencias como el que soportaron (más allá de sus diferencias personales, formativas y de estilo) Felisa Miceli, Miguel Peirano y Lousteau. La secuencia de sus sucesivas salidas, tras haber tropezado con la misma piedra (que no es Mario Guillermo Moreno sino el esquema de funcionamiento oficial que le da cabida y eminencia) revelan una disunción sistémica de la que el Gobierno debería tomar nota.

En derredor de Palacio ya se empieza a decir que Lousteau pretendía enfriar la economía, un slogan que identifican con el fracaso y el neoliberalismo. Quizá su afán era dinamizar un cambio cualitativo para preservar lo ya acumulado sin creer que los instrumentos utilizados para salir del infierno eran (dogmáticamente) los ideales cuando se pasó al Purgatorio.

Aun si fueran ciertas las criticas despiadadas que se murmuran contra el funcionario saliente, no excusarían a la Presidenta del error de haberlo elegido y a la pareja presidencial de armar una máquina de lijar a sus propios ministros de Economía.

Carlos Fernández arranca como un ministro carente de pergaminos. Cuesta imaginarlo como algo diferente al número dos de Moreno, tal vez intente otra cosa. Arranca en un momento muy poco promisorio del kirchnerismo (quizás el más flojo desde 2003) inimaginable el 10 de diciembre del año pasado.

No queda sino desearle buena suerte y pedirle que, más allá de los microclimas de Palacio, se percate de que el Gobierno pasó de pantalla. Que son otros los desafíos, otros los requerimientos de la sociedad civil y los sectores productivos, otros los reclamos de los gobernadores. Y otras también las correlaciones de fuerzas. Que la agenda no es la misma. Y que, reperfilados los objetivos, es puro mecanicismo atribuir virtudes imperecederas a viejos instrumentos.

Y que (más allá de palabras, microclimas y voluntarismos), la inflación está desnuda.

Publicada el 25 de abril de 2008.

El otro corner

Por Alfredo Zaiat

Los ministros de Economía ya no son lo que eran. O, en todo caso, ya no son lo que eran durante la administración kirchnerista. Incluso Roberto Lavagna, el primero de la gestión que comenzó en mayo de 2003, nunca tuvo el espacio de ministro todopoderoso, aunque tuvo más juego propio que sus sucesores. Felisa Miceli, Miguel Peirano y Martín Lousteau no pudieron a su turno mostrar su perfil de técnico entendido en la materia ni imponer cierta impronta a su tarea. Han quedado atrapados de una lógica de ejercer el poder que no ubica al ministro como asistente del Poder Ejecutivo, lugar lógico luego de décadas donde el titular del Palacio de Hacienda compitió con el poder del Presidente, sino que fueron simplemente funcionarios secundarios de una estructura ministerial. Esa limitación estaba señalada en la igualación de su capacidad de decisión al nivel de un subordinado, en este caso el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Como en tantas cuestiones de la historia económica y política argentina, el péndulo de los procesos va de un extremo al otro. A lo largo de los últimos 50 años del siglo pasado, los ministros de Economía asumieron el rol estelar en los gabinetes nacionales al mismo tiempo que las crisis se iban extendiendo y reiterando. Se confundían los roles por la excesiva e interesada influencia del establishment en la (de)formación de consensos sobre lo que hay que hacer para ser un "país normal". Pero ahora se ha pasado al otro corner. El ministro ha quedado totalmente desdibujado. Ni todopoderoso, ni poderoso ni influyente. Pero cuando emerge una crisis, como la precipitada por el desafío de un sector del campo o cuando empieza a ser más evidente que existe un problema con el alza de precios, la figura de un funcionario encargado de la Economía resulta importante, al menos para manejar las expectativas de la sociedad. La gente necesita, dicen los entendidos en política y en comportamientos sociales, un referente que le brinde seguridad de que un especialista se está ocupando del tema. Y, ya sea por la incapacidad de Lousteau para liderar la gestión, que se manifestó en la deficiente presentación del mecanismo de retenciones móviles, o ya sea por el estilo de conducción del kirchnerismo, lo cierto es que el ahora ex ministro no era un hombre que se había ganado esa confianza ni se había mostrado competente en la tarea de persuasión. A diferencia de lo que pide el establishment, que aspira a tener un presidente subordinado al ministro de Economía para aplicar las recetas tradicionales, lo que se necesita ahora es un ministro (Carlos Fernández) que no sea desafiado permanente en su autoridad para poder avanzar en la resolución de ciertas cuestiones que no son sencillas, como el Indec y la inflación.

Publicada el 25 de abril de 2008.



De eso no se habla

Por Mocase-Vía Campesina *

En Argentina viven 280 mil familias numerosas de 22 pueblos indígenas, y 220 mil familias campesinas, con al menos 1,5 millón de personas. No producen soja ni suscriben a los agronegocios, siembran alimentos y crían animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra, no la consideran un medio para negocios, se entienden como parte de ella, de su cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones. Estos dos actores centrales, pueblos originarios y campesinado, fueron sistemáticamente excluidos del debate del último mes, donde las cuatro entidades más tradicionales y conservadores del campo argentino realizaron un paro patronal inédito en el país.

Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Federación Agraria (FAA) se movilizaron y desabastecieron de alimentos las grandes ciudades por un principal objetivo: el aumento de su rentabilidad, bendecidos por el precio internacional de la soja. Los chacareros, sean grandes o pequeños, en ningún momento corrieron peligro de pérdidas económicas, pero sí (luego de una medida impositiva del Estado) estuvieron a punto de ganar menos dinero del esperado.

Durante semanas, manifestaciones y cruces verbales de variados tonos, las entidades tradicionales y el Gobierno silenciaron los siguientes temas:

■ **Negocios.** En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997, en Argentina se cosecharon once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. Es el tercer exportador mundial de grano de soja (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite. Las exportaciones de soja y sus derivados, en 2007, fueron por 11.000 millones de dólares. Argentina ya no produce alimentos y en el país no se come soja. La demanda proviene de Europa y China, donde es utilizada para alimentación animal.

■ **Desalojos.** El modelo de agronegocios basado en la soja transgénica desalojó, en los últimos diez años, 300 mil familias de campesinos e indígenas, que tuvieron como destino barrios empobrecidos de las grandes ciudades.

■ **Desmontes.** En sólo cuatro años, y por el avance de las plantaciones de soja, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora.

■ **Concentración.** El modelo agropecuario actual, basado en la exportación y la producción intensiva, produce mayor concentración. El último censo agropecuario confirma: el diez por ciento de las denominadas "explotaciones agropecuarias" más grandes concentra el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.

■ **Desempleo.** Mil hectáreas de soja pueden ser manejadas por sólo cuatro personas. Un tambo con esa superficie requiere, de mínimo, veinte trabajadores. Si esa porción de tierra estuviera en manos de familias campesinas indígenas, implicaría trabajo para 350 personas.

■ **Salud.** Los campos argentinos fueron rociados el último año con 165 millones de litros de glifosato, un agrotóxico denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Las acusaciones apuntan a la mayor semillera del mundo: Monsanto.

■ **Empresas.** Las compañías con mayor rentabilidad del negocio sojero (exportadoras y proveedoras de insumos) son Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Nidera, Cargill, Bunge, Dreyfus, Dow y Basf, entre otras. Ninguna de ellas fue cuestionada en el reciente conflicto.

■ **Explotación.** 1,3 millón de personas trabajan en el campo. El sueldo generalizado es de 1250 pesos al mes. Es considerado, por el propio Estado, el trabajador peor remunerado, el que padece las peores condiciones de trabajo y el más explotado. Aún se les paga con comida y viviendas precarias, en condiciones cercanas a la esclavitud. Además, el 75 por ciento de ellos está "en negro", sin contrato de trabajo, cobertura de salud, aportes jubilatorios ni seguro por accidentes.

■ **Diferencias.** Durante el paro patronal, se utilizó como punta de lanza la situación de un "pequeño productor" con 100 hectáreas. En términos puramente económicos: cada hectárea se alquila a 200 pesos por mes, 20 mil pesos cada treinta días, 240 mil pesos al año sólo por alquilar su tierra. Si este propietario es "pequeño productor", ¿cómo debiera llamarse a una familia campesina o indígena con veinte hectáreas, cien chivas y huerta para autoconsumo?

■ **Futuro.** La industria de los agronegocios tiene dos próximas metas en Argentina: introducir a su negocio diez millones de hectáreas (en detrimento de productores familiares) y los agrocombustibles (la creación de combustible a partir de soja), negocio con el que pretenden avanzar sobre otros cuatro millones de hectáreas de campesinos e indígenas.

■ **Otro modelo.** El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 15.000 familias de siete provincias, no fue incluido en las discusiones. El MNCI, con similitudes al Movimiento Sin Tierra de Brasil y los zapatistas mexicanos, fomenta la organización de los más pobres y marginados del campo argentino, la base de la pirámide rural. Dos de sus propuestas centrales son la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria, lo que implica un cambio de modelo agrario. Cuestión de fondo que las cuatro entidades tradicionales, y el Gobierno, prefieren no hablar.

* Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina. Conformado por 9000 familias del monte, que viven de lo que producen y rechazan el modelo sojero.

Publicada el 25 de abril de 2008.

Sobre la renuncia y la crisis del campo

Por Alejandro Horowicz *

La renuncia del ministro de Economía, a cuatro meses de su nombramiento, ilustra una crisis política de gravedad ineludible. Sin embargo, los análisis que intentan explicarla son, a mi ver, insuficientes. Se apunta a una lectura formal de la democracia representativa, a interpretaciones normativas sobre legalidad y legitimidad, al problema cierto de la desinformación, la manipulación y la mediocridad de los medios de comunicación concentrados (una situación en la que este gobierno, hoy castigado por su comportamiento, tiene responsabilidad directa). Pero este abordaje, ¿no soslaya la clave de la crisis?

No cabe duda de que la información sesgada de los medios facilita que un sector de capas medias urbanas salga a golpear cacerolas de teflon. No cabe duda de que el corte de rutas realizado por pequeños productores agrarios deslegitima al Gobierno, ¿pero su presencia en las rutas obedece tan sólo a una maniobra política opositora? No cabe duda de que el subsuelo racista, sexista y gorila se expresa prepolíticamente como una avalancha de insultos, ¿pero estas lacras son recientes? Y si no lo son, ¿qué las gatilló todas juntas? En síntesis: ¿qué puso en crisis al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner?

El Gobierno intenta una respuesta simple, elige un responsable para descargar en su persona el costo político de la crisis; por eso Martín Lousteau renunció al cargo. Para la sociedad, Lousteau es formalmente el autor intelectual y político de las retenciones móviles a las exportaciones de soja, y son precisamente esas retenciones las que provocaron una huelga de 21 días del bloque agropecuario –con el consiguiente desabastecimiento de los centros urbanos–, que obligó a la Presidenta a modificar el sistema de retenciones. Desde la lectura oficial, si la medida original hubiera diferenciado a pequeños productores de los demás, la sangre no hubiera llegado al río y la crisis no hubiera estallado. Es decir, la crisis sería, desde esta perspectiva, el resultado de una medida inadecuada del ministro, y eliminada la medida y destituido el ministro, todo volvería a foja cero. Creo que este abordaje contiene un lamentable error analítico, cuyas consecuencias políticas agravarán la marcha de la crisis.

En sus intervenciones públicas la Presidenta proporcionó algunos datos relevantes. Dijo Cristina Fernández: el 2,2 por ciento de los productores aporta más del 40 por ciento de toda la soja transgénica. Del total de las 30 millones de hectáreas cultivables, la soja utiliza la mitad. Como el número de productores sojeros asciende a 84 mil, unos 1800 utilizan 7 millones de hectáreas, mientras 67 mil productores, el 80 por ciento, araña tres millones de hectáreas.

Pero subrayemos un dato adicional: cuando Néstor Kirchner accedió a la presidencia, la producción de soja utilizaba alrededor de 10 millones de hectáreas, contra las 15 actuales; por tanto, creció un 50 por ciento. En el 2003 una de cada tres hectáreas se destinaba a la soja; hoy, una de cada dos hectáreas está dedicada a ese fin. Entonces, la tendencia al monocultivo sojero es anterior al gobierno K, pero la consolidación del modelo se produce durante esta gestión.

Voy a obviar –no porque resulte obviable– las consecuencias de un modo de actividad que destruye la diversidad biológica, el gravísimo impacto sanitario que impone a la población que está en contacto directo con esa producción, para concentrarme sólo en sus consecuencias inmediatas:

a) El potencial peligro de transformar la Argentina en importador de alimentos, ya que de seguir la tendencia al monocultivo –potenciada por los precios agrarios internacionales–, ese horizonte se terminará de instalar en menos de una década, si se piensa que en 1995 se destinaban a la producción de soja 5 millones de hectáreas y actualmente ronda los 15 sobre un total de 30.

b) Un modelo de monocultivo organizado desde la producción de semillas controladas por empresas monopólicas transnacionales, que disponen de capital tecnológico, que venden un paquete tecnológico completo, sumado a un modelo de siembra que potencia todas las tendencias a la concentración de las unidades productivas, tiende a sacar del negocio a los pequeños productores. Es decir, a potenciar una reconcentración del factor tierra a niveles desconocidos. Ergo, el descontento de lo pequeños productores por la política agraria del Gobierno es mucho más profundo, no se soluciona solamente bajando las retenciones, sino que requiere de una política agropecuaria que no se sustente en el monocultivo sojero.

c) La continuidad de la reprimarización de la economía ejecutada durante la gestión de Martínez de Hoz, y estabilizada en los '90, más allá de los discursos oficiales, se constituye de hecho en el único modelo productivo posible. Desde esa perspectiva, las retenciones terminarían siendo circunstanciales. Es decir, serían el "aporte del campo" a los coletazos de la crisis del 2001, todavía vigentes. Es que su carácter transitorio está en la naturaleza misma del modelo sojero, lo entiendan o no los que desde el Gobierno presentan este conflicto como una simple disputa por la distribución de la riqueza, que se agotaría en las retenciones: finalizada la crisis, dado su carácter extraordinario, las retenciones deberían eliminarse o morigerarse. Esa es la expectativa compartida por los productores agropecuarios y sería, a su juicio, el resultado democrático de una negociación. Pero frente a esto el Gobierno no presenta ningún programa alternativo. Ante su falta, el modelo sojero quedaría definitivamente instalado, con el consiguiente desequilibrio de precios relativos –aumento del precio de los productos de origen agropecuario, sin mejora del salario real– que vuelve a imponer un modelo de distribución del ingreso aún más regresivo que el vigente.

d) El bloqueo del debate sobre un proyecto nacional alternativo, que no nos condene a producción primaria perpetua.

Entonces, la pregunta por la crisis debe reformularse como pregunta por la crisis del monocultivo sojero, ya que son sus consecuencias estructurales y no tan sólo el episodio de las retenciones móviles lo que está en debate. Esta crisis, a diferencia de las anteriores, nos permite discutir con la sociedad argentina un proyecto superior, y no un simple emparche para salir del infierno, debate que desde 1973 estaba clausurado en la Argentina. A mi ver, el papel de la Facultad de Ciencias Sociales y de quien quiera sumarse estaría vinculado con fogonear ese debate, con alimentarlo con su mejor producción, y con democratizar la toma de decisiones de una política que debe pensarse a escala sudamericana.

* Ensayista, profesor de la carrera de Sociología (UBA).

Publicada el 28 de abril de 2008.

Intimidaciones, boicots y calidad institucional

Por Antonio Cafiero *

En los últimos meses los argentinos hemos asistido a un nuevo y drástico viraje ideológico en el antiperonismo irredento: de una férrea postura “republicana” (o “institucional”) a una tenaz defensa de presiones corporativas intimidatorias. Como veterano de todas las cruzadas antiperonistas, no es algo que me sorprenda: todavía hoy, para algunos, la violencia tiene menos importancia cuando se aplica contra gobiernos, dirigentes o militantes peronistas.

En este tiempo hubo quienes asumieron una posición contraria a las retenciones sólo para expresar su indisposición con el gobierno nacional. Podrían haber asumido posiciones industrialistas o federalistas, o ecologistas, o cualquier otra cosa. No pretendo entonces cuestionar reclamos basados en intereses sectoriales, coyunturales pero legítimos. Todo ciudadano tiene derecho a peticionar a las autoridades. Lo que no es en absoluto legítimo es la forma en que esos reclamos fueron expresados. Bloquear las rutas, cortar absolutamente el paso de camiones (y hasta de ambulancias), ostentar armas y utilizar un lenguaje notoriamente agresivo constituyen actos completamente reñidos con los más elementales principios democráticos, que evocan un pasado “gorila” que creíamos definitivamente superado.

Algunos pretenden relativizar estos hechos afirmando que se trata de un método ya utilizado en el pasado por los piqueteros. Tal vez no es ocioso recordar que no es comparable el reclamo por la creación de puestos de trabajo, mejorar los salarios o el acceso a superiores condiciones de vida con las demandas de sectores de medianos y altos ingresos que atraviesan un período de incuestionable prosperidad. Pero además, nunca antes se había intentado un cerco de esta magnitud sobre millones de habitantes. Comparado con el reciente “apriete” de algunas organizaciones de productores agropecuarios, los piquetes fueron fiestas infantiles. No veo que los sectores dirigentes señalen suficientemente este pésimo precedente para la calidad institucional de la democracia argentina.

El conflicto campo-ciudad es un clásico de nuestra historia política. Pero, inversamente a lo que se ha afirmado en algunos espacios, no siempre los dueños de la tierra tuvieron posturas contrarias a los gobiernos nacionales: después de Caseros, la tan criticada política de Rosas de entregar tierras públicas a sus partidarios fue ampliamente superada. Entre 1876 y 1898, nada menos que 41.787.000 hectáreas fueron repartidas, gratuitamente o casi gratuitamente, entre familias de abolengo y favoritos del gobierno. Nuestra evolución fue diferente, por ejemplo, de la de Estados Unidos, donde las tierras fueron entregadas en mayor proporción a colonos, lo que permitió una mayor división de la propiedad y el aumento de la productividad agro-ganadera. Ello explica que aún hoy sólo haya 4000 dueños de casi la mitad de la superficie destinada a la producción agropecuaria en toda la Argentina.

La “representación de los hacendados” siempre fue desproporcionada en todos los gobiernos desde 1810 hasta 1946. Es curioso que tantos historiadores hayan repudiado las ideas corporativistas de la primera mitad del siglo XX, pero hagan la vista gorda cuando se trata de la representación corporativa de muchos propietarios latifundistas, que por supuesto siempre profesaron mayoritariamente el credo liberal.

La llegada del peronismo introdujo un cambio fundamental en esta tendencia: no se interesó tanto por el reparto de la propiedad de la tierra, rehusándose a aceptar las inflamadas “reformas agrarias” que se proponían desde la izquierda, como por la distribución de las ganancias del agro. Los antecedentes más relevantes fueron el congelamiento de los precios de los arrendamientos rurales y la creación del instituto que centralizó el comercio de granos, el IAPI, que suscitó entonces críticas muy similares a las que recibe la política del actual gobierno nacional. De hecho, aún se recuerdan los ya clásicos planteos acerca de las “obras suntuosas” que habría construido el gobierno peronista con lo “extraído” a los productores rurales. Lo cierto es que esta afirmación es sólo valedera para los años 1947 y 1948, en los que la situación excepcional del mercado internacional de la inmediata posguerra le permitió al IAPI obtener muy buenos precios, superiores a los que se pagaron en el mercado interno. Las ganancias volvieron, sin embargo, y en buena medida, al campo, en forma de subsidios y compensaciones para el aumento de los salarios rurales, intereses y gastos sobre préstamos a cargo de productores rurales, luchas contra las plagas (durante el gobierno peronista se erradicó la langosta, una de las plagas más dañinas para el campo), fomento de la siembra y multiplicación de semillas, compensaciones a los productores de caña de azúcar, aceites, molinos harineros, etcétera. Posteriormente, el IAPI arrojó pérdidas para poder sostener los precios de los productores rurales.

A partir de 1952 el gobierno peronista fomentó decididamente la cooperativización del comercio interno e internacional de granos, en sustitución del propio organismo estatal y de la red de intermediarios, que extraían mayores beneficios que los propios agricultores. A pesar de todo, el sector de mayor riqueza agropecuaria fue siempre neoliberal y antiperonista. Siendo ministro de Economía, recuerdo que en 1975 los ganaderos realizaron huelgas comerciales y hasta un largo lockout de 18 días, en el cual también se cortaron rutas, e incluso sacaron las vacas a la calle Florida para protestar por el precio de la carne.

(Continúa en la página 32)

(Viene de la página 31)

Un comentarista de la época, Daniel Muchnik, afirmaba: "El agro era víctima y artífice de una ironía. Su protesta se manifestaba en un momento en el que el sector había logrado mejoras sustanciales". La legitimidad del paro fue defendida hasta por el propio jefe de bloque de diputados radicales. Cuatro meses después, los militares derrocaban al gobierno constitucional.

Hoy han vuelto a la carga. Cegados por la buena prensa de ciertos argumentos absurdos, algunos sectores de la sociedad razonan como si el dinero público asignado a las políticas sociales sólo fuera un despilfarro demagógico de los gobernantes de turno. Mientras, mantienen una verborrágica condena contra la pobreza y la desigualdad, una sólida disposición a denunciar las carencias de hospitales y escuelas y una agilidad envidiable para comparar desfavorablemente nuestros servicios con los de otros países donde la carga tributaria es proporcionalmente muy superior a la nuestra. Con esa lógica, es entendible la aversión de unos y otros contra cualquier tipo de impuesto. Queda por saberse cómo se redistribuye la riqueza sin que los más ricos paguen más impuestos. Además, no oigo suficientes voces ilustradas que recuerden a la opinión pública que mantener bajos los precios internos de alimentos y servicios es otra forma de redistribución de la riqueza. Amén del hecho de que las retenciones se aplican sobre una ganancia que se explica fundamentalmente por la intervención del Estado en el precio del dólar.

La mayor parte de quienes hasta hace poco venían pontificando sobre una supuesta baja calidad institucional luego alimentaron con nafta uno de los más desleales aprietes que ha debido soportar un gobierno constitucional en las últimas décadas. En su momento criticaron al peronismo por apoyar desde la oposición huelgas de trabajadores que tienen el amparo constitucional del que carecen los boicots empresarios y cuyas consecuencias para el conjunto fueron mínimas comparadas con las del último paro rural.

Algunos "opinólogos" suelen repetir cada tanto que el peronismo no deja gobernar cuando está en la oposición. Hoy justifican su disposición a sacar provecho de una situación insostenible con argumentos oportunistas, todo en nombre de la ética republicana. Como ya vimos, no es la primera vez que ocurre. ¿Quién es entonces el que no deja gobernar?

Por último, es preciso que reconozcamos una insuficiencia de la que también tenemos que hacernos cargo los peronistas: excesivamente enfrascados en encontrar la salida de la crisis del 2001, no hemos sabido aún traducir adecuadamente las decisiones de gobierno en argumentos políticos que nutran los discursos de dirigentes, cuadros técnicos y militantes. Históricamente fue una de nuestras principales fortalezas. La capacitación política no es sólo el aprendizaje de técnicas y conocimientos para la gestión; también es la adquisición de una perspectiva política desde la cual valorar o criticar las decisiones gubernamentales. Es un desafío fundamental para los tiempos que vienen: la capacidad institucional de la democracia también se nutre de la habilidad de los movimientos políticos para articular fuerzas sociales dispersas en un proyecto de nación.

* Ex ministro de Economía del segundo gobierno de Juan Perón y del de Isabel Perón. Ex senador nacional.

Publicada el 7 de mayo de 2008.

El test de las retenciones

Por Alfredo Zaiat

A lo largo de casi cinco años de gestión de gobierno, primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner, puede ser que no haya habido ni una sola medida para redistribuir el ingreso. Puede ser también que el discurso haya ido por un lado y las medidas, por otro. Hasta las mejoras en indicadores sociales pueden haber sido exclusivamente por la suerte de un contexto internacional extraordinariamente favorable. Incluso la recuperación del salario puede que haya tenido su origen en el previsible rebote del orden natural de la economía luego de la peor crisis de la historia reciente. Se puede considerar que nada hicieron el anterior y el actual gobierno para mejorar la distribución del ingreso puesto que no avanzaron en una reforma impositiva para bajar el IVA y gravar la renta financiera. Ni para detener el proceso de concentración y extranjerización de la economía. Y mucho menos para reorientar el gasto público, que es una potente herramienta de reparto de riqueza, hasta más importante que la tributaria.

Puede ser que todos esos argumentos que han sido esgrimidos por progresistas críticos, que aspiran a un país con justicia social, y algunos de ellos por conservadores, que desean regresar a una sociedad que debata otras cuestiones diferentes a quiénes se apropian de la renta, sean motivo de acaloradas polémicas sobre lo realizado por la administración kirchnerista. Será interesante el saldo de esas discusiones. Habrá conclusiones para todos los gustos. Sin embargo, esa controversia no podrá ignorar que si ha habido una medida que ha buscado avanzar en la redistribución del ingreso para comenzar a construir una sociedad equitativa es la de las retenciones móviles a las exportaciones del agro. Del mismo modo que lo son las aplicadas a las ventas externas de petróleo y a las de oro y cobre.

Los tributaristas y economistas más respetados de la academia, que no son precisamente los consultados por la mayoría de los medios, explican con fundamentos teóricos y prácticos el carácter progresivo de las retenciones móviles. Pero todo el abanico, desde ortodoxos hasta denominados progresistas, considera que esa medida ha sido un error del Gobierno. Hasta evalúan como una iniciativa positiva su retroceso parcial con el sistema de compensaciones a los pequeños productores de soja y girasol, al amortiguar el efecto redistributivo de las retenciones. Cuando se mencionaba la necesidad de un tratamiento diferencial para esos productores implicaba otro tipo de intervención del sector público, que no era precisamente depositar dinero en una cuenta bancaria. Una política específica para ese sector es más compleja (el acceso a la tierra, por ejemplo) que colaborar en llenar bolsillos, que por cierto no están vacíos.

Si se consolida la idea del error de las retenciones móviles porque ha provocado la reacción de los afectados y generado una crisis política, como parece que ya ha sucedido teniendo en cuenta la posición de la Federación Agraria, entidad que se supone es el ala de izquierda del campo, poco margen quedará para éste o para cualquier otro gobierno que pretenda avanzar en la tarea que muchos pregonan de mejorar el reparto de la riqueza. Si se evalúa como una error esa medida, se supone que lo mismo hubiera sido considerado en la década del noventa una iniciativa de gravar la renta financiera, perturbando el poder económico de los bancos, porque también habría provocado la reacción de pequeños y medianos ahorristas e inversores bursátiles alcanzados por ese impuesto.

La historia enseña que para mejorar la distribución de la renta hay que afectar al poder económico, que hoy tiene su manifestación en la trama multinacional sojera. Por ese motivo, la crisis es política y no económica.

Publicada el 8 de mayo de 2008.

Las corporaciones del campo se quejaron de las retenciones en tierra arrasada por la soja

Lamento sojero adonde antes había algodón



Por David Cufré

Los productores familiares de algodón sufren una grave crisis desde hace años, pero nunca lograron la repercusión de los sojeros.

Luciano Miguens, Mario Llambías, Eduardo Buzzi y Fernando Gioino llevaron ayer su prédica contra las retenciones móviles a una ciudad emblemática: Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco. Hasta hace una década era la orgullosa Capital Nacional del Algodón. Hoy sólo conserva el título, pero la realidad es que la producción algodonera que está íntimamente ligada a su identidad social y cultural se va convirtiendo en una rareza, desplazada por la de soja. Sus pequeños productores padecen las consecuencias, en la mayoría de los casos dramáticas. Son propietarios de tres hectáreas, cinco hectáreas, diez hectáreas como mucho, que se ven forzados a vender sus tierras –en ocasiones tras sufrir violencia física– a precios de remate a productores de 1000 hectáreas, 5000 hectáreas y los hay de 10.000 hectáreas, que llegaron desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe a producir soja.

Llambías, presidente de Confederaciones Rurales, se atrevió a decir allí, en ese contexto, una frase que para los sumergidos productores locales sonó extravagante: "Lamentablemente, por las retenciones móviles hoy estamos viendo cómo subsistir". Llambías representa esencialmente a productores de la Pampa Húmeda, adonde el precio de la hectárea va de 4000 dólares –en zona ganadera– a 12.000 –en zona sojera–. Un productor de 50 hectáreas en esa región, a quien se considera un pequeño chacarero, maneja activos que van de 200.000 dólares –en la primera zona– a 600.000 –en la segunda–. Buzzi, de Federación Agraria, reclamó al gobierno nacional "un verdadero federalismo" y luego insistió en su reclamo por las retenciones a la soja, otra vez el punto neurálgico del conflicto con el Ejecutivo.

En Roque Sáenz Peña el valor de mercado de la hectárea trepó a un valor inédito de 500 dólares, reflejo del boom sojero. Diez años atrás, la cotización llegaba a 100 pesos/dólares. Pero quienes pueden llegar a beneficiarse de esa escalada no son precisamente los productores familiares, auténticos protagonistas de ventas masivas de tierras. El primer requisito para poder vender a 500 dólares es exhibir el título de propiedad de esas extensiones y la mayoría no los tiene.

"La situación de tenencia de la tierra es muy precaria. Es gente que vivió allí toda su vida y nunca hizo los trámites ante el Instituto de Colonización de Tierras Fiscales. Cuando se enfrentan a corporaciones, a estudios jurídicos de Buenos Aires que llegan en nombre de grandes productores o pooles de siembra, no tienen manera de defenderse. Terminan vendiendo por lo que sea. El precio lo pone el comprador", describió a Página/12 Benigno López, dirigente de Mocafor, contando una realidad común de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta.

Chaco tiene una superficie cultivable de 1,5 millón de hectáreas. En 1986, los sembradíos de soja ocupaban 10.000 hectáreas. En 1990 eran 50.000. En 2002 llegaron a 200.000. Y en la presente campaña, abarcaron 684.000 hectáreas, según datos oficiales de la provincia en base a un relevamiento satelital. Contrariamente, los cultivos de algodón dominaban 712.000 hectáreas en 1997/1998, mientras que una década más tarde se redujeron a 180.000. Proyecciones de mercado indican que la siembra de soja alcanzará 1,1 millón de hectáreas en 2014/2015.

Desde 1949 se celebró en Roque Sáenz Peña la Fiesta Nacional del Algodón. Hoy la actividad se encuentra en franco declive, por la caída del precio internacional. Es un proceso que se agudizó desde principios de década. Movimientos como el Mocase y Mocafor reclaman desde entonces que el Estado fije un precio sostén para los productores. Su situación es "desesperante", pero nunca tuvieron la fuerza para hacer oír su reclamo como en este momento lo consiguen Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro. Recién esta semana hubo una reunión en Casa Rosada en la que Alberto Fernández se comprometió ante el Mocase y Mocafor a la apertura de un espacio permanente de discusión técnica.

"Con el avance de la soja, en Chaco se fue perfilando un escenario de exclusión y concentración. Muchos pequeños productores no pudieron adaptarse a los requerimientos de los altos insumos y los paquetes tecnológicos impuestos por el modelo de la soja transgénica", explicó Marcela Zunino en un documento titulado Argentina, lo que la soja se llevó. "El modelo de producción sojera –agregó– emplea a una sola persona cada 500 hectáreas, lo cual se tradujo en la pérdida de cuatro de cada cinco puestos de trabajo en el campo", antes masivamente algodonero.

"Productores de cinco hectáreas se ven virtualmente acorralados por grandes extensiones", señaló Benigno López. Los grandes productores sojeros cierran pasos y caminos por donde transitaban los campesinos que solían trasladar sus animales hacia pastizales comunes. "Hay fumigaciones aéreas para los campos sojeros que afectan los cultivos aledaños del pequeño productor. Se pierden producciones de mandioca, poroto, batata, hortalizas, calabaza, zapallo, sandías y maíces. Los rindes caen totalmente. También sufre la ganadería: cerdos, cabras y vacas. Los pastizales se achican, el agua en muchos casos se contamina. Las familias también se enferman. Con todos esos problemas, al pequeño productor no le queda otra que vender al precio que estipula el comprador", detalló López.

Existen comunidades enteras que han desaparecido, y ahora allí se siembra soja. Los pequeños productores no pueden pasar a ese cultivo por una razón económica, pero también por una cuestión cultural. "No está en nuestra esencia la agricultura con glifosato y paquetes tecnológicos cerrados", marcó López. Cogoy, Fortín Leyes, Villa General Güemes son nombres de pueblos en decadencia, desplazados por la soja. Sus pobladores terminan en la periferia de las capitales de provincia, y los hijos emigran a Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Los representantes de los productores de soja fueron ayer a Roque Sáenz Peña a celebrar su fiesta en medio de un velorio.

Publicada el 10 de mayo de 2008.



Detrás del escenario

Por Eduardo Aliverti

Hay, sólo tal vez, una buena noticia. Si se prolonga la medida de fuerza del movimiento campestre, como bautizó Eduardo Grüner a eso que la inmensa mayoría denomina "el campo", habría la posibilidad de que aparezcan en escena las verdaderas estrellas de la obra. Porque, y entre otras causas principales gracias al ocultamiento periodístico, hasta ahora apenas aparecieron los actores de reparto.

Sea que quiera citárselas simplemente como "grandes compañías agroexportadoras"; o bien si prefiere hablarse de los jugadores decisivos en la cadena de especulación comercializadora y del producido agrotóxico, nombres como Bunge, Dreyfus, Cargill, ADM, Molinos (y Monsanto, claro está, como semillero monopólico), vienen permaneciendo cuidadosamente ocultos, no sólo en todo el tiempo que lleva el choque con "el campo", sino cada vez que se habla o discute sobre política y rumbos granarios, o de comercio exterior en general. No es para menos. Hablar de ellos es hablar del modelo desde su raíz; y no de las lágrimas de cocodrilo que derraman los chacareros que les hacen el juego, ni de los disparates gubernamentales en el timoneo de la situación, ni de si mintió Alberto Fernández o los dirigentes de las entidades. Todo eso es para la gilada y mediáticamente sale gratis, dando, encima, la imagen de un gran debate nacional que la prensa refleja cual niña impoluta. Lo otro es el centro de la cuestión.

Va cita de un trabajo del Grupo de Reflexión Rural de marzo pasado, cuya contundencia técnica y carácter didáctico son de muy improbable desmentida: "Tomemos conciencia de que quienes protestan por las políticas tributarias son los productores; no son Los Grobo, ni El Tejar, Cargill o ADM los que se quejan. Estos últimos le pagan al productor la tonelada de soja aproximadamente a 165 dólares, cuando su precio es de trescientos dólares. Agrega el especialista Ferrari Echeverri: 'En noviembre aumentaron las retenciones de 28 a 35 por ciento y a raíz de eso quedó en evidencia una situación inédita: cuando ni siquiera había comenzado la siembra de la soja, existían más de 18 millones de toneladas cubiertas por esos formularios, con sólo cuatro millones compradas. Quedó así en claro que eran declaraciones que cubrían ventas falsas y efectuadas al solo efecto de quedarse con el previsible aumento de las retenciones, aprovechando la incapacidad del Gobierno que, desde al menos cinco o seis semanas antes, anunciaba el aumento sin haber cerrado el registro de los formularios'. O sea que el resto, 135 dólares aproximadamente, va para el Gobierno como derecho a la exportación. Luego la venden en el mercado de Chicago a 550 y además, generalmente lo hacen luego de triangularla entre sus propias oficinas para subfacturarla y pagarle lo menos posible al Estado. El negocio de los exportadores y de las empresas a ellos vinculadas es, de ese modo, fabuloso. Pero no se detienen allí las ganancias. Los exportadores y sus socios, también y en simultáneo, se transforman en productores de agrocombustibles, de carne vacuna a corral y también de pollos, tal como la empresa Avex de Los Grobo. Las nuevas y extraordinarias dimensiones de los agronegocios, tales como la Granja Tres Arroyos, que faena trescientos mil pollos diarios y que participa de los actuales convenios de la Argentina con Venezuela, sube la apuesta productiva a niveles donde solamente pueden jugar las corporaciones. Los granos con que preparan los alimentos balanceados, con los que hacen esa carne producida en forma industrial, también los pagan a 165 dólares, como si fuera para exportación, cuando en realidad esa soja no sale del país como grano; es decir que el alimento de sus criaderos les cuesta la mitad que al productor común que hace carne, y con el que compiten en el mercado interno".

Da pavura ideológica y vergüenza ajena, en ese orden o en el inverso, ver manifestándose en las rutas y en asambleas a chacareros que son funcionales a esos intereses. Esto es, utilitarios de su propia victimización. Es cierto, como dijo el colega Orlando Barone en una de sus deliciosas "cartas abiertas", que el Gobierno debería descender de las nubes o de los cerros de Ubeda y salir del soliloquio que onaniza su discurso para aterrizar, aunque sea en Caballito. "Pero los del agro bájense un rato del caballo", agregó Barone. "Exhiban en la televisión las escrituras de los terrenitos que poseen. Muéstrenles a los argentinos pobres el margen de ganancia que tienen. Declaren a los movileros cuántas hectáreas poseen sus chacritas y cuánto vale cada una. Y si quieren ponerse una escarapela como grupo rebelde no usen la de Argentina. Pónganse una escarapela con una cabeza de novillo o con una plantita de soja." Es cierto, pero es todavía peor que eso, porque eso es la parte –necesarísima– que expone el cinismo de quienes lloran la Biblia junto al calefón como si estuviésemos ante una tragedia de hambruna campesina. La otra parte es que, como si eso fuera poco, esta gente va contra el Estado por los impuestos a las exportaciones, como si los exportadores fuesen ellos. Lo cual ni siquiera es lo peor de lo peor, porque ahora acaba de ocurrírseles que la forma elegida para este segundo tramo de su protesta –impedir la exportación de los granos reteniendo camiones– es lo más adecuado para que al Estado le duela en el bolsillo. ¿Alguien cree que no repararon en que las arcas del Estado son el bolsillo de todos los argentinos? En efecto: no se detuvieron en ese detalle simplemente porque ellos se consideran el Estado mismo. El modo en que los caminan los exportadores, "socializando" las retenciones hacia abajo con quitas fraudulentas, los tiene sin cuidado. En lugar de denunciar a la oligarquía de los agronegocios por la extracción y bicicleta de que los hace "víctimas", se la toman con el Estado porque se apropia de una porción de la renta de sus victimarios.

En otras nobles palabras, la ecuación viene a ser que se dejan tocar el culo por las transnacionales exportadoras, pero lo que debe notarse es que se los toca el Gobierno; que, a su turno, dice que tiene aguante para no dejárselo tocar por los productores, porque lo que no debe advertirse es el modo en que lo viola el modelo sojero. Aunque, de todas formas y al margen de que en este choque no hay un solo inocente, tampoco se trata de perder de vista que lo incuestionable es el derecho del Estado a apropiar renta en proporción a las ganancias y en función de las necesidades colectivas.

Si ese principio entra en discusión, no se puede discutir más nada porque querría decir que la derrota ideológico-cultural, en este caso a manos de los dueños de la tierra y de la cadena de valor, no tiene retorno.

Publicada el 12 de mayo de 2008.



Retenciones y sociedad del conocimiento

Por Ricardo Sidicaro *

La discusión de estos meses ha dado por aceptada la legitimidad política de las retenciones a las exportaciones agrarias, ya que la disputa se centró en los porcentajes y, prácticamente, fueron escasas las críticas al derecho del Estado a establecerlas. Los argumentos oficiales que respaldaron la medida, centrados en la distribución social de las ganancias excesivas que obtendrían los empresarios rurales en virtud de las situaciones muy favorables de los mercados internacionales, parecieron convincentes para una parte de la población. En cambio, no creó consenso en las provincias la concentración de esos ingresos en el gobierno central, y al respecto la disconformidad se expresó bajo el reclamo federalista. Es difícil saber cómo se saldarán los conflictos, pero bien cabe plantear una reflexión que se ponga por encima de las tensiones del momento y preguntarse sobre para qué podrían emplearse los fondos suplementarios que la Argentina dispondrá mientras duren las actuales situaciones beneficiosas para la producción agroexportable.

En las polémicas en curso hemos visto volver una palabra casi olvidada: la oligarquía, cuya carga de sentidos es muy amplia, pero que en su empleo más conceptual sirve para referirse al sistema político-económico en el que la elite gobernante de principios del siglo pasado y los grandes propietarios rurales coincidieron en el error de creer que las ventajas relativas ofrecidas por el mundo de la primera globalización (1880-1914) serían eternas. La imagen mítica de la bonanza de los mercados internacionales alimentarios mostró tener una larga vida: aun cuando la primera Gran Guerra la puso en duda, renació en los '20; si bien capotó con la crisis del '30, se recuperó hacia fin del decenio y a la espera del fin de la Segunda Guerra Mundial, con expectativas frustradas por el Plan Marshall; duras de matar, las ilusiones volvieron con la Guerra de Corea; el deterioro de los términos de intercambio pareció dejar para las antologías de literatura a la Argentina del "ganado y de las mieses"; en el programa de la dictadura anticomunista instalada en 1976, la esperanza mágica se cifró primero en los agro-business y luego en la exportación de cereales secundarios a la Unión Soviética; por entonces, el despunte de la soja le dio un nuevo soplo de vida a la quimera.

En lo interno, el actual empuje agroexportador argentino carece de las claves que favorecieron al sistema oligárquico: los grandes propietarios rurales no tienen la capacidad política e ideológica para actuar como una clase dirigente y poner a su servicio a una sociedad compleja como es la nuestra; en lo externo, la virtud de la fertilidad natural de la "pampa pródiga" se hizo relativa frente a los adelantos de las tecnologías agroquímicas que permiten cultivar tierras escasamente dotadas de condiciones agronómicas. Por otra parte, las alarmas, que no son nuevas, sobre la futura falta de alimentos hacen que las naciones con administraciones racionales se doten de políticas de Estado al respecto. El capital móvil de la época de la globalización hace rato que busca la solución de la ecuación agraria en la periferia: tierras baratas, gobiernos dúctiles, salarios agrícolas ínfimos.

Es probable que la inserción actual en los mercados mundiales le permita al país recibir por la vía de las retenciones importantes cantidades de divisas. Una política de Estado, con un realismo basado en las experiencias anteriores, debería privilegiar el empleo de esos fondos para fomentar el desarrollo científico y tecnológico que trate de situar a la sociedad argentina a la altura de los desafíos de la etapa actual de la modernidad cultural y productiva. Esa orientación nada tendría en común con los proyectos que se limitan a pedir apoyos estatales para mejorar la eficacia técnica de un "nuevo granero del mundo", cuyo carácter coyuntural no pueden pensar. Quienes suponen que al "viejo granero" le fue mal por culpa del populismo y del intervencionismo estatal, ignoran tanto las transformaciones mundiales de entonces como las de ahora.

El mundo en el que vivimos es el de la sociedad del conocimiento en el que la materialidad de los bienes ha perdido predominio frente a la importancia del avance de las ciencias que transforman permanentemente las condiciones de su producción. Las inversiones en el desarrollo científico y en la educación superior constituyen las principales externalidades positivas que favorecen no sólo el desarrollo económico, sino también social y cultural de los países. En la sociedad del conocimiento, se fueron al museo de la historia, o al desván de trastos viejos, las falsas dicotomías entre caramelos y acero, entre agro e industria y, no está de más recordarlo, entre las mal llamadas ciencias duras y ciencias blandas. Si la meta fuese avanzar hacia una situación en la que se produzcan y se empleen los conocimientos de punta de las diversas disciplinas científicas, ésa no sería una mera ventaja corporativa para quienes trabajan en ese dominio de la práctica social. El efecto distributivo de las políticas estatales de fomento de las ciencias, cuando no se ponen al servicio de intereses empresarios particulares, alcanza a toda la población. Todos los niveles de la educación y el pensamiento de la sociedad sobre sí misma pueden resultar ampliamente beneficiados con tales orientaciones de los fondos públicos en general, y no sólo de los provenientes de las coyunturales retenciones a las exportaciones.

* Investigador principal del Conicet, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Publicada el 12 de mayo de 2008.

Por Horacio González *

Asamblea por televisión

Consciente de la complejidad de sus propias operaciones, siempre a la televisión le atrajo explorar sus antípodas, el habla llana, directa, "al pan pan y al vino vino". Habla De Angeli el viernes a la noche. Varios canales transmiten extensamente la asamblea de Gualeguaychú. El espectáculo es asombroso. Alfredo De Angeli ya es un personaje nacional. Hay chistes y comparaciones sobre la casi semejanza de su nombre con el del director de una conocida orquesta de tango, años ha. Por su estilo llano y rústico, gusta o no gusta. Gusta o no gusta, también, por su fraseo sin vueltas, rebencazos que van del desafío desmesurado al buen humor y el doble sentido. Todo en vivo y en directo.

Mezcla el ingenio chulo con innegable experiencia de los conductores de asambleas. Estos son una progenie extensa y fructuosa en la historia moderna. En De Angeli se fusionan el que distribuye la palabra y el que da la principal orientación de ideas. Son funciones que los movimientos sociales contemporáneos hace tiempo habían separado. Al reunirlas, De Angeli lo hace con labriega simplicidad. Exhibe un "chééé" numeroso y confianzudo, como amistosa reprobación si algo sale de lo establecido. Vimos en el cine argentino de vastos públicos esas inflexiones. Por momento lanza risueñas reprobaciones al ambiente de jolgorio de las asambleas, pero él también se divierte. Es el que reprime la chacota, pero deja entrever que también es un bromista elaborado, de los que suelen jugar con una fingida seriedad. Personajes inmemoriales, la sal y la vida de los pueblos.

El viernes a la noche apareció en la asamblea de Gualeguaychú un toro de circo, esqueleto móvil de lona con dos hombres adentro. Tauromaquia de cartón pintado, milenaria diversión popular con la que se entretuvo un rato para luego llamar al orden. De Angeli conoce su función. Atrae los micrófonos como nadie. Frente a él, Eduardo Buzzi, el otro nombre que se hizo famoso, parece un intelectual de escritorio y largas negociaciones, de prolijos latiguillos calculados, adecuado militante social del que el tiempo dirá si se sintió incómodo o no por el papel que estos idus de otoño le propusieron interpretar. Cita las nacionalizaciones de Evo Morales, pero se parece más a los separatistas cruceños.

Frente a la escena pastoral que emana de una caja de camión, vemos ahora a De Angeli. Con los aprestos de una muchachada en jarana y un rosario de mociones que parecen extraídas de un ameno repertorio estudiantil. Pero aquí es un juego pesado: emerge una nueva derecha social con imágenes y con estilos, por qué no, de una rápida izquierda con la que todo viejo argentino Vizcacha sabe coquetear. De ahí su paradojal encanto y su inopinada opacidad. No son la oligarquía, pero tampoco el pueblo. Son una palabra nueva, la voz remota de una indisciplina del propio Sistema. Una irrupción del lenguaje que en cierto modo era esperado, el folk inmoderado de una reacción conservadora que también saca su lenguaje asambleario de otros diccionarios: se escuchan palabras como citrícola junto a lejanos iconos payadorescos que estaban refugiados en una memoria televisiva marginal. Parecen igualitarismos a la Fourier, cuyos discípulos en el siglo XIX se habían interesado por las remotas cuchillas de Entre Ríos.

Pero De Angeli confunde; posee ideas sociales, puede recordar un libertarismo lejano y para quién guste de simplificaciones, ofrece un sorprendente, brusco despojamiento de la historia compleja de los problemas. La reduce de un chicotazo. Al cabo, aparece una peligrosa sustitución del argumento por un pintoresquismo, más parecido a los granjeros del middle west que a la herencia de Hernández o Ascasubi. No obstante, hay una ingenuidad sincera, un gozoso aire de reivindicación popular, una jacquerie aldeana sin oscurantismo medieval ni mesianismo a la Müntzer. Pero es una miscelánea de avidez económica y mitología de masas. Predomina una picaresca espontánea, delicia del cántico ancestral que homenajea la pródiga perspicacia del hombre rural sin latifundios, pero con un aguerrido, casi enfurecido sentido de la propiedad, quizá más que el abstracto financista agrario, un ausentista que ya había olvidado a Don Segundo Sombra.

Esos hombres tomando mate –ostensiblemente: todos lo tomamos aunque con más pudor– ofrecen la leal socarronería que en general un vasto poemario le atribuye al labrador, del peón mítico, aun si no es perseguido, aun si no es acosado por el juez de paz y la partida. Absolutamente no lo son ahora. Ellos ocupan intendencias. ¿Cuántas veces los ensoñamos? Hasta Sarmiento, que fingió no quererlos y los conoció en su veracidad última, los pinta en su credulidad formidable frente a la naturaleza y a los signos del paisaje.

La noche apacible cae sobre la asamblea. Se escuchan opiniones que emergen de una democracia agreste, válida, junto a la huella de barro seco de los tractores conspirativos. ¿Y qué dice el hombre del mes, ese De Angeli que regusta la unanimidad rápida, no profesionalizado, campechano, enfocado por las televisoras nacionales que parecen haber estado siempre allí? Dice que si a ellos "no le sacan más nada", él dispensaría los subsidios adeudados, "no los quiere ahora", y que entonces podrá pagar –ellos, ellos mismos– los servicios públicos, la policía, los bomberos, los maestros, y con creces, "el doble de sueldo". ¿Escuchamos bien? Y luego de tal bonanza arrasadora, agregaría que ahora no es sólo la cuestión de la rentabilidad –esa cuestión no ha desaparecido, en tanto–, sino de la del "interior profundo", el "federalismo", en fin, la refundación nacional. El "movimiento nacional", agrega Buzzi en un eco. Por fin los televidentes, la propia televisión, todos, ingresamos en la capa profunda de las cosas.

Lo profundo trata pues de una nueva idea de Estado, de organización nacional, de gestión total social –no lo dice así, lógicamente y escribámoslo con minúscula para no exasperarnos tanto–, todo emergiendo de una nueva ruralidad en la sociedad del espectáculo. ¿Es una idea de Estado dirigido, así, asamblearíamente? No estaría mal, utopía seductora. Pero, en verdad, se trata de una dilución del Estado, un evaporamiento del que sólo quedaría una técnica de peaje y control caminero –paso de camiones "cada seis horas", "internacionales no"–, en un ensayo de jacobinismo neoliberal, dichoso, de una derecha rústica con lenguaje e inflexión litoraleña –simpática, por tanto–, un neoliberalismo con votación por aclamación aunque con resultados coercitivos. A ese parlamento de la ruta 14, ese Estado alternativo, la televisión complaciente no le exige mucho. Ella también suele imaginar que es un Estado paralelo. Los muchachos aclaman, el caudillismo sin instituciones es vivaz, la gauchocracia cacerolera de los post-payadores admite al motociclista Reutemann, la escarapela prendida en la rentabilidad y una cucarda por haber reparado una escuelita en Junín al margen de ministerios y burócratas.

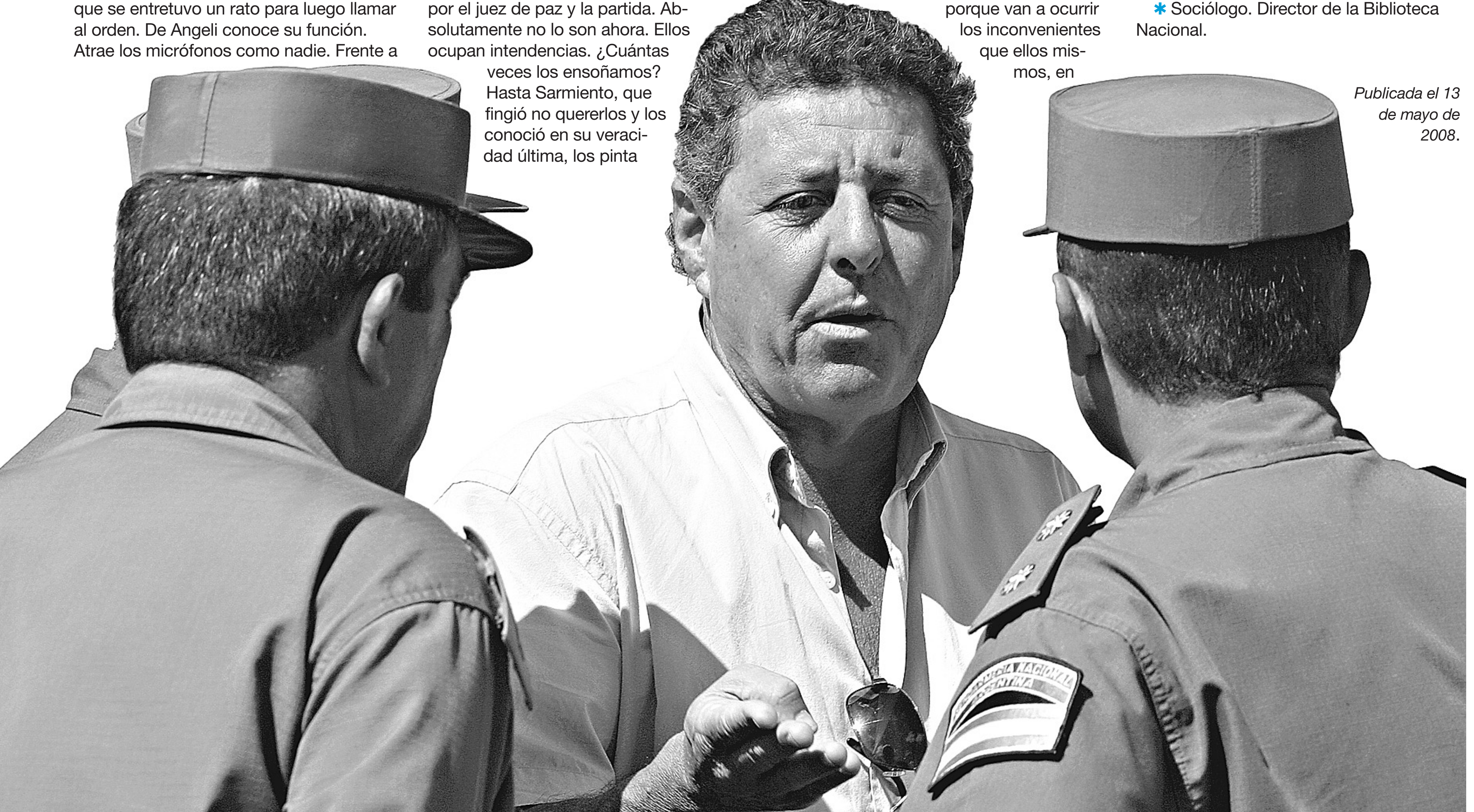
¡Suerte!, por fin no hay mediaciones entre la nación y la cosecha. ¿Para qué las grandes mentes argentinas del pasado, aún ligadas al mundo rural, dijeron que la nación no podía ser un conjunto de cabezas de ganado? Se quejan porque van a ocurrir los inconvenientes que ellos mismos, en parte, generan. Las tiradas desafiantes de los discursos de De Angeli son un punto de pasaje hacia una situación inadmisible, por fin un conjunto de amables quimeras campestres en la edad del agrobusiness con mezcla de "sociedad del conocimiento", que se presentan con candidez, con boinas y monolingüismo sumario –diáfanos: debemos reconocerlo–, para proponerse el tractorazo del final, míster John Deere controlando la nación, cobrando impuestos y pagando doble salario. Tierno falansterio de leyenda que vendría con la enmarañada madeja de los atributos de una movilización socialmente elocuente y una sensibilidad, entre mate y mate, de neoderechas transgénicas.

Algo grave ha ocurrido. ¿De Angeli podría pintar al fin su casa –esta queja la ha manifestado– con la renta agraria reconquistada? ¿Repartiría trabajo con su llaneza dadivosa y administraría los salarios públicos sin intermediarios, ante la mirada de los pacientes camioneros del Mercosur? ¿Serán estos propietarios rurales, a un tiempo, los contribuyentes, los repartidores, los menestrales, los payadores, con su reina de Carnaval paseando entre magistrados? Bella transparencia ilusoria. En los hechos, una mendacidad ideológica. ¿Qué hacer? Se trata de hombres a los que intentamos comprender, y que en verdad comprendemos, a los que podríamos no reprocharles ahora su desmesura si no representaran un formidable retroceso colectivo, incalculable, trágico. Nos alertan sobre problemas reales desatendidos, de eso no cabe duda. Así que los escuchamos en su parlamento de la ruta 14, en el que casi expresan la ficción de un alegre estado secesionista.

Para discutirlos, aún faltan argumentos menos triviales, que deberán ser urgentes frente a esta égloga involutiva, neo-reaccionaria y, sin embargo, he allí lo terrible, con endechas donosas e iconografía de baile popular. Son el pueblo sin mediaciones. Caso por caso, lo reconocemos propio. Pero en su expresión tractorizada, propietaria, ciega a la historia, lo vemos alarmante, ingenuamente sombrío. ¿Federalismo? En vez de su mentalidad contable –que no consigue mitigar su real condición de movimiento social– y su apelación federalista –que no oculta su nacionalismo estrecho, abstracto, reutemaniano–, que vean a Alberdi, Juan Bautista, y revisen la décima palabra del dogma socialista escrita por este tucumano: antecedentes unitarios y federales de la Nación Argentina. Es mi moción de asamblea, compañero De Angeli.

* Sociólogo. Director de la Biblioteca Nacional.

Publicada el 13 de mayo de 2008.



Los guardianes de Cargill

Por Raúl Dellatorre

La revelación fue hecha por la mañana por Alfredo De Angeli desde la ruta. Por la tarde la ratificó Néstor Roulet desde Córdoba. El primero, titular de Federación Agraria de Entre Ríos, lo hizo mientras cortaba las ramas de una plantita que tenía tomada desde el tallo, representando cómo se distribuía el resultante de la producción de soja. El segundo, vice de Confederaciones Rurales (CRA), describiendo quién se queda con qué "de los cien metros de bolsa de soja".

"De los cien metros, el Gobierno se queda con 50 (por los impuestos); de los otros cincuenta, 10 se gastan en fletes, y 35 tenemos que pagar por los costos de siembra (semilla, fertilizantes, herbicidas, contratistas para la trilla y demás tareas); es decir que al productor solamente le quedan 5 metros." Revelador: al exportador, justo al que le impusieron las retenciones, no le queda nada. Ni un centímetro de bolsa, en lenguaje de Roulet. Ni la punta de una ramita, en términos del rutero De Angeli.

Curioso y paradójico punto de llegada al que arriban las didácticas explicaciones de los dirigentes. Pero para nada ingenuo ni absurdo: es la lógica del planteo de los ruralistas desde que empezó el conflicto. Permanentemente han atacado la parte que queda en manos del Estado (impuesto), pero jamás aluden a la que se devora el comercializador que domina la mitad de la cadena, desde la tranquera hasta el barco. El dueño de las plantas de acopio, de los puertos privados, de los molinos y socio en la venta de fertilizantes y semillas. Tal es el caso, en toda la cadena, de Cargill y, en algunos eslabones, de Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza, grandes beneficiarios de la renta agropecuaria.

Para verlo más claramente: la retención que hace la Aduana, del 40 por ciento en el caso de la soja, no es "sobre los 100 metros de la bolsa", sino sobre un valor inferior que, de acuerdo con el Código Aduanero, convierte el tributo en sólo 28,6 metros de esos 100. Pero como parte de la producción de granos va al mercado interno y parte se exporta con menor tasa de retención, lo que entra al fisco es mucho menos.

El acopiador-exportador se apropia de una parte de la producción igual o mayor que la que le corresponde al Estado. Encima, descontándole al productor un porcentaje por retenciones que ni siquiera ingresa al fisco. Y sin siquiera ser acusado por los dirigentes que encabezan la protesta ni ser imputado por el Gobierno. ¿Por qué será que toda la argumentación de este conflicto encubre la responsabilidad de los exportadores? ¿O éstos habrán sido expropiados por el Estado sin que nos demos cuenta y sus ingresos deben ser computados, como dice Roulet, dentro de "los 50 metros de la bolsa" que se queda el Gobierno?

Publicada el 13 de mayo de 2008.

La Presidenta habló en la asunción de Néstor Kirchner como titular del PJ y prefirió no confrontar

"Hay que evitar los enfrentamientos"

Kirchner sorprendió al cederle la palabra a CFK, quien sin mencionar el lockout habló de gobernar "sin rencores, sin antagonismos". Moyano y Capitanich fueron los portavoces de las críticas a los ruralistas. Hubo incidentes entre los camioneros y la Uocra.

Por Martín Piqué



Martín Acosta

Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en el estadio de Almagro, transmitieron un mensaje implícito al campo.

"Me permito invitar a nuestra compañera Presidenta a que nos dirija la palabra." Lo único que dijo Néstor Kirchner en su publicitada asunción como titular del Partido Justicialista sorprendió a los que escuchaban. Que, en ese momento, no eran todos los que se habían dado cita en la modesta cancha de Almagro. ¿Qué llevó a Kirchner a correrse del centro de la escena, a dejar para otra oportunidad su rol de policía malo ante el lockout rural? Eran las 18.15 y el comienzo del acto se había demorado una hora. En el palco se veían caras de preocupación porque los graves incidentes en la tribuna opuesta eran ya indisimulables. La razón del cambio quedará para la historia (los organizadores deslizaron que el objetivo era contradecir la hipótesis del "doble comando"). Lo cierto es que a pesar de las versiones que habían salido desde la Rosada, que mencionaban a Kirchner como orador de cierre, al final fue la Presidenta quien hizo el discurso central. "Voy a ejercer la responsabilidad de gobernar sin rencores, sin antagonismos y falsas divisiones artificiales en el pueblo", prometió entonces CFK. Era un mensaje contemporizador, un gesto que alentaba la negociación con los dirigentes agropecuarios en el marco del Acuerdo del Bicentenario. Y así fue interpretado.

Nadie esperaba que la Presidenta hablara en un acto que parecía preparado para su esposo. Le tocó hablar ante un estadio que comenzaba a despoblarse y con la mayor parte del auditorio concentrado en la pelea de los gremios. Era un ámbito partidario, que no dejaba de representar a un sector. Tras las cortas palabras de presentación que le dedicó su esposo, CFK se subió a la tarima negra que tenía un enorme escudo justicialista. Desde allí pronunció un discurso que no incluyó el adverbio "humildemente" pero que tuvo el mismo sentido. No hubo cuestionamientos a los productores rurales que impulsan la protesta, tampoco quejas por la decisión de los ruralistas de enfrentar al Ejecutivo para obtener más rentabilidad. "Tenemos que evitar los enfrentamientos y las divisiones, que sólo han servido para dividir al pueblo y para que nuestro país se llenara de fracasos y frustraciones. Quiero decirles a todos que este esfuerzo de distintos partidos necesita del esfuerzo de todos los argentinos", señaló. Mientras la Presidenta seguía con su llamado al Pacto Social –el llamado Acuerdo del Bicentenario que la Rosada quiere anunciar el 25 de mayo–, detrás de las vallas se empezaron a ver movimientos desesperados de brazos. También se escuchaban silbidos. Eran los manifestantes de las primeras filas que alertaban sobre los incidentes que se estaban produciendo sobre el campo de juego. Concentrada, Cristina seguía con su discurso. "En este proceso en que los trabajadores han vuelto a recuperar el salario y los empresarios la rentabilidad, convocamos desde este espacio a todos los argentinos sin distinción a debatir y discutir en un marco democrático para profundizar la transformación", planteó.

Detrás de la Presidenta se veían las caras adustas de Kirchner y del resto de las autoridades del PJ. Los miembros del Consejo Nacional se habían ubicado por orden de importancia. En la mesa principal estaban Kirchner y los cinco vicepresidentes del partido: los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), Sergio Urribarri (Entre Ríos) y Jorge Capitanich (Chaco), la diputada nacional Beatriz Rojkés (esposa del gobernador de Tucumán, José Alperovich) y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Vestido con una campera de cuero clara, el camionero estuvo en el centro de las miradas. Como en el traslado de los restos de Perón a San Vicente, sus hombres habían quedado envueltos en un enfrentamiento muy duro con los afiliados de la Uocra. Moyano cruzó varias veces la mirada con el titular del gremio de la construcción, Gerardo Martínez. Según testigos que vieron la escena, los gestos de ambos reflejaron impotencia.

El acto había comenzado con el hijo de desaparecidos Juan Cabandié, flamante secretario de Juventud. Su aparición fue saludada por el clásico cantito de la JP: "Somos de la Gloriosa/Juventud Peronista", lo saludaron los militantes de La Cámpora y de la juventud del Movimiento Evita. Siguió con el discurso de Moyano, quien pudo abstraerse del mal momento por un rato. Desde el micrófono combinó críticas a la protesta del campo y a la oposición ("Algunos cortan las rutas e impiden que llegue el pan a la mesa de los argentinos", cargó) con un llamado a negociar sin exclusiones: "A la patria la arreglamos entre todos o no la arregla nadie." Luego llegó el turno de Capitanich. El chaqueño se ganó abrazos y felicitaciones con un discurso de barricada. "Ayer en el Congreso vimos la misma Alianza que se fue en el 2001 en helicóptero dejando muertos en la Plaza de Mayo", arremetió.

Mientras en el sector VIP estaban atentos a lo que se decía desde el micrófono, detrás de las vallas el foco de atención eran las piedras, los botellazos y los palos que volaban entre la Uocra y Camioneros. Los incidentes más graves fueron entre ambos sindicatos, aunque luego hubo un choque aislado entre la columna del municipio de Ituzaingó y los manifestantes que habían llegado desde Tucumán para apoyar a Alperovich.

La pelea histórica entre camioneros y obreros de la construcción derivó en corridas y miedo en el resto del estadio, sobre todo en las filas movilizadas por los intendentes, donde había mujeres y niños. El debut de Kirchner como presidente del PJ lo encontró ante una realidad nueva, con la que nunca había tenido que lidiar en sus cuatro años de mandato: se había desatado una batalla campal en sus propias narices. La bienvenida que le prestaba el PJ en su debut como presidente del partido volvía a mostrar la cara autodestructiva de una fuerza política que en varias ocasiones tendió a fagocitarse a sí misma. Algunos hasta llegaron a recordar el cajón de Herminio Iglesias. "Los de la Uocra nos estaban esperando, como en San Vicente. A nosotros no nos dejaron entrar", protestó ante **Página/12** el camionero Alfredo Flores. "Esto estuvo mal organizado. Habría que haber elegido un estadio grande, como para un superclásico, con la Uocra y Camioneros como dos hinchadas rivales que entran por ingresos diferentes", reflexionó ante este diario el intendente ex menemista de Ezeiza, Alejandro Granados.

Encuentro con Adeba

Luego del acto de asunción en el PJ de Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en Casa de Gobierno a directivos de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba). El encuentro, que se realizó en el marco del Pacto del Bicentenario, se prolongó poco menos de una hora y se discutieron aspectos de la economía y políticas para el sector bancario. Estuvieron presentes por Adeba su titular, Jorge Brito (Macro), Antonio Garces (Galicia), Jorge Stuart Milnes (Patagonia), Clarisa Liffic (Hipotecario), José Luis Pardo (Mariva) y el director ejecutivo de la entidad, Norberto Peruzotti.

Publicada el 15 de mayo de 2008.

Carta Abierta / 1

Este documento fue presentado en la librería Gandhi por una mesa conformada por Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo Forster y Jaime Sorín. Fue firmado por más de 750 intelectuales, entre los que se cuentan decanos de la UBA, David Viñas, Norberto Galasso, Noé Jitrik, Horacio González, José Pablo Feinmann y muchos más nombres, que por limitaciones de espacio es imposible reproducir.

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental.

Esta atmósfera política, que trasciende el "tema del agro", ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del Gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.

Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente.

Un debate por las herencias y las biografías económicas, sociales, culturales y militantes que tiene como uno de sus puntos centrales la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos y que transita las tensiones y conflictos de la experiencia histórica, indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego.

En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente "la realidad" de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen "la verdad" sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.

Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva.

Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. La reacción de los grandes medios ante el Observatorio de la discriminación en radio y televisión muestra a las claras un desprecio fundamental por el debate público y la efectiva libertad de información. Se ha visto amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y equilibrado del conflicto social.

En este nuevo escenario político resulta imprescindible tomar conciencia no sólo de la preponderancia que adquiere la dimensión comunicacional y periodística en su acción diaria, sino también de la importancia de librar, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto. Tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos.

Se trata de una recuperación de la palabra crítica en todos los planos de las prácticas y en el interior de una escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado. De la recuperación de una palabra crítica que comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y latinoamericanos, que señale las contradicciones centrales que están en juego, pero sobre todo que crea imprescindible volver a articular una relación entre mundos intelectuales y sociales con la realidad política. Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país. La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural.

En una situación global de creciente autonomía de los actores del proceso de producción de símbolos sociales, ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la vida social, así como las operaciones de las estéticas de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo social, de lo político, del arte, de los saberes y conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales.

Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa y las denuncias contra los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados. Es también en esta confrontación, que se extiende al campo de la lucha sobre las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte futura de varios gobiernos que son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias» políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.

Reconociendo los inesperados giros de las confrontaciones que vienen sucediéndose en esta excepcional edad democrática y popular de América latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la significación que adquiere la reflexión crítica en relación con las vicisitudes entre Estado, sociedad y mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina Fernández, es que no asumen la urgente tarea de construir una política a la altura de los desafíos diarios de esta época, que tenga como horizonte lo político emancipatorio.

Porque no se trata de proponer un giro de precisión académica a los problemas, sino de una exigencia de pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que se vuelven a discutir cuestiones esenciales que atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política que nos confronta con las dimensiones de la justicia, la igualdad, la democratización social y la producción de nuevas formas simbólicas que sean capaces de expresar las transformaciones de la época. En este sentido es que visualizamos la originalidad de lo que está ocurriendo en América latina (más allá de las diferencias que existen entre los distintos proyectos nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos, peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa.

Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política –donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un rol de decisiva importancia– en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. Estratégicamente se trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar una forma más amplia y participativa de debatir.

Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras en los lenguajes, en las formas de organización, en los modos de intervención en lo social desde el Estado y desde el llano, alternativas que puedan confrontar con las apetencias de los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real. Pero también que pueda discutir y proponer opciones conducentes con respecto a los no siempre felices modos de construcción política del propio gobierno democrático: a las ausencias de mediaciones imprescindibles, a las soledades enunciativas, a las políticas definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos, y precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar.

En este sentido, sentimos que las carencias que muchas veces muestra el Gobierno para enfocar y comprender los vínculos, indispensables, con campos sociales que no se componen exclusivamente por aquellos sectores a los que está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo democrático-popular. Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.

Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de un espacio político plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente. Experiencia que se instituye como espacio de intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a formas concretas de encuentro, de reflexión, organización y acción democrática con el Gobierno y con organizaciones populares para trabajar mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de la coyuntura, la vocación por la política y la perseverante pregunta por los modos contemporáneos de la emancipación.

Publicada el 15 de mayo de 2008.

El backstage de la crisis

Gritos y susurros

Por Daniel Miguez

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se reconfortó en medio de tantos momentos agrios con una llamada que recibió el jueves 15 de Hermes Binner: "Alberto, quiero decirte que ahora sí creo que lo que dijiste de esta gente es verdad. No sabés lo que me hicieron a mí", le transmitió entonces el gobernador de Santa Fe minutos después de los durísimos discursos prenunciado la continuidad del lockout que los dirigentes rurales dieron desde el balcón mismo de la gobernación provincial. Enojado con los ruralistas, a quienes les ofreció esa tribuna tras una reunión en la que asintieron a su planteo de levantar la protesta para volver a dialogar, Binner agarró esa misma noche el teléfono y llamó a su amigo presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. "Sólo te quiero decir que si quieren hacer el acto el 25 en Rosario no me voy a oponer porque el Monumento a la Bandera es de todos y están en su derecho. Pero que quede claro que el gobierno de Santa Fe ni avala ni tiene nada que ver con ese acto. Y si alguno de ustedes dice o insinúa lo contrario lo voy a salir a desmentir", le espetó y colgó.

La reunión entre Binner y los dirigentes del campo fue al día siguiente del acto de asunción de Néstor Kirchner como nuevo jefe del PJ. Allí la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó al diálogo, a la concertación y a la unidad, entre otros sustantivos conciliadores que utilizó.

La expectativa del día era saber qué iban a hacer los ruralistas después de su encuentro con Binner: si seguían con el lockout o respondían a la convocatoria de la Presidenta levantando la medida de fuerza. En la reunión los dirigentes rurales le pidieron a Binner su opinión sobre el conflicto. Les contestó que entendía muchos de los reclamos, pero que él sabía que había buena voluntad del Gobierno, que el acuerdo estaba al alcance de la mano y que esperaba que levantaran la protesta para volver a dialogar y terminar con el asunto. Binner vio y oyó con alivio gestos y palabras de asentimiento a su postura y terminada la reunión les prestó el balcón de la Casa de Gobierno de Santa Fe para que hablaran a la gente reunida en la plaza. Allí, para su sorpresa, escuchó discursos durísimos que anticipaban que el lockout seguiría.

Un rato después se produjo esa llamada a Fernández. Lo mismo que al jefe de Gabinete les contó después Binner a otros dirigentes de su partido, según pudo saber **Página/12**. Esas fuentes agregaron otro dato. La misma noche del jueves, con la continuidad del lockout ya decretada, Binner llamó a Buzzi y con tono amargo le dijo: "Eduardo no puedo creer lo que me hicieron".

El titular de la Federación Agraria quiso ensayar una explicación y el gobernador lo cortó para advertirle que no avalaría el acto que los ruralistas anunciaron para el 25 de mayo en Rosario.

¿Qué fue lo que había dicho Alberto Fernández que ahora Binner dio por cierto? Que en la reunión del martes 6 de mayo el jefe de Gabinete no había admitido que las retenciones fueran un error como dijo Buzzi. En ese polémico encuentro Fernández les entregó el papel con las diez propuestas que incluía la solución a las demandas agropecuarias y las excedía. "Llegamos a esta decisión (la de darle una solución definitiva al tema) porque no podemos dejar que le sigan haciendo este daño al país y generando un grave problema político." El secretario de CRA y ex presidente de Carbap, Javier Jayo Ordoqui, le respondió con toda circunspección: "Señor ministro, nosotros no somos políticos y no sabemos nada de política". Fernández abrió los ojos grandes y replicó entre asombrado y resignado: "Ah, si ustedes están tomando decisiones políticas de semejante peso y no saben nada de política yo estoy en el peor de los mundos". Y sintió que lo corroboraba unos minutos después cuando escuchaba impávido que Buzzi, al salir del edificio de la Jefatura de Gabinete, en Diagonal Sur, les decía a los periodistas: "La reunión fue positiva porque el Gobierno admitió que las retenciones son un error y las va a modificar".

Luego llegó la obvia desmentida de Alberto Fernández y las especulaciones sobre si los ruralistas habían pecado de impericia política o, por el contrario, habían sacado a relucir la más tradicional picardía política para golpear al jefe de Gabinete tratando de quitarlo como interlocutor, o, finalmente, buscar una excusa para seguir con el lockout, como decidieron al día siguiente.

En ese día siguiente, con el lockout reinstalado, Alberto Fernández jugó fuerte: dijo a las radios que llamó al presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, para preguntarle por qué Buzzi había declarado eso y que el dirigente agropecuario le contestó "¿Y qué querés? Si no nos mataban", en alusión a la presión de "las bases" para seguir con el conflicto. "Nadie salió a desmentirme", dice por estos días Alberto Fernández al reafirmar la textualidad de su diálogo con Miguens.

La posición de Binner y del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pidiendo que los ruralistas vuelvan al diálogo con el Gobierno, le cayeron muy bien a la Presidenta, según un ministro que habló con ella el viernes, en un hueco de su agitada agenda en la Cumbre de Lima. El mismo ministro le pasó el resultado de una encuesta fresquita de esa mañana con datos relevados el día anterior miércoles, que de ellos el 71 por ciento estaba de acuerdo con su convocatoria al diálogo y que 67 por ciento quería que los ruralistas levanten el lockout. Otra buena noticia que recibió la Presidenta en Perú es la solicitada a favor del diálogo y del Acuerdo del Bicentenario que publicaron la UIA, Adeba, la Cámara de Comercio, la Bolsa y la Cámara Argentina de la Construcción, cinco de los integrantes del llamado Grupo de los 7.

En el Gobierno saben que, a esta altura, no hace falta ningún esfuerzo para que la Sociedad Rural se avenga a levantar el lockout y que lo mismo ocurre con Coninagro. Según el panorama que le pintan los productores agropecuarios de diálogo informal pero cotidiano con funcionarios del Gobierno, el problema se centra en la Federación Agraria y CRA. En la Federación Agraria las diferencias y la competencia entre Buzzi y Alfredo De Angeli, de Gualeguaychú, están más expuestas a la vista de los medios. Y según la óptica del Gobierno ambos se corren por izquierda para dirimir quién es más duro. En cambio, la distintas posturas en la CRA son más sigilosas, pero en la Casa Rosada dicen percibir claramente que Carbap, que nuclea a los productores de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, son los más intransigentes. En cambio ven que la otra confederación fuerte de la CRA, Cartez, donde están los productores de la llamada Tercera Zona es más propensa a volver a sentarse a la mesa del diálogo.

Todas estas tensiones internas volverán a ponerse en juego el miércoles, cuando vence el nuevo plazo del lockout. Allí se verá, otra vez, si levantan la medida o la continúan hasta el 25 de mayo, cuando los ruralistas harán su acto en Rosario. Si prima la decisión de continuar, el Gobierno mantendrá su estrategia de no confrontar públicamente, e incluso desalentarán al jefe de la CGT, Hugo Moyano, y a las distintas organizaciones sociales de su plan de cortar rutas para impedir la llegada de los ruralistas a Rosario. Es probable que esto sea trocado por otra marcha en paralelo del oficialismo, más allá del acto oficial de la Presidenta en la Posta de Yatasto.

Publicada el 18 de mayo de 2008.

Los “discursos” de la Patria

Por Ricardo Forster *

En política los ámbitos de disputa suelen desplazarse continuamente. A veces se trata de dirimir intereses sectoriales como si fueran colectivos; otras, núcleos simbólicos que parecen hundir sus raíces en el pasado fundacional de la Patria (así, con mayúsculas, como se pronuncia cuando se dice ser heredero de los genuinos padres fundadores) que son retomados precisamente por aquellos que buscan ofrecerse a sí mismos como garantía de la nacionalidad. Cuando es esto último lo que sucede, nos enfrentamos a una verdadera batalla que atraviesa lo retórico, que se detiene a “reinventar” un pasado a su medida y que persigue destituir cualquier otro relato que no sea el suyo del altar de la nación. En un sentido u otro, toda historia nacional constituye un campo de batalla que no sólo compromete al pasado narrado sino que, fundamentalmente, define el horizonte que se mira desde el presente. Por eso, cuando hablamos de la patria, cuando utilizamos a mansalva sus símbolos, cuando nos arropamos en los colores de la bandera o cuando nos ofrecemos como la “reserva moral de la nación”, estamos actuando políticamente, es decir, estamos disputando el poder.

Y de eso se trata en estos días argentinos; días de conflictos sectoriales que se ofrecen, nuevamente, como si fueran la expresión misma de los intereses compartidos de todos los habitantes de este suelo feraz. Cuando el estanciero Llambías habla de la Patria, lo hace invisibilizando una parte enorme de la sociedad y de la historia; cuando se pone la escarapela para reafirmar la condición patriótica de las entidades y de los hombres “del campo”, lo hace para dejar en claro que el Gobierno no representa la nacionalidad, que carece de esa legitimidad que viene del fondo azul y blanco de la historia y que ha sido primero sembrada y luego cosechada en las estancias de la Patria. En la retórica de la Sociedad Rural o en la de Carbap casi no hay diferencia entre las palabras “campo” y “Patria”; para el relato de los dueños de la tierra la patria hunde sus raíces en la labor de unas pocas familias patricias que han dado sus nombres a las calles de las ciudades argentinas y que han contribuido a escribir su historia (una historia en la que la violencia, la explotación, el genocidio de las poblaciones nativas, el desamparo de los peones, los múltiples negociados hechos siempre en nombre del conjunto de los argentinos y, claro está, de la patria, han sido prolijamente borrados de ese relato fundacional y luego expandido como una verdadera mitología). Los relatos de la historia nunca son inocentes; escuchar atentamente lo que tienen para decirnos es un modo de comprender lo que nos ha sucedido y lo que nos sigue aconteciendo allí donde el modo de describir los destinos de la nación define lo que se quiere hacer con la actualidad.



Durante mucho tiempo aprendimos, desde niños, a imaginar esa Patria nacida tranqueras adentro, de la misma manera que siempre nos dijeron que ésta había sido una tierra pródiga y libre que esperó con los brazos abiertos la llegada de los inmigrantes de “buena voluntad” (nada de anarquistas o de socialistas) que vinieran a trabajarla. Nadie nos contó de los latifundios, de la extraordinaria dureza con la que fueron tratados los trabajadores rurales, de las tierras áridas a las que fueron a parar muchísimos de esos inmigrantes que acabaron por irse a las ciudades o regresando a su antigua pobreza allende el Atlántico. Pero nos siguieron hablando de la Patria, de sus símbolos y cada fiesta patria se pusieron y nos hicieron poner la escarapela. De ese modo, junto con la casita de Tucumán, Belgrano y la bandera, San Martín y el cruce de los Andes, los verdaderos creadores y constructores de la Patria fueron los que hoy son sus herederos en la Sociedad Rural o, por las paradojas de la política, de la Federación Agraria que, en un inusual gesto de olvido histórico, ha preferido hacer borrón y cuenta nueva de su propia narrativa, de sus propios sufrimientos en manos de los que hoy son sus aliados. Todos juntos son “el campo y la Patria”; todos juntos se ponen la escarapela; todos juntos se lanzan a partirle el espinazo a otro modelo de país que osa cuestionar sus privilegios y su colosal renta; todos juntos salen a piquetear por las rutas argentinas para demostrar que ellos son la “reserva moral” de una nación que tiene que recuperar sus “verdaderos valores” extraviados en medio de tanto populismo anacrónico.

Un relato de la historia en el que nunca aparecen los derrotados, en el que todos los argentinos somos usufructuarios de los bienes producidos en el campo, en el que se entremezclan hasta alcanzar la indiferencia semántica palabras como “trabajo”, “honestidad”, “patria”, “valores”, “riqueza”, etc. Como si en el afuera de la tranquera estuviera lo impuro, lo que desde los albores de la nacionalidad amenaza nuestra esencia. Resulta insólito que en la actualidad volvamos a escuchar un discurso que parecía en parte disuelto como una pesadilla que había sido dejada atrás desde el retorno de la democracia. Pero lo reprimido retorna, lo que estaba allí, agazapado, vuelve a vociferar su mirada del mundo, su convicción de ser los dueños de la tierra, es decir, del país.

En torno de los discursos de la patria, acelerados hoy por el conflicto agropecuario y por la agudización de modelos antagónicos de país, se van dirimiendo no sólo las cosas del pasado sino, también, los horizontes del futuro. Discutir esas diversas narrativas no es cosa de historiadores ni de eruditos, es, ni más ni menos, cosa de lo público, es decir, del pueblo que no se reduce a la “gente del campo”. Es, también, poner al descubierto las desigualdades, las carencias, el lugar de cada quien en la historia y en el presente; es, tal vez, acercarnos a un nuevo 25 de mayo en el que, como hace tiempo no sucedía, volvamos a discutir qué tipo de sociedad queremos saliéndonos de las retóricas grandilocuentes que empiezan y terminan en una escarapela que sólo sirve para ocultar una vez más las hondas injusticias que nos atraviesan.

* Ensayista, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Publicada el 19 de mayo de 2008.

Argentina produce alimentos como para una población doce veces mayor a la actual

El granero y también el supermercado del mundo

Son 135 millones de toneladas de alimentos básicos, suficientes como para 450 millones de personas. Se exporta el 91,7 por ciento de lo que se produce, pero aun así los productores quieren subir los precios locales.

Por Roberto Navarro

Dos millones de personas no llegan a comer o comen mal en el país record de producción.

En Argentina se producen cereales, oleaginosas y carne vacuna, porcina, ovina y caprina. También aves, huevos, hortalizas, frutas, azúcar y miel. Además se capturan peces, moluscos y crustáceos. Y la lista sigue. En la extensa geografía nacional se producen centenares de variedades de alimentos. Con cifras de la Secretaría de Agricultura y de cámaras sectoriales y el asesoramiento de profesionales de la Facultad de Agronomía de la UBA, liderado por el investigador Sergio Britos, Página/12 preparó el mapa de la producción de alimentos básicos del país. En total, este año se producirán 135 millones de toneladas, cantidad suficiente para alimentar a 450 millones de personas. Es decir que con el actual nivel de producción se podría abastecer a una población 12 veces más grande que la que habita en la Argentina. Pero en el país existen más de dos millones de personas que no pueden consumir los nutrientes imprescindibles. En Argentina sólo queda el 8,3 por ciento de la producción: el resto se exporta. Aunque la incidencia de las ventas locales es mínima en el resultado de los grandes productores, la suba de los precios internacionales de los alimentos arrastró al alza los valores de los comestibles locales. En ese contexto se inscribe la puja por las retenciones móviles entre el Gobierno y las cámaras empresarias del sector agropecuario. Un Derecho de Exportación más bajo elevaría los precios locales, lo que disminuiría el consumo interno liberando un mayor excedente para exportar.

Argentina no es un país pobre, es un país injusto: la producción de trigo alcanza para elaborar un kilo de pan por día para cada habitante. La de los tambos para tres cuartos de litro de leche por persona por día. Es decir, mucho más de lo necesario. Pero las cifras del Indec muestran que más de dos millones de argentinos no consumen los nutrientes imprescindibles y hay consultores privados, como el sociólogo del Conicet, Agustín Salvia, que eleva esa cifra a cinco millones de personas. Sergio Britos, licenciado en nutrición y docente de la UBA, explicó a **Página/12** que "Argentina produce el equivalente a 26.000 calorías diarias por persona, pero sólo consume en promedio 2300. Con el excedente se podría alimentar a 410 millones de personas más", poco menos que la población de la Unión Europea.

La producción de carne vacuna, porcina, ovina y caprina es suficiente para que consuma medio kilo de carne diario por persona. También se produce lo suficiente para que cada argentino pueda comer un kilo de verdura y medio kilo de frutas por día. Una primera lectura invita a pensar que ante semejante abundancia de oferta los precios de los alimentos deberían ser bajos. Pero no es así. Desde mediados de 2007, el precio internacional del trigo, el maíz, la soja y el girasol –los cuatro granos de mayor incidencia en la canasta alimentaria– aumentaron un promedio del 75 por ciento. En ese período, en una de las cadena de supermercados que apunta a las clases populares, el paquete de un kilo de la harina aumentó 117 por ciento; los fideos, 116 por ciento; los huevos, 58 por ciento y la carne subió un 46 por ciento.

En marzo de 2002 **Página/12** presentó el primer mapa de la producción de alimentos básicos del país, con las mismas características que el de hoy. En ese momento, se producían 99 millones de toneladas, que alcanzaban para satisfacer las necesidades alimentarias de 330 millones de personas. Seis años después el país puede alimentar un 36 por ciento más de personas. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social aumentó las partidas destinadas a distribución de alimentos gratuitos entre 2006 y 2007 en un 23 por ciento, pasando de 752 a 926 millones de pesos. Y según una encuesta realizada por la cartera de Salud, el 32 por ciento de los niños y niñas menores de 12 años del país tuvo que recibir algún tipo de asistencia alimentaria durante 2007. En el Gran Buenos Aires el 40,7 por ciento de los niños recibió alimentos en comedores, colegios o en sus casas. Y, aunque como se cita más arriba, en el país se produce el equivalente a tres cuartos de litro de leche por persona diarios, el 29 por ciento de los menores de dos años recibió leche en polvo de algún plan alimentario durante el año pasado. Este registro se elevó al 51 por ciento de los chicos en el noreste argentino y al 54 por ciento en el noroeste.

El país produce una enorme cantidad de alimentos, pero los vende a precios cada vez más lejanos del bolsillo popular. Por eso terminan en las mesas de habitantes de países que sí pueden pagarlo. En la última década las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 92 por ciento. Los principales compradores son Alemania, Holanda, Italia y Gran Bretaña, países con un ingreso per cápita promedio de 4000 dólares mensuales, diez veces más que el promedio local. Desde la salida de la convertibilidad el precio del novillo en el Mercado de Liniers aumentó 450 por ciento y el salario promedio, 152 por ciento. De todas maneras, el precio del kilo de carne es carísimo para el consumidor argentino. Al productor le sigue conviniendo exportarlo a tres dólares que venderlo en el mercado interno.

Los especialistas consultados por este diario coincidieron en que la producción nacional de alimentos no sólo es importante en cantidad, sino también en variedad y calidad. Además de ser el primer exportador mundial de aceite y también el primero de girasol, es el segundo en ventas externas de maíz y maní y el tercero de soja. Pero en los últimos años se convirtió además en el líder en los mercados internacionales de miel, de peras y de limones. También está avanzando rápidamente en el ranking de ventas de arándanos y de productos orgánicos. En pocos años se convirtió en un jugador importante en el mercado de aves. Y está exportando incluso equinos, conejos, búfalos y ñandúes.

Cuando este diario realizó el primer mapa de la producción en el 2002 el campo producía 72 millones de toneladas de granos en 28 millones de hectáreas. Dentro de esa misma área también se alimentaban 50 millones de cabezas de ganado. En la actualidad se utilizan 30,3 millones de hectáreas para producir un 32 por ciento más de granos. Y la producción de carne, aún con un pequeño aumento en la cantidad de cabezas, creció un 50 por ciento. Semejante aumento de la productividad, sumado al impresionante incremento de los precios internacionales, llevaron a que entre el sector agropecuario y el agroindustrial participaran en el 60 por ciento de las exportaciones del año pasado y fueran los responsables del 70 por ciento del crecimiento de las ventas externas de 2007 con respecto a 2006.

En total, entre alimentos primarios y manufacturados, el año último se exportó por 28.800 millones de dólares. La contracara de ese boom la ofrece la Encuesta Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud, que precisa que "el 34,5 por ciento de los niños de entre 6 y 72 meses sufren de anemia por recibir una ingesta inadecuada". Además, precisa que "el 28 por ciento de estos chicos no consume la cantidad suficiente de calcio, al 19,8 por ciento le falta hierro y al 23,8 por ciento le falta vitamina A, por consumir poca carne, verduras, huevos y lácteos".

Publicada el 18 de mayo de 2008.

